

# Memorias y Resistencias: las luchas por la vida y la defensa del territorio en el Oriente antioqueño

Comité de Formación e Investigación del Movete



# Memorias y Resistencias: las luchas por la vida y la defensa del territorio en el Oriente antioqueño

Sistematización realizada por el Movimiento Social  
por la Vida y la Defensa del Territorio  
– Movete y el Comité de Formación e Investigación

Financian:



Memorias y Resistencias:  
las luchas por la vida y la defensa del  
territorio en el Oriente Antioqueño.  
265 p., 16 x 23 cm  
ISBN: 978-958-56839-6-9

# Contenido

**Movimiento Social Por La Vida y La Defensa del Territorio MOVETE.**

**Coordinación del libro**

Omar Andrés Osorio García

**Equipo de investigación y construcción colectiva del Movete**

María Alejandra Villada Ríos

Andrés Jiménez

Juan Bernal

Johan Andrés Higueta Granada

Alejandra Salazar Botero

Juan David Arias Henao

Laura Rupp

Miguel Ángel Romero

**Prólogo**

Benito Guarín

**Colaboración en el Capítulo 3**

Deysy Alexandra Zuluaga Muñoz. Abogada especialista en DDHH y DIH. Lideresa comunitaria de la región del Oriente antioqueño y del Movete, municipio de La Unión. Correo: abogadafeminista@gmail.com

**Revisión de contenido**

Bladimir Ramírez

**Diseño de la línea del tiempo**

Bryan Montoya. Comité de Comunicaciones del Movete.

**Diseño del Mapa de Conflictos Socioambientales**

Juan Estiven Patiño

**Edición y corrección de estilo**

Sara López Acevedo. Editorial Periferia

**Diagramación y diseño**

Juan David Gil Villegas

**Impresión**

Taller de Artes Gráficas Periferia

Diciembre de 2018

<b>Prólogo</b> .....	7
Benito Guarín	
<b>Presentación</b> .....	13
Juan Fernando Bernal y Bladimir Ramirez	
<b>Capítulo 1</b> .....	21
<b>Del Movimiento Cívico del oriente antioqueño al Movete</b>	
Johan Andrés Higueta Granada y Laura Rupp.	
<b>Capítulo 2</b> .....	91
<b>La lucha por la defensa de lo común: aproximación a los conflictos socioambientales desde el Movete</b>	
María Alejandra Villada Ríos y Andrés Felipe Jiménez Gómez	
<b>Capítulo 3</b> .....	137
<b>Acciones colectivas del Movete: caminos de reivindicación e inci- dencia por la defensa del territorio</b>	
Alejandra Salazar Botero.	
<b>Capítulo 4</b> .....	175
<b>La defensa del Samaná Norte: el último río “libre” de Antioquia “libre” de Antioquia</b>	
Juan David Arias Henao.	
<b>Capítulo 5</b> .....	207
<b>Plan estratégico, balances y proyecciones del Movete</b>	
Juan Bernal y Omar Andrés Osorio García	
<b>Reflexión final</b> .....	233
<b>La lucha es por la vida</b>	
Omar Andrés Osorio García	
<b>La vida campesina en el Oriente Antioqueño</b> .....	235
Concurso de Fotografía	

**Editorial Periferia**  
www.periferiaprensa.com  
periferiaprensaalternativa@gmail.com  
Tel: +57 (4) 231 08 42

## **Prólogo**

Hablar de memoria en el Oriente antioqueño significa recrear los recuerdos sobre las diferentes etapas vividas en la región; para ello tenemos que remitirnos a la década del 60, cuando nuestro territorio se convirtió en una de las regiones más codiciadas y atractivas para la imposición del Desarrollo y la implementación de los megaproyectos para la generación de energía eléctrica. En esa época, no era fácil para las comunidades visualizar la importancia que para el empresariado tenía nuestra región, y mucho menos entender los rendimientos económicos que el negocio les produciría; sin embargo, las dinámicas asumidas en la región fueron dando cuenta de ello.

Lo primero que sucedió fue la reubicación de la cabecera municipal del viejo Peñol para la construcción de la represa por parte de Empresas Públicas de Medellín; hoy, 48 años después, aún existen familias con problemáticas por la inundación de sus propiedades que la empresa todavía no ha resuelto. Luego vinieron los asesinatos de dirigentes populares, las masacres, los desplazamientos de grandes franjas de la población y la persecución hacia el Movimiento Cívico (no hablo de exterminio, porque si hubiese sido así, no estaríamos escribiendo la historia). Todo esto da cuenta de los intereses foráneos en el territorio y la magnitud de la crisis humanitaria que ha generado la llegada de dichos megaproyectos a la región.

La resistencia es sinónimo de fuerza, y a su vez el arma con que se enfrenta a la tiranía, la exclusión y todas las formas de opresión contra el pueblo y sus comunidades. Esta puede manifestarse desde la expresión armada en abierta confrontación militar contra el régimen, o también desde la aglomeración de personas, procesos y movimientos, donde se emplea la fuerza de la palabra, los argumentos y la razón. El Oriente antioqueño ha experimentado ambas, prevaleciendo la segunda, desde donde aún continuamos haciendo resistencia al modelo extractivista que se sigue imponiendo en la región.

De manera general quiero plantear algunos aspectos que sin duda se detallarán a lo largo de los cinco capítulos que componen el libro, de acuerdo a la temática que corresponda a cada uno de ellos. Empiezo por mencionar solamente algunos de los impactos negativos que ha traído la implementación del modelo extractivista en la región. Las empresas siempre llegan diciendo que la implementación del proyecto traerá mucho desarrollo y empleo, y no es del todo mentira. Aunque si se analiza, el desarrollo que estas empresas han alcanzado es inmenso, pero solo para ellas, pues han logrado consolidar su negocio amasando grandes capitales e incluso realizando inversiones en otros países. En cuanto al empleo, durante la construcción de las obras se generan algunos puestos de trabajo, entre más grandes sean estas, mayor empleo se demanda; pero mientras que el mega-proyecto lo explota la empresa durante toda su vida útil, el empleo es solamente temporal para la población, ya que dura mientras se construye dicha obra ¿Finalmente quién se beneficia más?

Por otro lado, la construcción de dichas mega obras (hidroeléctricas) provoca una des-configuración total del territorio en los diferentes aspectos económicos, sociales, culturales y ambientales, por ejemplo: en lo económico, un territorio donde prevalece el minifundio, la inundación de 2000 hectáreas de tierra de las más productivas fácilmente

puede estar generando el desplazamiento del área productiva de unas 200 familias (haciendo un cálculo aproximado de 10 hectáreas por familia campesina). Con ello se genera una pérdida en la economía campesina y la soberanía alimentaria, a la par con un encarecimiento del costo de vida, puesto que asuntos básicos como los alimentos se tienen que importar desde la capital u otros municipios.

En el aspecto social, la llegada en masa de personas ajenas para trabajar en los proyectos, muchas veces con vicios y/o costumbres diferentes, más la circulación de dinero, les imprime nuevas dinámicas a los territorios. Por ejemplo, en San Carlos, mientras se construía el embalse de Punchiná, se construyó un prostíbulo inmenso para suplir la demanda sexual de los trabajadores; en un municipio tan católico como este, dichas dinámicas afectaron enormemente las costumbres arraigadas y culturas propias de la población. Mientras el negocio les generaba rentas a los comerciantes, dejaba impactos nocivos como la ruptura de matrimonios, el madresolterismo y descomposición familiar.

En el aspecto cultural no es menos traumático el asunto, pues la población de los cascos urbanos tiene que adaptarse a situaciones como ruidos exagerados, riñas callejeras, alto consumo de alcohol, drogadicción y otra serie de situaciones que producen descomposición social. En el caso de los campesinos desplazados por los megaproyectos, estos tienen que adaptarse al estilo de vida urbano, a ser obreros y a pagar por los alimentos que antes cultivaban, pues su tradición campesina hasta entonces era la de trabajar el campo, criar animales y practicar la agricultura, en un ambiente de tranquilidad propio de la ruralidad. Esta situación resulta profundamente humillante para las comunidades.

En el aspecto ambiental es más crítico todavía: ríos embalsados; a mayor espejo de agua, mayores precipitaciones; cambios drásticos en el clima; terrenos aledaños a los embalses que se vuelven improductivos; paisajes forestales naturales

convertidos en enormes placas de cemento, entre otros. Todo esto puede entenderse como una des-configuración total del territorio. Pero ¿todo esto a cambio de qué?

Muy cercano a cumplirse medio siglo de iniciada la transformación del Oriente antioqueño, como consecuencia de su adecuación para la generación de energía eléctrica, seguimos esperando el “desarrollo” prometido. En contraste con las astronómicas ganancias que las empresas sacan del territorio, en el grueso de la población subsisten elevados niveles de pobreza y, lo más grave, la amenaza latente de una nueva re-victimización, dado que aún quedan ríos y quebradas en la mira de las empresas, con licencia, auspicio y padrinazgo de la corporación encargada de “proteger” los bienes comunes (mal llamados recursos naturales) de la región.

Así, la deuda social que dichas empresas tienen con nuestros territorios y sus gentes es enorme. Se deben establecer mecanismos y acciones para que dicha deuda sea saldada: la violencia desatada con la imposición de los mega-proyectos, los fuertes impactos socio-ambientales sobre el territorio, las violaciones a los Derechos Humanos ocurridas en territorios de interés extractivo, las infracciones al Derecho Internacional Humanitario, entre otros, son los temas que deben tenerse en cuenta para buscar esclarecimiento y sanciones para los responsables.

En ese sentido, es clave comprender la incidencia que han tenido en la región personajes como Álvaro Uribe Vélez, pues existen diferentes ciclos o períodos que responden a sus intereses y acciones. Por ejemplo: siendo alcalde de Medellín y presidente de EPM, fueron reprimidos los paros de los 80, las Juntas Cívicas y el Movimiento Cívico en general; siendo gobernador de Antioquia ejerció la más férrea estigmatización contra las comunidades de Unidos por San Carlos y Oriente Unido, creó las Convivir, abriéndole paso al paramilitarismo que más tarde implantó el terror en la región, y comenzaron entonces las masacres en San Rafael, después en

San Carlos, hasta recorrer todo el Oriente antioqueño; siendo presidente de la República, continuó con la maquinaria de muerte y terror, promovió y auspició los “falsos positivos” con recompensas en dinero y vacaciones para sus ejecutores, convirtiendo esta modalidad en uno de los instrumentos de violencia más degradantes e inhumanos en la historia del país sobre la población; como senador de la República continúa ejerciendo el poder sobre la región, tanto el poder militar (en sus más oscuras expresiones) como el político-electoral (como quedó claro en las pasadas elecciones); ello indica que en el Oriente gran parte de sus propias víctimas le mantienen anclado al poder.

Con los nefastos antecedentes que guarda la historia de los movimientos sociales y políticos en el Oriente antioqueño, no es descartable una nueva arremetida y oleada de violencia en contra de las organizaciones populares, procesos sociales y movimientos que nacen hoy de nuevo en la región, pues desde las empresas y la institucionalidad se mantiene el acoso por la apropiación y saqueo de las aguas que quedan libres, y de los demás bienes comunes de nuestro territorio.

Finalmente, saludo esta importante iniciativa y esfuerzo por brindar, a través del presente libro, la oportunidad de conocer los estragos, impactos y perjuicios tan negativos que han sufrido (y pueden seguir sufriendo) estas comunidades orientales, a quienes les han prometido desde hace décadas sacarla del supuesto “atraso”, pero quienes finalmente en lugar de beneficiarse se han convertido en víctimas del tan mencionado “desarrollo”. Además, extendiendo una invitación a la juventud a leer esta importante obra, pues finalmente ustedes, las nuevas generaciones, son quienes están llamadas a ponerse al frente de lo que está pasando y lo que vendrá. Con aprecio y cariño.

*Benito Guarín, 1 de diciembre del 2018.*

*Dirigente campesino de la Asociación de Pequeños y Medianos Productores del Oriente antioqueño (ASOPROA), líder histórico de la región y cofundador del Movimiento Social por la Vida y la Defensa del Territorio - Movete.*



# Presentación

*Juan Fernando Bernal<sup>1</sup>*  
*Bladimir Ramírez Valencia<sup>2</sup>*

Este libro que ponemos en sus manos es el resultado de uno de los procesos organizativos que se han gestado y vivido en el Oriente antioqueño en torno a la defensa del territorio en los últimos años, concretado en 2013 con la conformación del Movimiento Social por la Vida y la Defensa del Territorio – Movete, que indaga por las raíces que le dieron origen a estas nuevas luchas y reivindicaciones por la autonomía, la vida y la paz en este territorio. No pretendemos con este libro abarcar todas las memorias y las luchas que se han dado en estos años, pero sí hacer un aporte importante para registrar, desde los mismos integrantes del movimiento, esos pasos que han aportado a la construcción de un movimiento social, que, al día de hoy, es referente de la defensa del territorio en el ámbito local, regional, departamental y nacional.

---

1 Comunicador social y periodista en la región del oriente antioqueño. Investigador comunitario e integrante del Movete. Correo electrónico: [juanfernandobernal@gmail.com](mailto:juanfernandobernal@gmail.com)

2 Docente Universidad de Antioquia y Universidad EAFIT. Abogado e investigador en temas de conflicto armado y derechos humanos. Integrante del Movete. Correo electrónico: [bladimir.ramirez@udea.edu.co](mailto:bladimir.ramirez@udea.edu.co)



El presente trabajo no es un capricho, es más bien una necesidad que nace de la importancia de recoger las memorias del territorio, de su defensa y de los pobladores, rurales y urbanos, que han puesto su corazón y su razón a favor de mejores opciones para el territorio que habitan y que sienten como suyo. Partimos para esto de una noción amplia del territorio, en la que comprendemos las relaciones de transformación e identidad, en sentido de reciprocidad, que se dan entre el espacio físico que se habita y las comunidades que nacen, se asientan y reconstruyen de manera continua propuestas y apuestas para el bienestar y la vida digna.

Además, consideramos que desde la academia también se aporta a la defensa del territorio con la contribución de nuevas propuestas. Por poner un ejemplo, cuando participamos del Seminario Latinoamericano de Alternativas al Desarrollo, Ecología Política y Bienes Comunes, en la Universidad Pontificia Bolivariana, la reflexión que quisimos aportar como movimiento en términos académicos, era la de trascender las líneas de texto y ponencias que se quedaban encerradas en las paredes de las universidades, donde pocos tienen acceso a este conocimiento.

Es por estas y otras razones que la asamblea del Movimiento, en el año 2017, encargó a su Comisión de Formación e Investigación iniciar un proceso de sistematización del Movete, que permitiera recoger la experiencia organizativa y las luchas y reivindicaciones que se han dado en este territorio, incluyendo el contexto histórico, los conflictos socioambientales, las acciones colectivas del movimiento, las experiencias de organización popular y comunitaria, y las proyecciones tejidas hasta el día de hoy. Para ello la Comisión empezó a tocar puertas y gracias al apoyo de la Tulpa Comunitaria del municipio de La Unión (organización que hace parte integral del Movete) se presentó un proyecto a la Corporación Podion y el Fondo de Pequeños Proyectos Programas Solidarios Itacho, con el cual iniciamos el proceso de definición de los componentes de esta sistematización.

En consecuencia, el presente texto se divide en cinco capítulos que son complementarios, pero que comprenden un proceso de sistematización propio y autónomo, por lo que pueden ser leídos desde la lógica de la diversidad al interior del movimiento.

El primer capítulo recoge la historia del movimiento, haciendo una retrospectiva por las luchas cívicas y populares previas que se vivieron en el territorio asociadas a su defensa. Abarca hasta el 2013, año en que se constituye el Movimiento Social por la Vida y la Defensa del Territorio. En el segundo capítulo de este libro se abordan los conflictos socioambientales que se viven en la región y a los cuales el movimiento ha hecho frente en estos cinco años de proceso organizativo. El tercer capítulo se centra en algunas de las principales acciones colectivas del movimiento, y aunque no alcanza a profundizar sobre el aspecto local, logra mapear cómo se han construido, vivido e implementado los repertorios de movilización e incidencia desde el Movete y los resultados que estos han tenido. En el cuarto capítulo se presenta, en forma de estudio de caso, cuál ha sido el proceso que se ha vivido frente a la cuenca del Samaná y los ríos que lo alimentan, sus luchas por la resistencia y la organización comunitaria. Por último, el quinto capítulo recoge el plan estratégico del movimiento y las proyecciones de su trabajo construidas en la asamblea del año 2018.

En este orden de ideas, este ejercicio de sistematización permite evidenciar cinco elementos claves para entender la apuesta social, política y organizativa del Movete:

Primero, logra identificar con nitidez la continuidad, durante un arco considerable de tiempo, de un conjunto de exigencias y reivindicaciones en la región en torno a las problemáticas del territorio, ligadas en su mayoría al aprovechamiento de los recursos estratégicos del mismo. A pesar de los avatares de los años, las banderas del movimiento social siguen siendo las mismas.



Segundo, la definición de un antagonico que por lo general es el Estado (ya sea mediante entidades descentralizadas como Cornare o EPM, o entes como la Gobernación y la Fuerza Pública) o un actor privado con capacidad de definición sobre lo político en el territorio, como lo son los grupos económicos o las empresas.

En tercer lugar, debe destacarse que el movimiento social en el Oriente antioqueño no se ha limitado única y exclusivamente a repertorios de movilización y protesta, sino que ha trascendido como proceso en la construcción de espacios organizativos de cara a la solución de los problemas de los habitantes en las diferentes localidades; es decir, ha configurado una base social y una estructura organizativa de naturaleza democrática para la toma de decisiones y la división del trabajo, convirtiéndose también en una escuela de dirigentes populares.

El cuarto elemento es que, independiente de los picos y valles propios de las coyunturas y la movilización social, hay una tradición organizativa de actores sociales y políticos con una visión alternativa y por la defensa del territorio en el Oriente antioqueño; dicho de otro modo, hay una permanencia, no solo de las problemáticas, sino de procesos organizativos que no se diluyen en los meros acontecimientos.

El quinto y último elemento es la existencia de un discurso y práctica de identidad imbricada a la memoria, esto es, la construcción de un sujeto histórico y político con unos rasgos particulares que le dan identidad; el agua, el alimento, la música y el repentismo han sido la amalgama de las luchas populares y cívicas del Oriente.

Total, cuando se presenta un claro conjunto de reivindicaciones, la definición de un antagonico a quien se le exigen las mismas, la certeza de una base social y una estructura organizativa, la permanencia de los procesos, las resistencias y las propuestas, y la configuración de una identidad

como orientales, podemos decir que estamos ante un Movimiento Social en perspectiva de construcción de poder en el territorio.



*Mobilización en el municipio del peñol - Tomada del libro "El Ave Fénix. Relatos sobre la historia de un pueblo que emerge de sus cenizas. El Peñol: Una historia para contar" Autor: Humberto León Rivera Galeano.*

## **Del Movimiento Cívico del Oriente Antioqueño al Movete: un recuento de las luchas populares y ambientales en la región**

---

Johan Andrés Higueta Granada<sup>3</sup>

Laura Rupp<sup>4</sup>

*“El Movimiento Cívico del Oriente antioqueño de los años ochenta forjó un sentido de pertenencia territorial lleno de sentido político: como “productores” de un importante porcentaje de la energía nacional, como una colectividad “injustamente” tratada por el Estado nacional en su política energética y como una colectividad con capacidad de pensar su región, de enfrentarse a los poderes públicos y de reivindicar lo suyo. Con la política energética en el oriente antioqueño, el Estado nacional no sólo produce como reacción sentido de pertenencia a un lugar circunscrito localmente, sino que éste adquiere sentido en la misma medida en que esos habitantes se comprenden como parte de una territorialidad mayor: un país que se sirve de la energía producida en su territorio y un Estado que los interpela y frente al cual hacen sus reivindicaciones”.*

**Clara Inés García**

---

<sup>3</sup> Sociólogo de la Universidad de Antioquia (Colombia) e investigador social de la Corporación La Tulpa Comunitaria. Correo: investigador.social27@gmail.com

<sup>4</sup> Pregrado en Ciencias Regionales de América Latina de la Universidad de Colonia (Alemania), cooperante internacional en la Corporación Jurídica Libertad y de servicio civil para la AGEH. Correo: laurarupp@posteo.de

El presente capítulo hace un breve recuento de la trayectoria de las luchas populares y ambientales en el Oriente antioqueño a partir de la década de 1960 hasta la actualidad (año 2018), estableciendo una pregunta por cómo han emergido y se han configurado los movimientos sociales y políticos en la región. Se busca establecer un hilo de continuidad entre los diversos procesos de organización popular y movilización social que se han gestado en el territorio (Juntas Cívicas, Movimiento Cívico, Oriente Unido, organizaciones de víctimas, Movete), dando algunas puntadas generales sobre las características y avances de cada uno de estos de acuerdo a los diferentes periodos. Para efectos de la presente investigación, la periodización que se propone en términos generales es la siguiente:

- **1960-1981:** llegada del discurso del desarrollo, planificación regional desde arriba, imposición de los mega-proyectos sobre la región e inicio de la resistencia comunitaria en las localidades con la organización de los primeros movimientos y paros cívicos.
- **1982-1997:** la articulación regional con el surgimiento del Movimiento Cívico del Oriente antioqueño, disputa por el poder político, inicio de la dinámica del conflicto armado en la región y oleadas de violencia política contra líderes y bases sociales del movimiento.
- **1998-2006:** ocaso del movimiento social y de las alternativas políticas, agudización de la confrontación armada en el Oriente, catástrofe humanitaria, surgimiento de las organizaciones de víctimas en resistencia a la guerra e intervencionismo de las ONG's y el Estado.
- **2007-2018:** resurgimiento del movimiento social en el Oriente antioqueño con el Movete, reconstrucción del tejido social y organizativo, nueva oleada de imposición de mega-proyectos y continuidad de la resistencia en contra del modelo de desarrollo extractivista.

## El cuento de La Cenicienta: la llegada del discurso del desarrollo al Oriente Antioqueño

En enero de 1949 Harry Truman, presidente electo de los Estados Unidos pronunció un discurso cargado en apariencia de “buenas intenciones”, conllevando una falsa “solidaridad” hacia el resto de los países del mundo; este estableció en el plano mundial una división tajante entre las naciones, según los conceptos que usó en su intervención: por un lado están los países desarrollados y por el otro los sub-desarrollados y tercermundistas. Con esto hacía alusión a que existen unos países poderosos y prósperos (dominantes en realidad) como lo es el caso de los Estados Unidos, un país anclado a una economía capitalista e imperialista que se erigió como potencia mundial después de superada la Segunda Guerra Mundial; y por otro lado, existen otros países, más de la mitad de la población del mundo según su propio discurso, que se encuentran inmersos en la pobreza y la enfermedad con una vida económica “primitiva” y “estancada” (Escobar, 2007, p.19).

Así, la misión de su gobierno y su país sería, supuestamente, la de poner su “conocimiento técnico” al servicio de los países menos avanzados económicamente (caso América Latina), ya que a través del capital, la ciencia y la tecnología estos países también podrían desarrollarse y abandonar su condición de atrasados. Truman olvidó decir que prácticamente la riqueza de los primeros se erigió y acumuló sobre la pobreza de los segundos; olvidó mencionar, tal vez intencionalmente, que a esto obedecían las desigualdades sociales y económicas entre los distintos continentes. El antropólogo Arturo Escobar plantea que la doctrina Truman inició una nueva era en la comprensión y el tratamiento de los asuntos mundiales y que:

El propósito era bastante ambicioso: crear las condiciones necesarias para reproducir en todo el mundo los rasgos característicos de las sociedades avanzadas de la época: altos

niveles de industrialización y urbanización, tecnificación de la agricultura, rápido crecimiento de la producción material y los niveles de vida, y adopción generalizada de la educación y los valores culturales modernos (Escobar, 2007, p.20)

El discurso del desarrollo se estableció entonces como la continuidad de la visión del blanco europeo en el siglo XVI, cuando a través de La Conquista de América se determinó desde el poderoso opresor la división tajante entre salvajes y civilizados, los primeros (las comunidades autóctonas) siendo obligados a ser como los segundos (el invasor que se imponía). Lo que dicho discurso enmascaraba en realidad era una continuación del colonialismo, las naciones “pobres” y “atrasadas” debían renunciar a lo que eran, a su identidad, a su historia, a sus culturas y raíces, para adaptarse a un modelo de sociedad fabricado desde arriba y desde intereses ajenos a los territorios. Un modelo que no se correspondía con lo que en realidad eran, pero que en el nuevo orden mundial se imponía como el ideal ser ocultando los intereses soterrados de los Estados Unidos con su hegemonía mundial. Gustavo Esteva (1996) plantea al respecto que “desde entonces, el desarrollo connota por lo menos una cosa: escapar de una condición indigna llamada subdesarrollo” (p.53), y esa condición indigna en realidad quiere decir negar lo que se es, para transitar casi que de manera obligada hacia la forma de vida de otros que, implícitamente se consideran superiores a los demás. Según un informe de las Naciones Unidas realizado en 1951 por un grupo de expertos sobre la implementación de dicho modelo de desarrollo económico en los países “sub-desarrollados”, se advertía que:

Hay un sentido en el que el progreso económico acelerado es imposible sin ajustes dolorosos. Las filosofías ancestrales deben ser erradicadas; las viejas instituciones sociales tienen que desintegrarse; los lazos de casta, credo y raza deben romperse; y grandes masas de personas incapaces de seguir el ritmo del progreso deberán ver frustradas sus expectativas de una vida

cómoda. Muy pocas comunidades están dispuestas a pagar el precio del progreso económico” (Como se citó en Escobar, 2007, p.20)

Entre líneas puede advertirse la imposición violenta que significaba dicho modelo económico, que arrasa con las construcciones propias de las comunidades y territorios (economía, relaciones sociales, formas de organización, identidad, etc.). Fue este, por ejemplo, el caso concreto que sufrió la región del Oriente antioqueño en Colombia a partir de la década de 1960, como se detallará más adelante. Así, “ajustes dolorosos” se le llamaba entonces al proceso donde gran cantidad de comunidades en sus territorios debían “ver frustradas sus expectativas”, es decir, abandonar sus prácticas culturales, económicas, políticas y sociales, para lograr aquello que los expertos describían como “progreso económico”. Pero ¿si este modelo de desarrollo no obedecía a las necesidades e intereses de las poblaciones, entonces para quién era dicho “progreso”? El discurso del desarrollo se convirtió en una suerte de parodia del cuento de La Cenicienta donde de la nada aparece un hada madrina que por arte de magia te transforma de sirvienta a princesa, pero claro, esto solo sucedía en los cuentos.

Dicho discurso e imposición violenta vino a aterrizar en Colombia ya para la década de 1960. Alianza para el Progreso fue el nombre que recibió la política exterior que establecieron los norteamericanos para su patio trasero de América Latina; el presidente John F. Kennedy destinó alrededor de 20.000 millones de dólares para invertir en infraestructura, desarrollo industrial, modernización de las instituciones estatales, reforma agraria, intervención social, educación, salud, entre otros. En Colombia los presidentes Alberto Lleras Camargo y Guillermo León Valencia fueron los encargados de implementar dicha política.

En apariencia este programa se enfocaba en mitigar las necesidades de las poblaciones, sin embargo, el interés oculto

era el de combatir al enemigo interno<sup>5</sup>, es decir, quitarle el asidero que el discurso del comunismo amparado en la Unión Soviética, China y Cuba pudiera encontrar en la región latinoamericana; así dicha política fue solo un paliativo frente a las desigualdades reales en Colombia, ya que en realidad lo que buscaba de manera estratégica era frenar la expansión guerrillera en el país y el subcontinente, y quitarle peso al discurso político-insurgente que se amparaba en las desigualdades e injusticias que sufrían las poblaciones. También, por partida doble, pretendía avizorar nuevos territorios a los cuales pudiera llegar la inversión extranjera para continuar su acumulación excesiva de capital, saqueando y aprovechándose de los recursos (mejor, bienes comunes) de que disponían otros territorios.

En este contexto, unas de las regiones colombianas que sirvió de laboratorio para la implementación de dicho modelo fue la del Oriente antioqueño, catalogada como un “polo de desarrollo”. Como plantea Clara Inés García, esta pasó de ser una región sin mucha relevancia para los sectores de poder en el país a ser un territorio geoestratégico para la consolidación del desarrollo económico de Colombia durante las décadas de 1960-1970 (García, 2007, p.135). Al respecto comenta el investigador Orlando Sáenz que el Oriente antioqueño se erigió como un “conejiillo de indias” en el país, una de las regiones pioneras donde se aplicó la planificación del desarrollo, e incluso, según el autor, fue la primera región en Colombia que contó, hacia 1964, con “un plan de desarrollo regional” aun cuando no existía todavía un Plan de Desarrollo Departamental de Antioquia (Sáenz, 1986 p.46); en parte ello obedecía a que la élite industrial del Valle de Aburrá, sector además de gran poder político en el departamento y el país, había avizorado ya este territorio como un “espacio natural de expansión de su actividad económica” (Sáenz, 1986, p.46). A partir de allí la región oriental del departamento de Antioquia empezó a ser pensada y planeada desde afuera y

5 La idea del “enemigo interno” se difundió en el marco de la Guerra Fría, éste era entendido como un enemigo con potencial de destruir o afectar el “orden nacional”; así sirvió de excusa perfecta para aumentar el control y la represión sobre los sectores opositores al modelo económico, y statu quo.

desde arriba, es decir, desde el poder central y las empresas con sus intereses económicos, sin ningún tipo de reconocimiento, consideración o mediación con las comunidades que tradicionalmente habían habitado y construido el territorio. Así, se destinaron una serie de mega-proyectos para intervenir la región, los cuales generaron una brutal reconfiguración de su forma de vida tradicional, pues el Oriente antioqueño hasta entonces era una región eminentemente campesina y rural, arraigada a una cultura religiosa y conservadora, sin mucha conexión entre sus localidades, y con una vocación económica agraria, por lo que era una de las despensas agrícolas más importantes del país.

Son fundamentalmente cinco los procesos desprendidos de la lógica del desarrollo que impactan fuertemente sobre la región a partir de la década de 1960:

- La construcción de un complejo hidroeléctrico con el represamiento de los ríos más caudalosos del Oriente antioqueño para la producción de energía eléctrica, con la intencionalidad de suplir la demanda nacional de energía que se requería para el funcionamiento y establecimiento de la industria, a la par que el crecimiento desmedido de los centros urbanos. Entre 1970 y 1980 el Oriente producía alrededor del 60% de la energía eléctrica nacional, y en la actualidad sigue aportando el 36% (García, 2007, p.135).
- La construcción de la autopista Medellín-Bogotá, que prácticamente se impuso y partió la región en dos, buscando conectar las dos principales capitales del país a partir de un eje vial, que fue vital para la consolidación del mercado interno en Colombia (García, 2007, p.135).
- El Aeropuerto Internacional José María Córdova que conecta a la región y la ciudad de Medellín con el mercado internacional, a través del “flujo de bienes y pasajeros”, convirtiéndose en un incentivo para el asenta-

miento de la industria y la producción económica para la exportación (García, 2007, p.136).

- La urbanización e industrialización del Oriente cercano en la zona aledaña al Valle de Aburrá, pues la expansión urbanística e industrial en la capital del departamento (Medellín) provoca que se generen procesos de migración hacia la zona, afectando las formas tradicionales de vida de comunidades históricamente campesinas y rurales (Sáenz, 1986, p. 43).
- La implementación del programa de Desarrollo Integral Rural en el Oriente antioqueño en la década de 1970, que afecta y transforma la agricultura tradicional y la economía campesina, pasando a implantar modelos de producción como el monocultivo, el latifundio y la utilización de los agro-tóxicos (Sáenz, 1986, p.44).

Dichas intervenciones en el territorio, agenciadas desde actores externos en alianza con las élites regionales y locales (políticos tradicionales de los municipios), provocaron una serie de impactos nocivos en términos culturales, sociales, económicos, ambientales y políticos sobre la región. Estas imposiciones que violentaron excesivamente a la población generaron como respuesta un brote de protestas, dando apertura a un ciclo de movilizaciones sociales y fortalecimiento de la organización popular en el Oriente antioqueño que, en primera instancia, mantuvo un carácter local. Los procesos organizativos eran jalonados por los habitantes de los municipios más afectados, para manifestar su desacuerdo con las obras y exigir participación dentro de las decisiones que se tomaban sobre sus territorios. Este es el caso de municipios como San Carlos, La Unión, Guatapé, El Peñol, San Rafael, Granada, Marinilla y La Ceja, como se verá a continuación.

## **El surgimiento de las Juntas Cívicas: inicio de la resistencia comunitaria en las localidades**

Como se mencionó anteriormente, el Oriente antioqueño sufrió por lo menos cinco procesos e intervenciones diferentes, desprendidos de la planificación del desarrollo regional a partir de la década de 1960. Ello propició una serie de afectaciones sobre los territorios y las comunidades, generando a la par, como respuesta por parte de los pobladores, la organización de una serie de movimientos y paros cívicos en los municipios más afectados para manifestar sus desacuerdos y reclamar ante las empresas y el Gobierno departamental y nacional. Dentro de los motivos desencadenantes confluyeron varios factores, como se observará al detalle a continuación, que generaron un escenario de conflicto social y político en casi la totalidad de la región del Oriente. Es importante empezar por definir qué se ha entendido en las investigaciones sobre movimientos sociales en Colombia por movimiento y paro cívico; al respecto es clave la definición que plantea Alfonso Torres Carrillo en uno de sus estudios:

Los estudios coinciden en que los movimientos y paros cívicos han tenido lugar preferiblemente en poblaciones pequeñas, su composición social ha sido policlasista, sus reivindicaciones generalmente asociadas con la prestación de servicios públicos y en que la acción de Estado ha combinado negociación con represión. También coinciden en buscar el origen de estas formas de protesta ciudadana en factores estructurales como: la crisis del modelo de desarrollo urbano y regional, el agotamiento de modelo político predominante, las transformaciones de la estructura socioeconómica, el déficit fiscal o en la combinación de estos. (Torres, 1997, p.103)

En el Oriente antioqueño, emergieron a lo largo de las décadas de 1960 y 1970 una serie de movimientos cívicos de carácter local y reivindicativo. Según Sáenz, la región presen-

ció la organización de por lo menos “unos 17 movimientos y paros cívicos” de 24 que se presentan en todo el departamento de Antioquia durante este período, y plantea el autor que “desde el punto de vista de la tradición y experiencia en el campo de los movimientos cívicos, el Oriente Antioqueño se considera vanguardia en el departamento y la región que mayor nivel de organización ha alcanzado” (Sáenz, 1986, p. 148). La composición social de estos movimientos fue diversa en el caso del Oriente (policlasista), allí se agruparon diferentes sectores sociales de las poblaciones afectadas como campesinos, profesionales, intelectuales, sectores religiosos, mujeres, comerciantes, el profesorado, prostitutas, estudiantes universitarios y de secundaria, entre otros; además se articularon organizaciones como los Sindicatos, las Juntas de Acción Comunal de las veredas, la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, las Comunidades Eclesiales de Base, las Sociedades de Mejoras Públicas y algunos núcleos políticos de diferentes sectores de la izquierda.



**Imagen 1: Parte de la carátula del libro “Un pueblo en lucha: el Oriente Antioqueño. Historia del Primer y Segundo Paro Cívico Regional y acuerdos firmados el 15 de octubre de 1982”. Coordinador general: Carlos Ruiz.**

La forma organizativa que adoptaron dichos movimientos, como un factor en común entre los distintos municipios, fue la de Juntas Cívicas o Juntas Pro-Defensa, conformadas por representantes de las localidades que a su vez eran elegidos y refrendados mediante Asambleas Populares. Las asambleas fueron un escenario de participación organizado, en la mayoría de los casos, de manera espontánea por la población para dar trámite o solución a un problema determinado. Dichas Juntas tenían un carácter profundamente democrático y de base, y lograron gran respaldo y legitimidad en los municipios; para Sáenz la denominación de esta instancia organizativa hace alusión a “que generalmente los Movimientos Cívicos son movimientos de resistencia, de defensa de la gente que se ha sentido agredida y lo único que ha hecho es tratar de defenderse, de responder” (Sáenz, 1986, p.49).

Acorde a lo anterior, uno de los mega-proyectos que mayor impacto nocivo generó sobre el territorio y las comunidades, fue el represamiento de los ríos para la construcción de las hidroeléctricas y la producción de energía en el país; de esta manera, hacia 1963 se empezó a proyectar la construcción de la central hidroeléctrica del río Nare por parte de las Empresas Públicas de Medellín (EPM), que impactaría sobre los municipios de El Peñol, Guatapé y San Rafael. Las comunidades de estos municipios, de inmediato, entraron en conflicto con los intereses de las empresas y del Gobierno departamental y nacional, ya que se disponía de sus territorios sin consultarles o hacerles partícipes de las proyecciones y decisiones, es decir, simplemente se les imponía. En Guatapé, por ejemplo, el embalse inundó el 56% del territorio municipal, siendo sepultadas las tierras cultivables de que disponían los campesinos para su economía y sobrevivencia, y en El Peñol se inundó la totalidad del casco urbano siendo desplazada la mayor parte de la población (Sáenz, 1986, p.44).

Son prácticamente estos municipios los que dieron inicio a una resistencia organizada en contra de las centrales hi-

droeléctricas que a sangre y fuego se impusieron en la región; El Peñol fue quizá la localidad más combativa durante este proceso, tal vez por ser la más afectada al tener que trasladar la totalidad de su cabecera y la mayoría de la población municipal hacia otra zona. Allí, el cura Pacho Ocampo, afín al naciente movimiento de la Teología de la Liberación<sup>6</sup>, azuzó a la comunidad para que se organizara y protestara frente al atropello sufrido; rápidamente tuvo acogida la propuesta y empezaron a darse las asambleas populares para discutir el tema.

Este proceso organizativo tuvo gran acogida por parte del estudiantado de la secundaria y los universitarios (algunos jóvenes estaban ya enrolados en grupos de izquierda), a la par la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), el Sindicato Agrario y las Juntas de Acción Comunal se unieron a la lucha por la defensa del territorio (Olaya, 2012, p.72); en general la población del municipio entendió que debía organizarse para frenar el atropello, o por lo menos llevar a cabo algún tipo de negociación con las empresas. Así empezó a gestarse la Junta Cívica, una instancia de organización y auto-representación, validada por el respaldo de la población, que tomaba distancia de la Alcaldía y el Concejo municipal, quienes habían actuado en complacencia con las empresas y la Gobernación. En un momento inicial, las Empresas Públicas de Medellín no tuvieron en cuenta los impactos nocivos sobre la comunidad, tan solo consideraron la compra de tierras para la inundación. Gracias a la presión de la comunidad, los concejos municipales de Guatapé y El Peñol firmaron un “Contrato Maestro” con EPM donde la empresa “se comprometió a reparar los daños ocasionados con las obras e indemnizar a los afectados” (Olaya, 2012, p.70). A raíz de los diversos incumplimientos y atropellos hacia la

6 La Teología de la Liberación es una corriente teológica cristiana que nació en la década de 1960 en América Latina, gracias a la apertura de la Iglesia Católica con el Concilio Vaticano II y la Conferencia de Medellín. Toma como ejemplo el legado de Camilo Torres Restrepo, cura revolucionario que murió combatiendo en la guerrilla del ELN; esta corriente busca la liberación del pueblo propiciando una interpretación revolucionaria del evangelio y asumiendo una opción (política) por los pobres.

población, según Sáenz, en los municipios de El Peñol y Guatapé se llevaron a cabo por lo menos cinco paros cívicos en contra de EPM entre 1969 y 1981. Además, en El Peñol se llevaron a cabo acciones como la recuperación de tierras para construir las viviendas de los campesinos que fueron desarraigados (Sáenz, 1986, p. 49).

Para la década de 1970 fue proyectada la construcción de nuevas centrales hidroeléctricas en la región, esta vez localizadas en el municipio de San Carlos, donde la organización comunitaria y la resistencia no se hicieron esperar; teniendo en cuenta la experiencia que habían sufrido las vecinas localidades con el represamiento del río Nare, rápidamente se organizó la Junta Cívica del municipio de San Carlos, que de igual manera que en El Peñol se constituyó tomando distancia de la institucionalidad, propiciando una instancia de representación directa de la comunidad ante el Gobierno y las empresas. Entre las décadas de 1970 y 1980, este territorio fue impactado no por uno, sino por cuatro embalses: Playas, Jaguas, Calderas y Tafetanes (Sáenz, 1986, p.46). Como lo plantea el historiador Carlos Olaya:

La importancia de los cultivos de café, plátano, maíz, frijol, tomate, arracacha, papa, yuca, frutales, cabuya y pastos, al igual que la minería y la pesca, sustento de los municipios más adelante afectados, fueron subestimados por los planificadores de las centrales hidroeléctricas. Mucho menos se consideró la afectación social que se iba a producir, acorde con la densidad de población campesina ubicada en estos lugares, lo mismo que los problemas climáticos y medioambientales que ocasionan las represas. (Olaya, 2012, p.69)

Al igual que los municipios de Guatapé, San Rafael y El Peñol, San Carlos sufrió toda una serie de impactos negativos a

raíz de la construcción de los embalses que provocaron afectaciones como: pérdida del sustento económico basado en la agricultura, el desplazamiento masivo de grandes capas de la población rural, la pérdida de actividades tradicionales como la pesca y el barequeo, y el incremento exagerado de la población en el casco urbano a causa de la llegada en desbandada de los pobladores rurales y de los obreros provenientes de otras zonas para trabajar en los embalses. En el municipio de San Carlos, las comunidades también iniciaron un proceso de resistencia y movilización en torno a la defensa de su territorio a lo largo de la década de 1970, propiciando una serie de paros cívicos, marchas, asonadas, bloqueo de vías para impedir que pasaran los materiales de la construcción de los embalses y pedreas contra la Fuerza Pública. La movilización más fuerte tuvo lugar en enero de 1978 (Olaya, 2012, p.82-93).

Paralelamente, los habitantes del municipio de Marinilla, de la mano de Ramón Emilio Arcila (líder cívico que llegaría a ser el principal dirigente del Movimiento Cívico regional), venían liderando una serie de movilizaciones contra la Electrificadora de Antioquia, empresa intermediaria en la prestación del servicio eléctrico que compraba la energía a la entidad de Electroaguas para revenderla a los municipios de la región a precios exorbitantes<sup>7</sup>. Desde 1963 Marinilla empezó a pronunciarse en contra de las alzas a las tarifas del servicio y a convocar a otros municipios a levantar su voz en protesta; en algunas de estas movilizaciones se articuló también el municipio de Rionegro, donde la población también venía manifestando su descontento. En Marinilla se erigió la primera Junta Cívica de que se tenga registro en la región (no se sabe hasta qué punto los demás municipios

7 Señala Orlando Sáenz que desde la década de 1950, la mayoría de las poblaciones de la región empezaron a resolver el tema de la energía eléctrica utilizando el potencial hídrico de sus territorios, varios municipios construyeron pequeñas plantas eléctricas de manera autónoma para abastecerse de energía. Rionegro utilizando las aguas del río Nare, con una pequeña central hidroeléctrica de 9000 kilovatios, aspirando abastecer a otros municipios en un intento de integración regional autónoma; sin embargo, desde lo departamental la iniciativa fue absorbida con el establecimiento del Circuito Eléctrico de Oriente que fue entregado junto a otros cuatro circuitos a la Electrificadora de Antioquia, empresa intermediaria en la prestación del servicio.

hayan emulado dicha forma organizativa), mientras que en Rionegro se creó la Junta Pro-Defensa del pueblo, ambas en la década de 1960 (Sáenz, 1986, p. 49). Marinilla también fue epicentro de paros cívicos y protestas, sobre todo a lo largo de la década de 1970. Una de las movilizaciones más importantes tuvo lugar en el año 1975 en contra de la Electrificadora de Antioquia, allí también se exigía mayor inversión en temas como el deporte y la cultura en el municipio; en esta jornada se presentaron pedreas, bloqueos a las principales vías y varias capturas por parte de la Policía, entre quienes fue capturado uno de los principales referentes del movimiento en la región, Ramón Emilio Arcila. Esta movilización logró incluso un carácter regional ya que desde las distintas localidades salieron delegaciones a apoyar el paro cívico de dicho municipio (Arango, 2000, p. 81-87).

También en 1972, según las investigaciones adelantadas por Sáenz, se presentó una movilización de carácter subregional, donde se articularon los municipios de Marinilla, San Vicente, Rionegro, Guarne y Copacabana (este último perteneciente al Valle de Aburrá); el desencadenante esa vez fue la construcción de la autopista Medellín-Bogotá, y los campesinos protestaron por los cobros de valorización que se impusieron a sus pequeñas parcelas aledañas a la nueva vía. En 1975 también Granada lideró un paro cívico contra la Administración municipal teniendo como aliciente los problemas con el transporte veredal y la falta de insumos agrícolas en su localidad (Sáenz, 1986, p.50).

En el Oriente cercano, La Ceja y La Unión venían sufriendo un incremento desmedido de la población a raíz de la expansión urbanística e industrial desde el Valle de Aburrá. Ello conllevó a que se generaran crisis en temas como la vivienda, la salud y la educación, pues los planteles con los que contaban los municipios, sobre todo el primero, no daban abasto para la atención de la población. El municipio de La Ceja venía solicitando al Gobierno nacional y a la Goberna-

ción departamental recursos para ampliar la infraestructura de una institución educativa y designar más profesores, y ante la permanente negligencia de los gobiernos, en 1977 la población se lanzó a un paro cívico liderado por estudiantes y padres de familia. En esta ocasión la población fue fuertemente reprimida por la Fuerza Pública, lo que derivó en una asonada; se presentaron pedreas y bloqueos, hubo capturas, heridos y una persona asesinada a manos de la Policía. Gracias a la contundencia de la movilización, la Junta Cívica de La Ceja logró su objetivo y días después se empezaron las obras para construir el plantel educativo (López, 2015, p.83-99).

Por su parte, en el municipio de La Unión venía en un auge el movimiento juvenil y estudiantil, quienes venían jalando una lucha por la construcción de escenarios para el deporte y la cultura, y la ampliación de cupos en la institución educativa para los bachilleres, puesto que las personas provenientes de las escuelas de la zona rural no alcanzaban lugar. Así, el 19 de diciembre de 1981 la juventud lideró un bloqueo a la principal vía de acceso al municipio, donde a manera de protesta se jugó un partido de fútbol en la calle solicitando la construcción de una cancha; la protesta fue reprimida por el Ejército en el marco del Estatuto de Seguridad de Turbay Ayala<sup>8</sup> y fueron capturados cinco jóvenes (los principales líderes), sin embargo, al igual que en La Ceja, solo de esta manera se logró conseguir el primer escenario deportivo para el municipio que llevó como nombre Cancha 19 de Diciembre, reivindicando la lucha cívica por el deporte (Higuaita, 2018, p.174-175).

El culmen de este brote de protestas se vivió hacia el año de 1978, donde se presentaron cuatro paros cívicos en munici-

8 El Estatuto de Seguridad del presidente Turbay Ayala se amparó en el decreto 1923, donde se establece el Estado de Sitio que rigió durante 1978-1982 en el país. Fue un periodo absurdamente represivo, donde se violaron de manera sistemática los DDHH de la población y se persiguió a la oposición y a los sectores alternativos (movimientos sociales, partidos políticos de izquierda y sectores populares). Fueron los tiempos de las torturas en las cárceles, las capturas masivas y los montajes judiciales. Las primeras movilizaciones del Movimiento Cívico sucedieron bajo este marco represivo.

pios de la región de fuerte impacto, uno en San Carlos donde se vivieron fuertes confrontaciones con la Fuerza Pública, en contra de ISA y EPM; a la par en el municipio de Guatapé también se declaró un paro cívico que se prolongó por ocho días; y por último Rionegro presenció dos paros cívicos, el primero contra la Electrificadora de Antioquia que seguía subiendo las tarifas de la energía eléctrica, y el segundo por problemas de transporte contra Intra (Sáenz, 1986, p.50).

Este primer período de organización popular y movilización social en el Oriente antioqueño, no vislumbró hasta este momento una articulación de carácter regional; las protestas fueron una sumatoria desagregada de los municipios que emprendieron acciones colectivas para defender su territorio. Sin embargo, el auge de los movimientos y paros cívicos a lo largo de estas dos décadas propició dos acumulados fundamentales:

- El primero, que se empezara a resquebrajar la hegemonía del bipartidismo, pues hasta entonces el poder político en los municipios era detentado por los partidos tradicionales, liberal y conservador; la comunidad a través de las luchas gestadas y las instancias de participación y organización a las que dieron origen como las Asambleas Populares y las Juntas Cívicas, logró, gracias a un ejercicio de democracia directa, una ampliación de su consciencia crítica frente a los atropellos que acometieron contra sus territorios. Muestra de dicha pérdida de legitimidad fue el surgimiento, todavía muy embrionario, de expresiones políticas jaladas desde los movimientos cívicos locales, como el Movimiento de Acción Sancarlitano en San Carlos y Acción Peñolita en El Peñol a final de la década de 1970, donde se decidieron a participar electoralmente tomando distancia de los partidos tradicionales y las élites locales, y lanzaron listas propias a los concejos municipales con

resultados favorables<sup>9</sup>. Allí se lee ya una politización de las poblaciones, que empezaron a vislumbrar formas de acceder al poder político, es decir, ya no solo se contemplaba la protesta (la reacción), sino que empezó a aparecer en el panorama la propuesta (la creación).

- Lo segundo, como lo resalta Clara Inés García, es que la percepción de los atropellos hizo que se empezara a propiciar una lectura crítica del desarrollo impuesto desde afuera y desde arriba, lo que permitió que contrario a esto, emergiera un sentido de pertenencia y territorialidad construido desde las comunidades autóctonas; un sentido de enraizamiento con el territorio violentado y planificado desde intereses externos y ajenos a los de la población. Este acumulado, ya en la década de 1980, fue el que permitió que empezara a construirse un sentido de región, como Oriente antioqueño, desde abajo (García, 2007, p.140).

Para finalizar este acápite, es importante resaltar lo que plantea Sáenz como lectura global de dicho periodo, en el que el cuento de La Cenicienta empezó a caerse por su propio peso:

- La región ha sido escenario de un proceso de desarrollo que no obedece a su propia dinámica, sino que básicamente ha sido impuesto, que ha generado algunos efectos positivos sobre las condiciones de vida de la población, pero sobre todo, efectos negativos. Mi tesis fundamental es que los Movimientos Cívicos del Oriente Antioqueño surgen y se explican en lo fundamental, como una respuesta de la población de la región a los efectos negativos de este proceso de desarrollo regional impuesto. Es evidente que cada movimiento tiene sus causas inmediatas y problemas específicos, pero si se

9 Por ejemplo, el Movimiento de Acción Sancarlitano en 1978 alcanzó tres curules en el Concejo municipal que mantuvo durante varios periodos.

miran en conjunto, solo se explican como respuesta al proceso de desarrollo capitalista impuesto sobre la región. (Sáenz, 1986, p.47).

### **De la protesta a la propuesta: auge y exterminio del Movimiento Cívico del Oriente antioqueño**

Ya para la década de 1980, una de las problemáticas que se venía presentando en torno a la prestación del servicio de energía por parte de la Electrificadora de Antioquia, tomó mayor fuerza, puesto que esta continuó con sus alzas en las tarifas de la prestación del servicio, asunto que desde años atrás venían denunciado Marinilla y Rionegro. Este elemento se convirtió en el catalizador del descontento popular que en la región venía añejándose contra los entes de poder durante dos décadas de luchas sociales, y fue, así, el elemento que a su vez permitió dar el salto cualitativo de lo local a lo regional. Uno de los líderes cívicos, Carlos Ruíz, plantea en sus memorias “Oriente Antioqueño: un pueblo en lucha” que las tarifas llegaron a tener un costo de hasta un 200% mayor a lo que valía en otras regiones y ciudades (Valle de Aburrá, por ejemplo) (Ruiz, 1984, p.19). En 1981 la Electrificadora expidió una circular en la región donde anunció el incremento del 35% del valor de la tarifa del servicio público (Olaya, 2012, p.98), lo que de inmediato levantó ampolla en los pobladores, pues significaba prácticamente una burla que la región donde se producía aproximadamente el 60% de la energía nacional, tuviera precios más costosos que las demás regiones que se servían de sus recursos hídricos. Al respecto Clara Inés García plantea:

Fue entonces, sobre la base de una afectación directa al bolsillo de residentes y comerciantes, sobre las posibilidades que brindaba la aplicación de la Ley 56 de 1981 y sobre la posibilidad de configurarse en una fuerza en capacidad de tener en adelante parte activa en los rumbos de la región, que en el oriente antioqueño se configura el Movimiento Cívico Regional. Es un movimiento

contra la política del Estado, que ahora recoge algunas de las claves del discurso construidas anteriormente por los movimientos cívicos locales y las coloca como antecedente y reiteración histórica de lo que significa el Estado para la región: las “decisiones tomadas desde afuera de la región”, “impuestas sin consulta” y con “enormes perjuicios”; y ahora a las tarifas que se van a imponer, se las afirma como “injustas”, en tanto significan más costos a los ya cuantiosos que han debido soportar para producir energía para los demás. (García, 2007, p.139).

En el municipio de Marinilla empezó a vislumbrarse la necesidad de proyectar la articulación regional entre las distintas localidades, pues consideraban necesario entender toda la problemática derivada de la lógica impuesta del desarrollo como región y no solo como localidades desagregadas. Así, a raíz de contactos entre líderes juveniles de La Unión y Marinilla empezó a plantearse una coordinación entre los municipios afectados por el alza en la tarifa del servicio de energía, se realizó una asamblea popular en La Unión que contó con gran concurrencia de la comunidad y se constituyó la Junta Cívica con el acompañamiento de la Junta Cívica de Marinilla. A la par emergió la relación entre quienes serían los máximos dirigentes de la organización regional del Movimiento Cívico: Ramón Emilio Arcila del municipio de Marinilla y Ernesto Ríos Arias del municipio de La Unión, ambos asesinados años después por el paramilitarismo (Higuera, 2018, p.176).

Ya vislumbrando la organización regional empezaron a contactarse los principales líderes de cada municipio, muchas localidades se habían fogueado ya en más de dos décadas de resistencia (caso San Carlos y El Peñol); la organización comenzó a vertebrarse entonces sobre el acumulado de las localidades, y en cada municipio se realizaron Asambleas Populares a las que concurrían masivamente los pobladores afectados. A la par se constituyeron en estos las Juntas Cí-

vicas o Juntas Pro-Defensa de los Usuarios de la Energía (tomando la forma organizativa que se adoptó en distintos municipios desde las movilizaciones de las décadas anteriores), y se empezó a estructurar una organización desde las bases, de abajo hacia arriba, de lo local a lo regional, teniendo la siguiente estructura organizativa según un estudio realizado por Ramón Emilio Arcila:

En las municipalidades la máxima instancia de participación eran las Asambleas Populares, allí se designaba una Junta Cívica o Pro-Defensa refrendada por las comunidades en representación de cada municipio, a la par estas se articulaban en la Asamblea Regional de Juntas Cívicas Pro-Defensa de los Usuarios de la Energía (máxima instancia decisoria a nivel de región) y en estas se nombraba una Coordinadora Cívica Regional constituida por un representante de cada Junta Cívica más un suplente de cada municipio; dicha Coordinadora era el órgano dinamizador de las decisiones tomadas en las asambleas populares y actuaba como representante regional en las negociaciones (Arcila, 1986, p.58). Como señala Ruiz en sus memorias, entre 1981 y 1982 se empezaron a realizar asambleas populares en La Unión, el Carmen de Viboral, Marinilla, Cocorná, Guarne, Rionegro, San Vicente, Santuario, San Carlos, El Peñol, Granada, San Luis, El Retiro y La Ceja, donde se gestó ya la organización regional alrededor del Movimiento Cívico del Oriente antioqueño (Ruíz, 1984, p. 46).

En varios municipios se decretó mediante asamblea popular el no pago del servicio de energía eléctrica, a manera de protesta contra la Electrificadora de Antioquia, y el nombramiento de brigadas para la reconexión donde fuera cortado el servicio, como una forma de desobediencia civil frente al establecimiento. Todo esto teniendo en cuenta que la empresa se había mantenido en la negativa de entablar algún diálogo o negociación con las comunidades sin atender sus demandas. A la par, se mantuvo el acuerdo de que ningún municipio negociaría solo con la empresa, puesto que la

negociación debía ser de carácter regional con la instancia designada por las Juntas Cívicas. La Coordinadora Cívica Regional estableció entonces un pliego de exigencias ante la Electrificadora de Antioquia, Empresas Públicas de Medellín (EPM), ISA y la Gobernación de Antioquia, en este se contemplaba:

1. Desaparición de la Electrificadora de Antioquia
2. Que Empresas Públicas de Medellín preste el servicio directamente.
3. Tarifas a 21 de diciembre de 1981.
  - a) Se exigió que a la pequeña industria y al comercio de los municipios del Oriente, se les dé el mismo tratamiento, que se le da a la gran industria y al comercio en Medellín y el Valle de Aburrá.
  - b) Congelación y suspensión de la Upaquización.
  - c) Suspensión del 10% del recargo del sector rural.
  - d) Que no se cobre el derecho de matrícula.
  - e) La electrificación rural se hará sin recargo o sobre costo.
  - f) Se dará energía gratuita a los municipios.
  - g) Se calibrarán todos los contadores
  - h) EE.PP o ICEL o el Departamento, adquirirán las acciones que el municipio tiene en la Electrificadora
4. Trámite especial para el pago de las cuentas acumuladas.
5. Estricto cumplimiento de la ley 56 de 1981 su decreto reglamentario.
6. Que Empresas Públicas de Medellín, paguen impuestos de industria y comercio, a los municipios en cuyos territorios funcionan las represas construidas o en construcción.
7. Cumplimiento por parte de las Empresas Públicas del contrato maestro suscrito con El Peñol.
8. Negociación con las comunidades por parte de ISA y EE.PP del presente pliego.
9. Las autoridades correspondientes se comprometerán a

no ejercer ningún tipo de represalia o sanciones contra los dirigentes de las Juntas Cívicas, la Coordinadora Regional o cualquier persona o institución en razón de este movimiento. (Ruíz, 1984, p.46-47)

De esta manera entre 1982 y 1984 la Coordinadora Cívica Regional organizó tres paros cívicos en el Oriente antioqueño buscando presionar la negociación del pliego que no fue atendido hasta entonces, dichas movilizaciones tuvieron gran impacto no solo en la región sino en todo el departamento y el territorio nacional. El primero tuvo lugar el 9 de septiembre de 1982 y tuvo una duración de 48 horas; la protesta fue reprimida fuertemente, en algunos municipios se presentaron confrontaciones con la Fuerza Pública y hubo un saldo de 512 detenidos dentro de los que se encontraban algunos dirigentes (Arcila, 1986, p.55). El segundo paro cívico a raíz de los incumplimientos de la negociación anterior se decretó para el 11 de octubre de 1982, de nuevo se vivieron fuertes pedreas en los municipios, y se extendió la movilización alrededor de 108 horas (Arcila, 1986, p.56). El tercer paro cívico tuvo lugar el 19 de febrero de 1984, en articulación con el Suroeste antioqueño y el Valle de Aburrá. Los niveles de represión y persecución al movimiento habían incrementado considerablemente, desatándose ya una guerra sucia en la región y diferentes partes del país, y a finales de 1983 ya había sido asesinado el primer líder del Movimiento Cívico del Oriente antioqueño en el municipio de San Carlos, el médico Julián Conrado, quien fue asesinado a manos del naciente grupo Muerte a los Secuestradores (MAS), germen de lo que sería años después el paramilitarismo; a la par en vísperas del tercer paro cívico fueron asesinados tres dirigentes del Frente Democrático en Fredonia, y fue asesinada una persona en San Carlos en el marco de la movilización, por lo que municipios como San Carlos, Granada y Marinilla se radicalizaron extendiendo el paro unos días más de lo previsto por la organización regional (Olaya, 2012, p.116-119).

Estos tres paros cívicos que posicionaron al Oriente antio-

queño como la región con el Movimiento Cívico más fortalecido y con mayor trayectoria en el país, incrementó la capacidad de combatividad de la región y profundizó el descontento con los entes de poder. El Oriente venía en un auge de movilización social donde según Ramón Emilio Arcila se presentaron, solamente durante este período: 60 asambleas en diversos municipios, diez marchas regionales y de confluencia en puntos críticos, cuatro asambleas intercoordinadoras del Oriente y el Suroeste Antioqueño, cuatro asambleas con fuerzas políticas, sindicales y populares buscando apoyo al movimiento y tres foros ideológicos y de evaluación sobre diversos aspectos, uno de estos con participación de la Coordinadora Nacional de Movimientos Cívicos. Ello da cuenta del culmen de la protesta social en el Oriente antioqueño durante 1981 y 1984, esta vez con una mayor articulación regional en contraste con las movilizaciones locales de las dos décadas anteriores que no alcanzaron el mismo impacto y nivel organizativo (Arcila, 1986, p.57)

Las conquistas del movimiento a través de las movilizaciones y la protesta, en términos del pliego de exigencias y las reivindicaciones acordadas, fueron parciales, pues no se conquistó el objetivo principal de eliminar la intermediación de la Electrificadora de Antioquia en la prestación del servicio, para que EPM lo asumiera de manera directa; las negociaciones y acuerdos a los que se llegaron le fueron incumplidos reiteradamente al movimiento. Sin embargo, en términos políticos había una serie de ganancias y acumulados importantes: lo que se había generado con los paros cívicos en la región eran verdaderas insurrecciones populares que posibilitaron aumentar los niveles de consciencia política en los pobladores, una ampliación de la base social y el fortalecimiento de la organización local y regional; empezó a emerger con fuerza una vocación de poder en el movimiento, que ya no solo se limitaba a un carácter reivindicativo sino que empezaba a asumir un carácter propiamente político. Como lo expresa Hernando Arango:

Su pensamiento político se orientaba, más bien, hacia la consideración de que los movimientos cívicos, con su heterogeneidad social y su pluripartidismo, podían constituirse en fuerzas sociales, independientes en su orientación política y no obstante jugar un destacado papel en los cambios políticos y sociales al convertirse en voceros, ante el Estado, de toda una región y defensores de sus derechos, construyendo, así, el poder popular. (Arango, 2000, p.110)

Para Arcila el Movimiento Cívico del Oriente antioqueño era una genuina expresión de “poder popular” en Colombia. En la práctica, durante las protestas, las asambleas populares y las Juntas Cívicas había rebasado el poder del Estado representado en las instituciones locales; estas se convirtieron en simples espectadoras de la voluntad popular sin poderla controlar, pues quien detentaba el poder realmente eran las instancias propias que emergían de la participación de la población, ejerciendo una representación directa (ejemplo de la democracia participativa). Además, destaca Arcila la recuperación de escenarios públicos para la movilización como calles, teatros, plazas públicas, donde acudían los pobladores a manifestarse:

En el movimiento cívico –expresión auténtica de las luchas y reivindicaciones de los sectores populares- el poder popular ha primado sobre los poderes tradicionales de la Iglesia, pasando por encima de la oposición de los curas párrocos y demás jerarquías, de los partidos tradicionales con sus gamonales locales, de las autoridades civiles –alcaldes, concejos municipales- y de las autoridades militares con su capacidad de represión e intimidación. (Arcila, 1986, p.58).

Para Clara Inés García, uno de los acumulados más importantes que logró el Movimiento Cívico en la década de 1980 fue el de “construir un sentido de lugar desde abajo” (García, 2007, p.140), es decir, construir un sentido de pertenencia,

de identidad con el territorio desde los habitantes, que rebasaba incluso lo local y planteaba más una re-significación del Oriente antioqueño como región claramente en disputa: por un lado la planeación del desarrollo desde afuera, pero por el otro las proyecciones de las comunidades autóctonas que empezaban a reclamar un lugar. Este acumulado de poder popular y de construcción de la región desde abajo, fue lo que trató de encausar la dirigencia cívica cuando se dio el salto de lo reivindicativo a lo político, o mejor: “de la protesta a la propuesta” como lo expresa Arcila, que era ya no solo reaccionar frente al problema como se venía haciendo desde dos décadas atrás, sino empezar a “ser gobierno”, a construir propuesta política para la región, a disputar el poder político a los gamonales del bipartidismo, a ampliar la participación democrática y a recrear otras formas de hacer política (Arcila, 1987, p.12-15).

Ya en las localidades el Movimiento de Acción Sancarlitana<sup>10</sup> y el Movimiento de Acción Peñolita tenían una experiencia importante en la participación político-electoral, lanzando listas propias al Concejo municipal, en donde ambos municipios habían logrado tener concejales provenientes de los movimientos cívicos que defendían su agenda al interior de las instituciones. Así la idea de Coordinadora Cívico Regional, con un carácter coyuntural, empezó a desdibujarse y emergió como tal la organización del Movimiento Cívico del Oriente antioqueño como una apuesta de movimiento social y político en la región. El movimiento trazó unas líneas de participación político-electoral a partir de la apertura democrática de los años 80, que permitió la elección popular de alcaldes. Allí el Movimiento Cívico vislumbró la posibilidad de acceder al poder político en los municipios; este elemento de la lucha por el poder político fue prácticamente el detonante para que se iniciara el exterminio sistemático del movimiento y sus principales dirigentes.

10 En 1978 nació el Movimiento de Acción Sancarlitano, que se vio obligado a cambiarse algunos años después el nombre por Unión Cívica Municipal ya que curiosamente su sigla era MAS, la misma que utilizaba el grupo paramilitar Muerte a los Secuestradores que empezaba a incursionar en la región.

Entre el año 1985 y el 2000 (en distintas temporalidades desde lo local) en Marinilla, La Unión, El Peñol, El Carmen de Viboral, San Carlos y San Rafael, el Movimiento Cívico obtuvo ganancias importantes, con varias alcaldías y puestos en los concejos; además avanzó de manera autogestionaria –no supeditado netamente a lo institucional o a lo electoral– en la construcción de un proyecto político apoyado en la organización comunitaria, reflejado en acciones como: la construcción de barrios populares, periódicos comunitarios, festivales populares y folclóricos, cooperativas campesinas, tiendas comunales, corporaciones culturales y deportivas, tomas de tierras, comités defensores de DDHH, entre otra serie de iniciativas de gran acogida e impacto, construyendo en lo inmediato, a través de la organización popular, soluciones tangibles a los problemas de las comunidades, y propiciando condiciones, desde las bases, para el buen vivir. Este elemento clave de la participación, de ser propuesta, fue el que detonó su persecución. A partir de allí se desató una guerra sucia sin precedentes en la región del Oriente antioqueño, eclipsando totalmente el conflicto social y político que venía en ascenso, con un conflicto armado que llevaría al Oriente a una verdadera catástrofe humanitaria en las décadas posteriores. Al respecto el investigador Edgar Novoa plantea:

“La guerra sucia” se convierte en la estrategia más eficaz para contrarrestar el proceso de organización y participación política de las comunidades del oriente antioqueño. Se había iniciado entre el segundo y tercer paro, se consolidó en el tercer paro y se prolongó hasta el asesinato, desaparición y exilio de los principales dirigentes del movimiento cívico. (Novoa, 2009, p.83)

Solo por mencionarlos, algunos de los líderes cívicos asesinados en el marco de esta guerra sucia y exterminio sis-

temático fueron: Julián David Conrado (23 de octubre de 1983); Jaime Giraldo e Iván Castaño (19 de agosto de 1984); Gabriel Velázquez Urrego (28 de febrero de 1986); William Genaro Tamayo (20 de marzo de 1986); Froilán Arango Echavarría (28 de noviembre de 1987); Jorge Alberto Morales Cardona (11 de abril de 1988); Luis Felipe Noreña (junio de 1988); Alberto Giraldo Castaño (7 de octubre de 1988); Antonio Martínez Moreno (10 de octubre de 1988); Gabriel Jaime Santamaría, diputado de la Asamblea de Antioquia que apoyó decididamente al Movimiento Cívico (27 de octubre de 1989); Ramón Emilio Arcila (30 de diciembre de 1990); Jesús Arcesio Botero (14 de mayo de 1995); Ernesto Ríos Arias (3 de mayo de 1995); Jesús Antonio Ramírez (17 de septiembre de 1997); y Saúl Marulanda (en el año 2000) (Olaya, 2016, p.137-140).

Fruto de las luchas que han librado actualmente las organizaciones por la memoria y la búsqueda de la verdad, la Unidad Especial para la Atención y Reparación a las Víctimas emitió en enero del 2018 la resolución 2018-529, donde se reconoce el exterminio del Movimiento Cívico en la región, por tanto, como víctima colectiva en el marco del conflicto armado colombiano, y sujeto de reparación colectiva a su vez; allí se plantea, por ejemplo, que por lo menos 250 integrantes del movimiento entre los líderes y las bases sociales fueron asesinados, además dicho documento reconoce que los y las integrantes del movimiento sufrieron hechos victimizantes como “homicidios, torturas, desplazamientos forzados, allanamientos, amenazas contra la vida, retenciones ilegales y persecución” (Higueta, 2018, p.13). El exterminio del Movimiento Cívico se inició en la década de 1980 y se prolongó a lo largo de la década de 1990, como se vivió en todo el territorio nacional; las alternativas políticas que emergían con fuerza y disputaban el poder al statu quo, reflejadas en movimientos sociales y políticos como la Unión Patriótica, ¡A Luchar!, Esperanza Paz y Libertad, el Concejo Regional Indígena del Cauca, entre otras, fueron exterminadas y acalladas, obedeciendo a un plan diseñado desde sectores de poder en el país, anclados a una vieja práctica de

eliminar al opositor político que pone en riesgo sus intereses, destruyendo la posibilidad del juego limpio de la democracia.

Orlando Fals Borda, el gran sociólogo colombiano, llegó a conocer de cerca la experiencia del Movimiento Cívico del Oriente antioqueño, refiriéndose a ella como una expresión de lo que él denominó en sus estudios como “socialismo raizal o autóctono”, es decir, una transformación de la sociedad desde las bases, fundamentada en una democracia participativa (directa), acorde a las raíces histórico-culturales propias de los territorios, es decir, un movimiento verdaderamente identificado con el *ethos popular*<sup>11</sup> de las comunidades. Este importante pensador llegó a tomar al proceso transitado por la región del Oriente, como un referente empírico de sus postulados teóricos sobre los movimientos sociales en Colombia y América Latina; por ejemplo resaltó el proceso de maduración que significó superar el “coyunturalismo” y “localismo territorial” típico de organizaciones de las décadas anteriores, que no trascendían de lo micro.

Para este, el movimiento logró extenderse en el tiempo superando lo reivindicativo, además de lograr una expansión espacial y territorial; establecer redes de apoyo mutuo y de coordinación entre los diversos procesos comunitarios, cívicos y populares; y configurar un verdadero movimiento social que empezaba a recrear una “cultura política” en los sectores populares, deslegitimando los poderes políticos tradicionales (clientelistas y corruptos) y planteándose como opción real de poder; era una alternativa frente a los atropellos del bipartidismo, frente al autoritarismo característico del Estado y de la clase política colombiana, y frente al discurso del desarrollismo y sus imposiciones (Fals, 1989, p.49-59). Sin embargo, fue precisamente esa fortaleza la que implicó una reacción violenta por parte de sectores mafiosos, política y económicamente dominantes en la región y el país, desatan-

11 Fals Borda resaltaba la capacidad de estas organizaciones de enraizarse con el sentir y las necesidades más profundas de las comunidades, más allá de los marcos ideológicos o teóricos de izquierda. Lo que se recogía entonces era la experiencia, trayectoria y prácticas cotidianas de los sectores populares, desde una perspectiva decolonial.

do una violencia política y encumbrando en lo regional una confrontación armada entre guerrillas, paramilitares y Fuerza Pública, que se impuso sobre el conflicto social y político que venía en ascenso desde la década de 1960.

Finalmente, para mediados de la década de 1980 el panorama de la región empezó a cambiar abruptamente. Como reacción a la expansión paramilitar desde el Magdalena Medio, que tuvo sus primeras incursiones en modalidades sicariales y asesinatos selectivos a nombre del MAS (posteriormente derivó en lo que se conoció como Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio, comandadas por Ramón Isaza), se dio también el arribo de las guerrillas del ELN con su Frente Carlos Alirio Buitrago<sup>12</sup>, las FARC con los Frentes 9 y 47, y el EPL con el Frente Elkin González, ubicándose en zonas estratégicas del Oriente antioqueño, como los lugares aledaños al eje vial de la autopista Medellín-Bogotá y al complejo hidroeléctrico, donde podrían, desde su proyecto de lucha insurgente, ejercer control territorial y sabotear la infraestructura del Estado en lugares centrales y neurálgicos del poder económico y político en el país, como lo era la región insigne del “desarrollo” en Colombia. Las guerrillas en un plan de expansión nacional, de manera táctica, lograron un aprovechamiento político del escenario de conflicto que se había configurado ya en el Oriente antioqueño con el entramado de situaciones (Higueta, 2018).

### **Catástrofe humanitaria y destrucción del tejido social y organizativo: el ocaso del movimiento social en el Oriente antioqueño**

A raíz de la oleada de violencia que se inició en la región –desatada por el contubernio mafioso de sectores políticos

12 Por ejemplo, este frente guerrillero nació directamente en la región, en primera instancia como una forma de autodefensa frente a las agresiones del paramilitarismo proveniente del Magdalena Medio contra las comunidades. Su nombre reivindica precisamente el asesinato de Carlos y Alirio Buitrago, dos jóvenes seminaristas que fueron masacrados junto a otros tres, en una acción de los paramilitares contra una Comunidad Eclesial de Base que lideraba el cura Bernardo López Arroyave. Esta guerrilla logró encausar el conflicto en la región y hacerse a un discurso político que le permitió fácilmente un enraizamiento social en el Oriente; este actor armado fue uno de los principales protagonistas en la escalada del conflicto armado.

aferrados al poder, narcotraficantes y entes estatales (Ejército y Policía en muchos casos) que dio origen como tal al paramilitarismo de los años 90 y principios de los 2000–, el Movimiento Cívico desapareció como referente y articulador de los movimientos sociales y políticos en el Oriente antioqueño. Los paramilitares fueron los autores intelectuales y materiales del exterminio del movimiento (con excepción de algunos líderes cívicos que fueron asesinados también por las guerrillas, como sucedió en El Peñol). La estocada final al movimiento sucedió cuando cayó asesinado por el paramilitarismo el principal ideólogo y dirigente de la organización regional, Ramón Emilio Arcila, siendo candidato (casi electo) a la alcaldía de Marinilla en diciembre de 1989 (Arango, 2000, p.178-179). A partir de allí, en algunos municipios como La Unión, El Peñol y Marinilla se dio un repliegue al trabajo local, las organizaciones cívicas como Movimiento de Acción Peñolita, el Movimiento Cívico por La Unión y Acción Social Popular Integrada por Marinilla persistieron en su trabajo comunitario en los municipios, pero se desdibujó como tal la organización regional que se había forjado en casi tres décadas de trasegar en la lucha popular y la resistencia.

En municipios como San Carlos, San Luis y San Rafael, el control paramilitar proveniente desde el Magdalena Medio se impuso, y las organizaciones sociales quedaron prácticamente menguadas por las amenazas, persecuciones, asesinatos selectivos y masacres de que fueron presas. Las organizaciones insurgentes habían aprovechado “la estructura de oportunidad” que se generó en la región, para incursionar y hacerse al control territorial. Algunos líderes cívicos, sobrevivientes del exterminio, y tras de ellos amplias bases sociales aporreadas por los hechos (tanto por la imposición de los proyectos extractivos como por el asesinato de sus dirigentes), terminaron por vincularse decididamente a la lucha armada en pleno auge de la expansión guerrillera en la región y el país, como lo fue en la década de los 80 (por ejemplo al ELN y a las FARC). En algunos municipios, las organizaciones y líderes sobrevivientes también se vincula-

ron al naciente movimiento de la Alianza Democrática M-19, agrupación que nació de la negociación entre la guerrilla del Movimiento 19 de abril (M-19) y el Gobierno nacional, pensando además en las garantías democráticas que brindaba, por lo menos en el papel, la nueva Constitución Política de 1991 que despertó amplia expectativa en el país<sup>13</sup>.

Sin embargo, los esfuerzos de revivir la organización regional no se estancaron, aún en un escenario tan adverso. A inicios de la década de 1990, cuando bajó un poco la tensión, algunos líderes sobrevivientes de lo que en otrora fue el Movimiento de Acción Sancarlitano, quienes habían tenido que salir de su territorio a refugiarse a otras zonas debido a las amenazas, persecuciones y asesinatos selectivos a manos del grupo paramilitar MAS contra su movimiento, regresaron de nuevo al municipio, y en compañía de nuevos liderazgos y organizaciones sociales intentaron retomar la apuesta que traía el Movimiento Cívico durante la década de 1980. Decididos de nuevo a la participación social, política y electoral, para continuar con la construcción de su proyecto político alternativo, fundaron la organización “Unidos por San Carlos”; a la par intentaron avivar de nuevo la organización y articulación regional. Como lo menciona Carlos Olaya:

Dicho movimiento se extendió a otras localidades bajo el nombre de “Oriente Unido”, retomando las propuestas del movimiento cívico de la década pasada. A través de esta organización se impulsaron diferentes eventos regionales, aunque, rápidamente fue objeto de señalamientos, de “estar promovida por la guerrilla”, lo que significaba poner a sus integrantes nuevamente en la mira de los paramilitares. Pese a ello, el movimiento regional mantuvo la coordinación de actividades entre los

13 A finales de la década de 1980 y principios de 1990, varios grupos insurgentes abandonaron la lucha armada, establecieron diálogos con el Gobierno nacional, negociaron y se reincorporaron a la vida civil y a la política legal. Este es el caso del M-19, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, el Ejército Popular de Liberación, el Movimiento Armado Quintín Lame, la Corriente de Renovación Socialista y las Milicias Populares de Medellín. Este escenario había dibujado amplias esperanzas en el país de alcanzar la paz, ampliar la democracia y propiciar reformas importantes, sin embargo, sucedió todo lo contrario, se escaló y degradó mucho más el conflicto armado.

diferentes municipios de la región, durante varios años (Olaya, 2012, p. 168)

Así se intentó reconstruir la organización regional y dar continuidad a la lucha del Movimiento Cívico del Oriente antioqueño, esta vez bajo la denominación de “Oriente Unido”. Sin embargo, ya en un contexto de confrontación armada generalizada con el fortalecimiento de las guerrillas en la región y la incursión de las estructuras paramilitares Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio (ACMM), comandadas por Ramón Isaza, y el Bloque Metro auspiciado por las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), comandadas por los Castaño, la organización regional fue más incipiente y no alcanzó la fortaleza y capacidad con que contó el Movimiento Cívico antes de su exterminio. Oriente Unido logró articular algunos municipios; sobresalieron fundamentalmente Granada, San Carlos y El Peñol, donde obtuvieron algunos triunfos electorales en los concejos municipales y alcaldías populares. Pero de nuevo, no habiendo levantado el movimiento social aún la cabeza, empezaron las amenazas, persecuciones, masacres y asesinatos selectivos, nuevamente, por parte de los grupos paramilitares, incluso esta vez con mayor ensañamiento. Por ejemplo, en San Carlos fueron asesinados dos conductores de transporte veredal por su cercanía al movimiento Unidos por San Carlos (uno de estos fue Wilson Tamayo y el otro un señor al que apodaban “Chúcuro”); y en El Peñol fue asesinado el joven universitario Norman Giraldo por su participación en el movimiento Oriente Unido, del que era miembro activo, y se señaló a la misma policía de perpetrar el asesinato (Zapata, 2014, p.63-64).

Como lo menciona Rubén Darío Zapata:

Por tener un discurso en contra de las políticas de los partidos tradicionales en la región, por hablar de la resistencia frente a estas políticas y promover marchas y paros cívicos, el movimiento cívico empezó a ser tildado

por estos mismos partidos como una plataforma de la insurgencia, eso lo expuso ante la arremetida paramilitar de la organización de Ramón Isaza que se había fortalecido en el Magdalena Medio y ya había construido un corredor permanente hacia los pueblos del oriente, avanzando desde San Luis. Entonces Oriente Unido se desarticuló “voluntariamente”, por prevención. Su última reunión se realizó en El Peñol en 1997, donde se concluyó que ya no había condiciones para continuar con el trabajo (Zapata, 2014, p.63)

Sin embargo, el haber disuelto la organización regional de Oriente Unido como una medida para salvaguardar la vida de los líderes y lideresas del nuevo movimiento, no fue suficiente. La arremetida continuó y de manera más radical; la estocada final y la más brutal contra este tuvo lugar en el municipio de San Carlos, donde desde la década de 1980 los grupos paramilitares se habían ensañado con los líderes cívicos y las organizaciones sociales. Así, a la media noche del 24 de febrero de 1998 –casi que en una conmemoración macabra y simbólica del asesinato del primer líder del Movimiento Cívico en la región, el médico Julián Conrado, sucedido precisamente en San Carlos el 23 de febrero de 1983, 15 años atrás–, incursionó al municipio una estructura paramilitar de por lo menos 200 hombres, y en un desfile de la muerte, con “lista negra” en mano, iniciaron un recorrido sacando de sus casas a la fuerza a distintos pobladores de San Carlos, entre los que se estaban, precisamente, algunos integrantes del Oriente Unido y sobrevivientes de la década anterior del Movimiento Cívico, así como varios funcionarios de la Alcaldía municipal.

Esa noche fue asesinado, por ejemplo, Mariano Bedoya, miembro activo de los movimientos cívicos de las décadas de 1970 y 1980 que había retornado hacía poco al municipio; también Rocío Giraldo Castaño, hermana de Jaime y Alberto, dos destacados líderes cívicos que ya habían sido asesinados en la década anterior; igualmente Víctor Velázquez

(hermano de Gabriel Velázquez, líder del Movimiento Cívico asesinado en la década de 1980) y Libardo Duque, miembros activos de la nueva organización social. A estos dos últimos se les asesinó de una forma más cruel y despiadada, tal vez simbolizando que el modelo desarrollo seguiría imponiéndose a sangre y fuego en la región (Olaya, 2012, p.21-33); fueron conducidos hasta el puente La Holanda, allí mismo los decapitaron con motosierra, sus cuerpos fueron lanzados al embalse de la hidroeléctrica (a la que tanto se opuso el Movimiento Cívico) y sus cabezas fueron llevadas por los paramilitares como “trofeo”. Como lo menciona Rubén Darío Zapata en una crónica al respecto: “se concluyó que había una suerte de jerarquización de las víctimas. A los líderes más connotados o arriesgados los asesinaban produciéndoles más sufrimiento, como una especie de escarmiento para los demás” (Zapata, 2014, p.65). Con este macabro y fatal desenlace se terminó de mandar el mensaje de muerte sobre las organizaciones cívicas, movimientos sociales y sectores políticos opositores al statu quo y a la imposición del desarrollo. Concluye Zapata que:

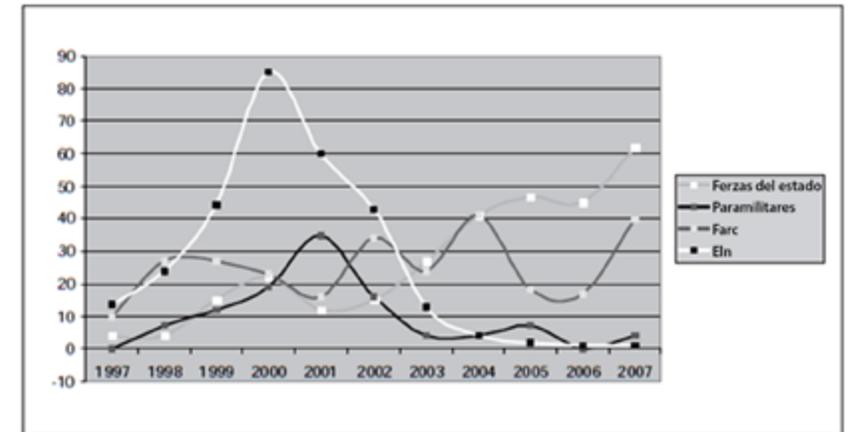
Al analizar los hechos, podía concluirse que los asesinatos de la noche anterior habían sido selectivos y al parecer un criterio para la selección tenía que ver con la participación de las víctimas en trabajo político y comunitario. Había entre ellos algunos sobrevivientes del movimiento cívico de los años 80, que se había llamado Movimiento de Acción Sancarlitana. Y los otros eran, en su mayoría, militantes o simpatizantes de Oriente Unido, una organización popular que nació a principios de los 90, alimentada por todas las organizaciones cívicas y comunitarias de la mayoría de los pueblos del oriente antioqueño, con mucha fuerza en San Carlos, gracias a un movimiento que se llamó Unidos por San Carlos. (Zapata, 2014, p.62)

Este fue entonces el ocaso del movimiento social en el Oriente antioqueño, un exterminio contundente y sistemático de

la alternativa política sin precedentes en la región, pero similar a lo que venía sucediendo en otras partes del país con la persecución a los diferentes sectores de izquierda, a los movimientos populares y a los líderes sociales. El propósito fue el de acallar a las organizaciones que se disputaban el poder político y se oponían el “desarrollo”, se buscó a todo costo pacificar al Oriente, política y militarmente. Mientras tanto la confrontación armada se recrudeció en el escenario regional, y a partir de 1997 se empezó a generar una verdadera catástrofe humanitaria. Arreciaron los desplazamientos forzados de grandes capas de la población oriental en los diferentes municipios, se generalizaron las masacres (sobre todo en las zonas rurales), continuaron las limpiezas sociales, las torturas y los asesinatos selectivos, se utilizaron violaciones sexuales como método de guerra y control sobre el cuerpo de las mujeres, y se impusieron toques de queda por parte de los armados, prohibiendo la libre circulación de las comunidades.

El paramilitarismo en alianza con la Fuerza Pública (Ejército y Policía) se posicionó en distintas zonas de la región y estableció un control acérrimo y brutal sobre los municipios y la población, buscando arrasar con las bases sociales de las insurgencias, a su vez que disputar los corredores estratégicos. Por su parte, las guerrillas del ELN y las FARC radicalizaron mucho más sus acciones armadas con los bloqueos a la autopista Medellín - Bogotá, los atentados a la infraestructura de los complejos hidroeléctricos, las tomas a los cascos urbanos y el secuestro de sectores políticos y adinerados de la región (Higueta, 2018). Las comunidades fueron las mayores afectadas, pues quedaron en medio de la confrontación entre los diferentes bandos y sufrieron todo tipo de victimizaciones. La siguiente gráfica tomada de una investigación de Clara Inés García sobre el conflicto armado en el Oriente antioqueño, da muestra del escalamiento de la confrontación durante estos años:

**Gráfica 2**  
Acciones unilaterales de grupos armados  
en el Oriente antioqueño, 1997-2007



Fuente: Cerac

Sin embargo, el tejido social y organizativo, junto a la capacidad de movilización social que habían acumulado las comunidades del Oriente antioqueño durante cuatro décadas de luchas populares, fue el sustento social de una nueva serie de acciones que emprendieron las poblaciones en resistencia a la guerra. Como lo señala García “una conciencia colectiva de capacidad de acción conjunta originada en los movimientos cívicos de la década de los ochenta, aportaron el capital social básico para la construcción de identidades y de acción colectiva” (García y Aramburo, 2011, p. 134). La existencia de este “capital social” posibilitó que emergieran con fuerza actores colectivos que se oponían a la guerra; allí fue destacado el papel de las mujeres puesto que fueron quienes encararon la resistencia comunitaria contra la violencia: eran las madres, las hermanas, las esposas y las hijas de las víctimas, que se juntaban para reconstruir sus territorios. Generalmente la guerra provoca la destrucción de las redes y tejidos de los actores sociales, dejándoles sin capacidad de acción, pero en la región fue distinto. La “situación al límite” generó que entre 1995 y 2001 se diera una movilización con-

tudente en los diferentes municipios para frenar los efectos de la guerra, desescalar la confrontación y enviar un mensaje de paz a los bandos armados. Allí fue clave por ejemplo la organización de AMOR (Asociación de Mujeres del Oriente antioqueño), a la par que la Diócesis de Sonsón - Rionegro, el Concejo Regional de Alcaldes y la Asamblea Regional Constituyente. Como lo plantean García y Aramburo:

En ese primer periodo los actores de la región se enfocaron en lo fundamental a neutralizar o disminuir los efectos más dolorosos que la guerra estaba produciendo en la población civil, sin pretender intervenir ni discutir el rumbo ni las razones que los actores armados esgrimían para adelantar esa contienda. (García y Aramburo, 2011, p.137)

En el 2001 se establecieron por ejemplo canales de diálogo con los armados. Con el apoyo de la Iglesia y la Gobernación de Antioquia, la población logró conversar con el ELN y pactar una tregua de seis meses. Se organizaron asambleas comunitarias en los municipios y se emprendieron acciones como marchas, caravanas, jornadas de la luz, jornadas de silencio, cierre de establecimientos públicos, izada de banderas blancas, entre otra serie de acciones locales en resistencia a la guerra. Posteriormente entre 2001 y 2003, la acción colectiva se enfocó no solo en resistir a la guerra sino en empezar a construir un proyecto regional, que permitiera atender a las víctimas y reconstruir los territorios, aún en el marco de la confrontación.

Allí, paradójicamente, sobresalió la organización Prodepaz, corporación que nació en 1999 aglutinando a las empresas del sector eléctrico (ISA e ISAGEN) a las que en otrora tanto se opusieron los movimientos cívicos, para promover un programa de desarrollo y paz en la región; fue esta además la encargada de manejar los recursos gestionados. Se buscó entonces apoyos en la cooperación internacional con la Unión Europea y en trabajo conjunto se creó el “Laboratorio

de Paz”. En dichos laboratorios se aglutinaron organizaciones sociales, ONG’s, instituciones públicas, sectores privados, Iglesia, entre otros; allí se gestionaron una serie de proyectos muy importantes para paliar los efectos de la guerra y reconstruir el territorio y el tejido social en determinado momento. Dicho proceso del Laboratorio tuvo un inicio interesante, de un trabajo más desde las bases y de articulación entre las organizaciones y la institución, sin embargo, los entes institucionales y el sector privado de las empresas fueron ganado terreno y se desdibujó la idea inicial.

Había un debate también sobre que los empresarios e instituciones grandes se apoderaron del Laboratorio de Paz. Prodepaz volvió muy institucional el laboratorio y fueron deficiencias del movimiento para haber cogido la bandera y los aportes de la Unión Europea. Eso fue lo que generó que las comunidades se vieran afectadas por la institucionalización del proyecto.

Por otro lado, desde el 2003 se venían jalando iniciativas para brindar acompañamiento psicosocial a las víctimas, como la conformación de las Promotoras de Vida y Salud Mental (Provisames), y producto de este trabajo, acompañado por Conciudadanía, el CINEP - Programa para la Paz y AMOR, aunado a todas las acciones colectivas de las comunidades en resistencia a la guerra, nació en 2007, en el marco de la negociación del Gobierno de Uribe con los grupos paramilitares, y de la discusión frente a la Ley de Justicia y Paz, la Asociación Provincial de Víctimas a Ciudadanos (Aproviaci), primera organización regional de víctimas en el país. Esta organización logró una representación importante en el escenario nacional y fue parte activa dentro de las discusiones de la Ley de Víctimas que aprobó el Gobierno de Santos (García y Aramburo, 2011, p.145-146).

Es interesante resaltar como aunque el movimiento social y político fue exterminado en sus expresiones del Movimiento Cívico y Oriente Unido; este permitió con su trayectoria acu-

mular un capital social que se ve reflejado en las acciones colectivas que emprenden las mujeres y las víctimas fundamentalmente, en resistencia a la guerra y en pro de construir propuestas para paliar la crisis humanitaria en la región y reconstruir el tejido social y el territorio. Sin embargo, cabe decir que en gran parte este proceso fue cooptado por las instituciones, como lo señala García, el respaldo institucional que logran las comunidades en las iniciativas como los diálogos con los actores armados es importante por el acompañamiento y la legitimidad que alcanzan, sin embargo, fue también la “oportunidad política” que aprovechan el Estado nacional y algunos sectores privados (como las empresas productoras de energía eléctrica por ejemplo) para “para institucionalizar el proceso social del Oriente antioqueño e imprimirle su impronta” (García, y Aramburo, 2011, p.142).

En algunos casos, las administraciones municipales y la Gobernación instrumentalizaron al movimiento asambleario para legitimar planes de desarrollo, algunas veces incluso re-victimizando a las comunidades, puesto que con estos abrían soterradamente las puertas a la continuación de la implantación del modelo de desarrollo, con la imposición de nuevas hidroeléctricas y micro-centrales que seguirían –como en décadas anteriores– desplazando a la población. También, al existir una buena cantidad de recursos económicos de la cooperación internacional, algunas ONG’s buscaron captar estos recursos para sus proyectos sin tener en cuenta realmente las necesidades de las comunidades. Cayeron muchas veces en un intervencionismo que saturó a las organizaciones de base, y se vivió un “desfile de chalecos” sin ningún nivel de articulación, pues cada quien tirando para el lado de sus intereses. Por otro lado, en algunos municipios se cooptaron líderes naturales de las comunidades que pasaron a ser “funcionarios”, dejando un vacío de liderazgo en las organizaciones sociales; se generó un asistencialismo que desmovilizaba la idea inicial “de víctimas a ciudadanos”, pues el paternalismo anuló la capacidad autogestionaria con

que emergió el movimiento, restando autonomía e independencia en la participación y sus acciones. Un investigador social de la región y miembro del Movete, plantea sobre esta situación que.

El laboratorio de Paz generó muchas veces que se beneficiaran alcaldes y ONG’s, pero qué, la región continuaba igual y no se logró la reconstrucción. En ese momento no tuvimos la capacidad de reconstruir la región, las empresas sí, pues llegaron con los megaproyectos, industria y monocultivos.

Este intervencionismo estatal y de las ONG’s empezó a agotarse hacia el año 2010. Como se verá a continuación, de nuevo empezaron a emerger las organizaciones sociales con un carácter propiamente popular, de base, y una mirada más crítica en relación a la situación afrontada por la región, tanto en el marco de la imposición del modelo de desarrollo económico como de la dinámica de violencia desprendida de este, además, con la memoria viva los hechos recientemente ocurridos. Se dio entonces el inicio de la reconstrucción del movimiento social en la región, representado fundamentalmente en el actual Movimiento Social por la Vida y la De-



**Imagen 2 Reivindicación de líderes asesinados en el Oriente antioqueño.  
X Festival del agua, San Francisco.  
Tulpa Comunitaria.**

fensa del Territorio - Movete como organización regional en defensa del territorio; sin embargo, existen otras iniciativas comunitarias, juveniles, de mujeres, artísticas, comunicativas, entre otras, de alcance más local y subregional, que de igual manera aportan a la re-construcción de la organización popular, al fortalecimiento de la participación democrática y al tejido social en el Oriente antioqueño.

### **El Oriente antioqueño 2006-2012: con la pacificación del conflicto armado llega “el desarrollo”**

Después de haber transitado por una época de violencia extensa, luego del año 2006 la situación en el Oriente antioqueño empezó a cambiar paulatinamente. Las guerrillas habían sido expulsadas del territorio, los paramilitares oficialmente desmovilizados y la Fuerza Pública había sido aumentada significativamente en la región. En términos de enfrentamientos armados, se generó un ambiente de relativa tranquilidad en el Oriente y en el 2008 se declaró como territorio militarmente consolidado (CJL, 2018, p.5-6).

En este marco de pacificación, se generaron procesos de retorno de las familias desplazadas a sus tierras, en algunos casos acompañados por programas estatales (“Familias en su Tierra”, “Retornar es Vivir”) y en gran parte por puro esfuerzo personal sin acompañamiento institucional. Además, en el 2011 se aprobó la Ley 1448 de Víctimas y Restitución de Tierras que promovió el restablecimiento de los derechos de las víctimas a la verdad, justicia, reparación integral y la no-repetición.

Paralelamente al proceso de retorno, se reactivaron los proyectos minero-energéticos en el territorio del Oriente antioqueño, ya desocupado por los grupos armados ilegales. Estos proyectos en muchas ocasiones ya se venían gestando desde los años 80 por medio de estudios o licencias y se habían parado durante la época del conflicto. Esto demuestra cómo “los vencedores de la guerra implementan su modelo econó-

mico, el proyecto minero-energético en el Oriente antioqueño” (Restrepo, 2015, p.24), con un énfasis en la construcción de hidroeléctricas y micro-centrales. Ya desde el 1997, en el Plan Estratégico de Antioquia (PLANEA), retomado en el Plan de Desarrollo Departamental “Antioquia para todos, manos a la obra (2008-2011)” del gobernador Luis Alfredo Ramos Botero, se le había asignado al Oriente antioqueño la producción energética (junto con la industrialización), básicamente para la exportación (CJL, 2011).

En este sentido, los intereses de la población que estaba retornando, queriendo levantar sus fincas principalmente de producción agrícola, chocaron nuevamente con las intenciones de las empresas de desarrollar proyectos minero-energéticos en la región. Esto último ocasionó daños socio-ambientales e impuso nuevos despojos de tierra y desplazamientos de población, causados esta vez no por el conflicto armado, sino por la expropiación de tierras y viviendas para proyectos minero-energéticos, lo que conllevó a una re-victimización de las comunidades. Dichas expropiaciones han sido legitimadas por la figura de “utilidad pública e interés social”, aunque en realidad benefician fundamentalmente a intereses económicos privados. Es por ello que estos proyectos se perfilan como amenazas a una paz estable y duradera en la región (CJL, 2017, p.3).

Directamente después de la pacificación del Oriente antioqueño, aún era muy notable el dominio de las ONG’s y la institucionalidad en el trabajo con las comunidades. El “Laboratorio de Paz”, un programa apoyado ampliamente por la Unión Europea e implementado por Prodepaz con la intención de consolidar la paz en la región, inició en el Oriente antioqueño en el 2003 (como se mencionó arriba). En consecuencia, hubo perspectivas muy diversas sobre el funcionamiento y los resultados de este programa enfocado en el trabajo con la institucionalidad y las grandes ONG’s y por ende con un aporte muy limitado a la reconstrucción del tejido social de las comunidades (Carlos Olaya y Rodolfo Sierra,

Taller de sistematización, 2018). Ante un tejido social debilitado y un movimiento social autónomo inexistente en aquel momento, las empresas tuvieron ventaja para entrar con sus megaproyectos a la región.

El informe de derechos humanos del Oriente antioqueño 2011-2012, presentado por la Mesa de Derechos Humanos del Oriente antioqueño, destacó justamente el conflicto alrededor del modelo minero-energético en la región. Este informe se basó en las denuncias de las comunidades afectadas que llegaron a la Mesa, por las cuales en ese momento se encontró con “que los desplazamientos se empiezan a hacer por el tema de los proyectos [minero-energéticos] nuevamente” (Juan Bernal, Taller de sistematización, 2018). El informe manifestó además una profunda preocupación por la crisis humanitaria que podría ocasionar la implementación de los 52 proyectos hidro-energéticos en trámite para ese momento, afectando la autonomía de las comunidades y poniéndolas en riesgo de re-victimización. Llama la atención el hecho de que este informe tratara por primera vez la temática minero-energética como amenaza en términos de violaciones a derechos humanos, como se refleja en el siguiente enunciado:

Se abre una nueva etapa en la agenda humanitaria del Oriente de Antioquia, que en esta ocasión no tiene que ver con el número de asesinatos, desaparecidos o desplazados, sino con la planificación democrática del futuro del territorio, una planificación diseñada desde las características y necesidades de las comunidades que habitan la región. Una construcción democrática de la región es la única forma de evitar cometer los mismos errores del pasado y avanzar efectivamente en la consolidación del Oriente antioqueño como una región ejemplo para el resto del país desde una perspectiva de garantía de los derechos económicos sociales y culturales de las comunidades de la región. (Mesa de DDHH del Oriente antioqueño, 2012)

La Mesa de DD.HH. logró indicar que “hay una relación entre las dos décadas de conflicto armado intenso que se vivieron en el Oriente antioqueño y todo este tema de los megaproyectos (minero-energéticos)” y que además “la crisis de épocas pasadas por el conflicto fue luego reemplazada por la crisis de la llegada de los proyectos extractivos” (Juan Bernal, Taller de sistematización, 2018). El texto también hizo un reconocimiento del movimiento social en defensa del territorio y reafirmó la continuidad de la lucha social alrededor de la problemática minero-energética: El texto también hace un reconocimiento del movimiento social en defensa del territorio y reafirma la continuidad de la lucha social alrededor de la problemática minero-energética:

En ese sentido, cuatro décadas después del surgimiento del movimiento cívico del Oriente antioqueño, las reivindicaciones de las comunidades afectadas por los proyectos minero-energéticos siguen siendo las mismas. Participar de forma activa y eficiente en el diseño de los modelos de desarrollo que se instauran sobre sus territorios, fueron y son las reivindicaciones de las comunidades afectadas por la implementación de proyectos mineros e hidroeléctricos. (Mesa de DDHH del Oriente antioqueño, 2012.)

El informe desató una movilización y elevó la discusión al nivel regional del Oriente antioqueño (Juan Bernal, Taller de sistematización, 2018), lo que se convirtió en un impulso para la fundación del Movete.

### **Articulación regional: los ríos que se juntan para desembocar en Movete**

La comunidad no se quedó quieta ante la presión del modelo de desarrollo extractivista que se consolidaba en el Oriente antioqueño después de la pacificación militar (Jaime Gómez, Taller de sistematización, 2018). La amenaza y la presión

convocaron a la movilización (Carlos Olaya, Taller de sistematización, 2018). En ese escenario de retorno y de la amenaza del resurgimiento de los proyectos minero-energéticos, varias organizaciones empezaron a articularse alrededor de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA) y de la defensa del territorio con la permanencia en él, evitando la re-victimización anunciada (CJL, 2017, p.1). Un primer evento masivo de reencuentro de las comunidades a nivel regional fue el Foro Energético del Oriente antioqueño, el 24 de septiembre del año 2007 en el municipio de El Santuario. Varias organizaciones sociales de Medellín y del Oriente antioqueño como la Asociación de Pequeños y Medianos Productores del Oriente antioqueño (ASOPROA), la Asociación Campesina de Antioquia (ACA), Asocomunales de Cocorná, Granada, San Luis, San Francisco, la Coordinadora Nacional de Usuarios de los Servicios Públicos Domiciliarios, la Corporación Jurídica Libertad, el periódico Periferia, la Red de Organizaciones Comunitarias y el Instituto Popular de Capacitación (IPC) lograron convocar a más de 2500 campesinos de la región. Después de mucho tiempo, las comunidades se reunieron nuevamente para debatir y cuestionar los parámetros establecidos por las empresas y las administraciones municipales y departamentales en la prestación de servicios públicos domiciliarios. Reflexionaron además sobre la mala calidad y altas tarifas de los servicios públicos en una región productora de energía, preguntándose ¿para qué la ampliación de producción de energía por medio de las hidroeléctricas? La conclusión es que era, principalmente, para alimentar otras actividades extractivas (minería) y para la exportación. Finalmente, en este espacio se hizo el llamado a organizarse para enfrentar el actuar de las empresas (El Retorno, 2007).

Como antecedente a este Foro estuvo el Tribunal Internacional de Opinión que se realizó en el 2007 en Medellín, y al que IPC, Periferia, ACA, SintraISA, SintraIsagen y ASOPROA convocaron a la empresa ISA por las problemáticas de los servicios de electricidad. La postura de las empresas

al acercarse a las comunidades para negociar el tema de los servicios públicos y la entrada de los proyectos se basaba en una postura de exigencia. Argumentaban que la destrucción de la mayoría de las torres de transferencias de energía por medio de los ataques a la infraestructura por los actores armados durante el conflicto, les obligaba a hacer grandes inversiones para su reconstrucción (Carlos Olaya, Taller de sistematización, 2018).

A raíz del Foro Energético se creó la Mesa Energética del Oriente antioqueño, una articulación de diversas organizaciones sociales y entes gubernamentales que resultó como espacio de interlocución con las empresas. El principal logro de la Mesa fue la negociación de la liberación de las deudas por parte de EPM a los campesinos retornados a sus territorios, que encontraban cuentas de hasta cuatro millones de pesos por los servicios acumulados en su ausencia por el desplazamiento.

En el Primer Foro de Servicios Públicos organizado por la Mesa Energética del Oriente y celebrado el 3 de agosto del año 2009 en El Peñol, se retomó el tema de las altas tarifas de energía en la región. Sin embargo, el debate se centró en el provecho para los municipios acogedores de proyectos hidroeléctricos, reclamando que los ingresos por transferencias a los municipios por estos proyectos no contribuían a las comunidades campesinas y el desarrollo local. Aparte de las comunidades campesinas participaron también empresas generadoras de energía, la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare (Cornare) y los órganos de control departamental del Foro (IPC, 2009)

Como resultado del Foro, la Mesa Energética presentó al Congreso de la República el proyecto de Ley 088 de 2010 que buscaba modificar la Ley 99 de 1993, mediante la cual se reglamentaban las transferencias del sector energético para las regiones con la intención de aumentar el monto de la transferencia y que pudieran ser de libre inversión (y no

limitados a cierta destinación). En resumen, los principales cambios propuestos de importancia para lo que acá compete eran:

- Hidroeléctricas a partir de una potencia de 3 mil kw pagan transferencias (antes a partir de 10kw).
- Transferencias aumentan del 6% al 8%. De esto 5% para los municipios y distritos (antes 3%).
- Redistribución diferente de los ingresos. Ahora se puede invertir en otros asuntos, no solo en el propio cuidado de las centrales hidroeléctricas, p.ej. en temas de desarrollo rural sustentable. (Proyecto de Ley 088, 2010)

Poco tiempo después, la Mesa Energética del Oriente antioqueño se desarticuló. Sin embargo, a las dos semanas del Foro, el 5 de octubre de 2009, y también en el municipio de



**Imagen 3: Encuentro Departamental de Servicios Públicos y Pobreza en el municipio el Peñol, 5 de octubre 2009. Foto: IPC**

El Peñol, se celebró el Encuentro Departamental de Servicios Públicos y Pobreza como parte del Foro Social: “Por la Vida, la Dignidad e Identidad Popular”, que se llevó a cabo en Medellín y el Oriente antioqueño del 3 al 11 de octubre de 2009, con el objetivo de promover la movilización de las organizaciones sociales y comunitarias de ambos territorios.

En el Encuentro se puso en debate la situación de pobreza y exclusión que viven las comunidades rurales en las subregiones –principalmente aquellas con presencia de megaproyectos auríferos e hidroeléctricos–, pese a residir en una zona de gran riqueza energética y en contraste con las ganancias e incluso las transferencias de las empresas como ISAGEN y EPM. El enfoque del trabajo en esos años estuvo sobre los servicios públicos, sus altas tarifas y su mala calidad. Sin embargo, en los debates del Encuentro se hicieron notar ya claramente las preocupaciones con respecto a la pobreza, los planes departamentales de aguas y la explotación de los bienes comunes por parte de las transnacionales en el departamento antioqueño y sus afectaciones sobre las comunidades (IPC, 2009). Este debate se reflejó en un documento de carácter declaratorio con el título “Transferencias, Equidad y Desarrollo Regional” del Equipo Departamental, con mensajes como:

“[N]os enfrentamos a dos formas de ver el desarrollo. Una, aquella donde las comunidades deciden cómo quieren vivir y encuentran del Estado las facilidades para hacerlo. La otra es donde el desarrollo es entendido como la capacidad de llevar a cabo proyectos de infraestructura, hacer embalses, hidroeléctricas con las que se diversifican las formas de ingresos para un país, pero en el caso nuestro, en el país son como cinco familias y cientos de multinacionales que disfrutan del desarrollo, a los demás nos arrojan las migajas que quedan en el banquete. (EDSPP, 2009)

Aparte de iniciar el debate del modelo de desarrollo en la re-

gión, durante el Encuentro también se denunció el aumento desmedido de las tarifas en algunas subregiones y poca cobertura en otras, y se criticó la presión y privatización de los acueductos veredales y comunitarios. Las conclusiones y propuestas principales del encuentro fueron la elaboración de una gran agenda regional que plasmara las propuestas de las comunidades y organizaciones regionales por un cambio en los modelos de desarrollo, incluyendo la defensa de los bienes comunes, en particular el derecho al agua, la defensa y el derecho al territorio y luchar por la defensa y garantía de los derechos humanos (EDSPP, 2009).

El Encuentro Departamental de Servicios Públicos y Pobreza del 2009 fue reconocido posteriormente como el primer Festival del Agua del Oriente antioqueño y con este se reinició un ciclo de movilización, organización y resistencia desde las comunidades en la región.

Los Festivales del Agua, promovidos por el Equipo Departamental de Servicios Públicos y Pobreza (que existió hasta el 2014), se siguieron celebrando anualmente en diferentes municipios de la región. Allí se trabajaron inicialmente cinco líneas: hidro-energía, minería, monocultivos, seguridad/soberanía alimentaria, y conflicto armado (víctimas y memoria) (Carlos Olaya, 2012).

El segundo Festival del Agua se llevó a cabo en el año 2010 en Cocorná con un foro sobre la desconexión de servicios públicos y la gran minería. Este Festival se dio en el marco del auge de las microcentrales y su licenciamiento. Entre otras, la hidroeléctrica El Popal en Cocorná acababa de recibir la licencia ambiental y se había aprobado la concesión de aguas sobre el río Cocorná. Durante el Festival se expresó un fuerte rechazo por parte de las comunidades a los modelos de desarrollo basados en el extractivismo y en concreto a las hidroeléctricas en la región. En esta ocasión se experimentó el compromiso de las comunidades por medio de su aporte llevando su propia comida al Festival, lo que subraya

su carácter comunitario-político (Benito Guarín, Taller de sistematización, 2018).



**Imagen 4: Festival del Agua 2010 en Cocorná.  
Foto: Periferia Prensa Alternativa.**

El tercer Festival del Agua, realizado en el año 2011 en San Francisco, incluyó un foro sobre las problemáticas del municipio. En esta edición nació la propuesta de la marcha carnavalesca por el casco urbano del municipio como ejercicio de comunicación y denuncia, con expresiones de protesta lúdico-artísticas, elementos que fueron retomados en los festivales siguientes. Además, se hizo un ejercicio lúdico-formativo tipo carrusel sobre el agua y su defensa (Periferia, 2011).

En el cuarto Festival del Agua, realizado en 2012 en Granada, se efectuó un foro sobre los megaproyectos en la región. Y el quinto Festival en El Carmen de Viboral, en 2013, incluyó un foro sobre la minería y la seguridad alimentaria<sup>14</sup>.

<sup>14</sup> Veá lista de los festivales del agua en <http://moveteoriente.blogspot.com/2014/10/el-sexto-festival-del-agua-en-defensa.html>



**Imagen 5: Festival del Agua del 2011 en San Francisco, destaca el elemento de la marcha carnaval.**

Estos primeros Festivales del Agua, antes de la fundación de Movete, tuvieron ciertas limitaciones. En términos geográficos se concentraban básicamente en la zona bosques o en cercanía a la autopista Medellín-Bogotá. Principalmente faltaba el elemento organizativo constante que permitiera darle seguimiento a lo que se trabajaba en los Festivales (Juan Bernal, Taller de sistematización, 2018).

En agosto del 2013, dos meses antes del Festival del Agua en el Carmen de Viboral, se dio el Paro Nacional Agrario (además minero y camionero), que también se vivió en el Oriente antioqueño. Movete aún no se había creado y la participación de las organizaciones de la región se dio de manera más bien espontánea y no planificada, pero se creó un ambiente de movilización, y la experiencia y la oportunidad de reivindicar las formas de protesta incentivó la posterior articulación y la continuidad de la lucha social en la región. También se hizo notar la necesidad de un actor organizado, de una confluencia y de debates sobre los temas tratados.

Del Festival del Agua en 2013 resultó un manifiesto que declaraba entre otras cosas

Nuestro desacuerdo frente al modelo de desarrollo económico extractivo que profundiza la pobreza, pasa por encima de las comunidades locales, de culturas y sueños colectivos [y] nuestra voluntad de estar juntos, firmes y persistentes en el propósito de la defensa del territorio, la autonomía territorial para ordenar y planear los usos y el destino de nuestros territorios, en un horizonte de construcción de paz y vida digna. (Manifiesto, 2013)



**Imagen 6: Festival del Agua 2013 en El Carmen de Viboral.**

Poco después, en noviembre de 2013, en una reunión en La Piñuela (Cocorná), se le dio nombre oficial a esta articulación que se había gestado durante varios años, y se fundó el Movimiento Social por la Vida y la Defensa del Territorio – Movete.

Alba Gómez, integrante de Movete, resume las sensaciones del momento:

Sentíamos que lo territorial nos convocaba. Es decir, ya era el territorio el que sentíamos y debíamos defender, sobre todo porque la problemática era muy común,

principalmente el tema del agua, y que en ese sentido teníamos que defender. La pregunta era ¿el territorio para quién es? ¿Cómo lo vamos a defender? (Alba Gómez, Taller de sistematización, 2018)

En Movete desembocaron varios espacios organizativos. Además del Equipo Departamental de Servicios Públicos y Pobreza, también se articuló la Asamblea de Bosques. Este último era un proceso inicialmente de organizaciones e individuos de los municipios de la zona bosques, es decir Cocorná, San Francisco y San Luis, al que se sumaron posteriormente El Carmen de Viboral y El Santuario, que empezó a funcionar en el 2010 alrededor de la elaboración de planes de vida en los municipios y que luego se organizó en cinco líneas de trabajo: ambiental, social, cultural, económico y político. En particular la zona de confluencia de la Asamblea de Bosques sintió la arremetida de las microcentrales que en el 2013 llegaron masivamente a estos municipios, lo que se entiende como otro factor detonante para la fundación de Movete. Este ambiente también lo describe un artículo de Periferia:

Este panorama de inundaciones para el oriente antioqueño preocupa a sus habitantes y los motiva a la organización y resistencia, ya que a partir de la experiencia que tienen con las centrales que están instaladas en sus territorios identifican algunos impactos y problemáticas que pueden volver o agudizarse en la región. (Periferia, 2012)

Estos espacios organizativos mencionados confluyeron para organizar el Festival del Agua en El Carmen de Viboral en 2013, con un carácter más regional, del que resultó, como ya se dijo, la fundación de Movete (Juan Bernal, 2018). En la fundación de Movete se reflejó el cambio de los impulsos de recomposición del tejido social desde las instituciones y ONG's a una apropiación y un proceso más desde las organi-

zaciones sociales y procesos locales, que empezaron a cobrar protagonismo en la región (Rodolfo, Taller de sistematización, 2018).

En el momento de fundación, también formaron parte las siguientes organizaciones: ACA, Asoproa, CEAM, Colectivo Antorcha, Conciudadanía, Periferia y Vigías del Río Dormilón de San Luis. Después, en el mismo año, se adhirió la Corporación Jurídica Libertad. En el 2014 llegaron Kavilando, la Corporación Ambiental Naturaleza y Bosque NATY-BOS de San Carlos, las Mesas por la Defensa del Agua, la Vida y el Territorio de San Carlos y la Red de Acción Frente al Extractivismo (RAFE). En el 2015 se articularon la Tulpa Comunitaria, la Veeduría Ciudadana Ambiental de Sonsón y el CTP de Sonsón. Cocorná Consciente se articuló en el 2016, y Manos de Sol, Colectivo Utopía y Corpoguama en el 2017.

Hoy en día Movete se entiende como “Una articulación de comunidades, procesos locales, organizaciones sociales y activistas, quienes formamos un movimiento regional desde la participación popular, a partir del empoderamiento comunitario para la construcción colectiva de los territorios” (Movete, 2018). En ese sentido, aglomera a organizaciones de distinta naturaleza de 13 municipios del Oriente antioqueño: San Francisco, Cocorná, San Luis, La Unión, Sonsón, Nariño, Argelia, San Carlos, Granada, El Carmen de Viboral, El Santuario, Marinilla y Alejandría.

En el año 2017 Movete pasó por una fase de consolidación interna, en la que reflexionó y desarrolló un marco filosófico-estratégico del movimiento, como parte del plan estratégico en el que se refleja su apuesta política.

De manera resumida, el Movete sueña con una realidad transformada en forma de paz territorial con justicia social y ambiental, que se compone de la comprensión de los seres humanos como parte de la naturaleza, el reconocimiento del campesinado como sujeto político y de derechos, la garantía de los derechos y la auto-determinación de las comunida-

des, con el fin de la permanencia con condiciones de vida digna en el territorio del Oriente antioqueño. Para alcanzar este sueño, actúa en el marco de cinco líneas estratégicas: fortalecimiento organizativo de procesos locales y de Movete; procesos formativos e investigativos comunitarios; movilización e incidencia política y social; acciones jurídicas y de garantías para defensores/as; y comunicaciones. Este actuar está dirigido a defender los bienes comunes naturales y culturales del Oriente antioqueño, en particular el agua, confrontando el modelo hegemónico de desarrollo centrado en el extractivismo, y proponiendo alternativas a este (Movete, 2018).

### **El río continua su cauce:**

Hoy por hoy, en el Oriente antioqueño renace el movimiento social después de varios periodos de flujos y reflujos en la movilización popular y las formas de acción colectiva en la región; nuevamente empiezan a entretorse redes de apoyo mutuo y de cooperación entre las distintas expresiones populares (colectivos, organizaciones, asociaciones, mesas, comités, etc.), en torno al ejercicio fundamental de la defensa de la vida y la construcción de los territorios. Poco a poco la protesta social, la participación ciudadana, la defensa de los DDHH, el ambientalismo, la memoria, entre otros procesos han empezado a abrirse un espacio en la agenda regional. Emerge nuevamente un actor colectivo en el territorio, dando continuidad a las luchas sociales del pasado en defensa de los bienes comunes y culturales, en resistencia frente a una nueva arremetida extractivista que busca seguir imponiendo el discurso perverso del “desarrollo”, destruyendo los ecosistemas y desarraigando a las comunidades. El recuento realizado por las luchas populares y ambientales en el Oriente antioqueño, permite reflexionar sobre algunos desafíos que tienen por delante las organizaciones populares que renacen hoy en la región, además de algunos aprendizajes políticos que nos deja el repaso por la historia reciente de los movimientos sociales:

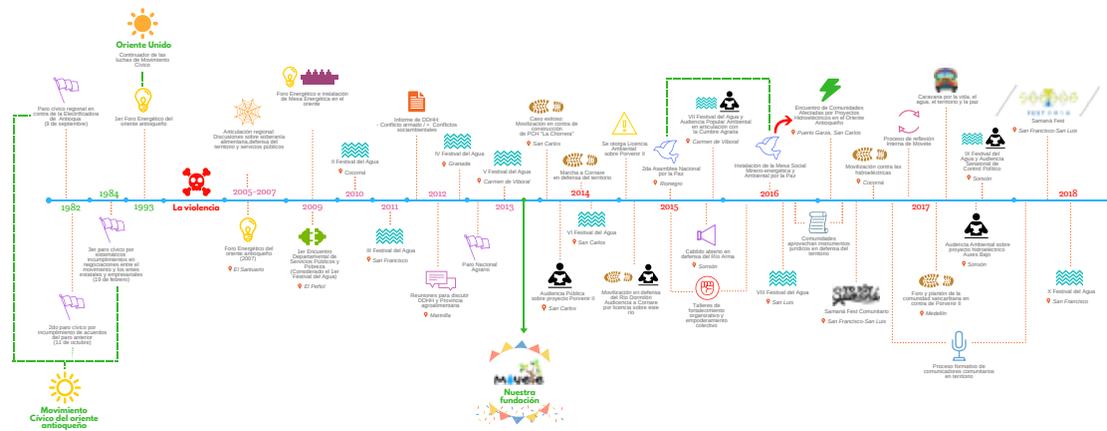
- Un aprendizaje importante que nos dejan los movimientos cívicos en la región, es el de tener la capacidad de trascender lo local para pensarse en clave regional; el movimiento logra conseguir una capacidad arrolladora cuando comprende los problemas desprendidos de la imposición del “desarrollo” como región, por tanto se requiere generar articulaciones para buscar soluciones comunes y aunar fuerzas en las acciones colectivas en defensa del territorio.
- Resistir desde la propuesta. Los movimientos populares en la región se han caracterizado por la creatividad y la capacidad de autogestión, este elemento le permitió aportar a la construcción de los territorios jalonando proyectos como las asociaciones populares de vivienda, la construcción de escenarios deportivos, las cooperativas campesinas, las expresiones artísticas y culturales, entre otra cantidad de acciones que posibilitaron un importante arraigo popular y un avance significativo en la construcción de un proyecto político propio.
- Los movimientos cívicos en la medida que lograron una plena identificación con el sentir y las necesidades de las comunidades, lograron fortalecer la participación y ampliar su base social. La agenda y las reivindicaciones se han construido, en la tradición de la región, a través de la participación directa de las comunidades en formas asamblearias, no supeditando las directrices de los movimientos a imposiciones políticas o manipulaciones sectarias e interesadas.
- Ramón Emilio Arcila expresa que el Movimiento Cívico fue un germen de poder popular en la medida que logró ser el órgano de participación construido desde las comunidades que habían estado marginadas del ejercicio de la política. Así la democracia realmente participativa se hace indispensable para vincular a las comunidades

de manera activa al movimiento en defensa de los territorios.

- Unidad en la diversidad. Una característica importante de los movimientos en la región ha sido la capacidad de construir una amplia confluencia social, ciudadana y política, cuyo eje de articulación no se ha fijado en aspectos ideológicos ni partidistas, sino en las necesidades concretas de las comunidades y su disposición para la acción. Es decir, el ritmo lo ha marcado la base social y no el manejo interesado de sectores políticos (ni de izquierda ni de derecha). Otro eje importante para confluir y construir desde la diversidad ha sido la defensa del territorio como bandera de lucha, finalmente más allá de las posturas políticas se ha pensado como región teniendo en cuenta que los conflictos socio-ambientales afectan a la totalidad de las comunidades en los territorios.
- Mantener la independencia y autonomía como movimiento. No permitir la institucionalización ni oenegización de las organizaciones populares, pues esta práctica busca cohibir o limitar la acción política de los sectores organizados en los territorios, conteniendo la movilización social.
- La historia de exterminio sistemático de los movimientos sociales y políticos afrontados en la región, deben marcar hoy pautas para fortalecer aspectos como: la defensa de los DDHH, la exigencia de garantías para la participación, las alertas tempranas, los protocolos de seguridad, capacidad de denuncia en medios de comunicación en el ámbito nacional/internacional, la creación de observatorios que hagan análisis de la seguridad en los territorios y organizar formas propias de auto-protección, emulando experiencias de cuidado de los territorios y las comunidades como las guardias indígenas, campesinas o cimarronas en Colombia.

# Línea de tiempo Movete.

## Una lucha heredada



## **Bibliografía**

- Agencia de Prensa IPC (2009). En el Oriente antioqueño, riqueza energética no se traduce en desarrollo.  
Recuperado de:  
***<http://www.ipc.org.co/agenciadeprensa/index.php/2009/08/04/en-el-oriente-antioqueno-riqueza-energetica-no-se-traduce-en-desarrollo/>***
- Agencia de Prensa IPC (07.10.2009). Pobreza en el Oriente antioqueño contrasta con riqueza del territorio.  
Recuperado de:  
***<http://www.ipc.org.co/agenciadeprensa/index.php/2009/10/07/pobreza-en-el-oriente-antioqueno-contrasta-con-riqueza-del-territorio/>***
- Arango Viana, Hernando (2000). *Ramón Emilio Arcila H. Semblanza de un líder*. Impresos COOMUN, Marinilla. Pp. 180
- Arcila, Ramón Emilio (1986). El Movimiento Cívico del Oriente Antioqueño 1981 – 1985. En CINEP (Ed.). *Los Movimientos Cívicos* (Págs. 53-62). Editorial CINEP. Bogotá. Pp. 119
- Arcila, Ramón Emilio (1987). De la protesta a la propuesta. *Tribuna*. Bogotá. Págs. 12-15
- Corporación Jurídica Libertad - CJL, 22 marzo 2011,  
***[https://cjlibertad.org/index.php?option=com\\_content&view=article&id=426:ese-desarrollo-del-que-tanto-hablan-ipara-quien-es&catid=37:orientes&Itemid=74](https://cjlibertad.org/index.php?option=com_content&view=article&id=426:ese-desarrollo-del-que-tanto-hablan-ipara-quien-es&catid=37:orientes&Itemid=74)***

Corporación Jurídica Libertad - CJL (2018). Solicitud de facultación de personal y preparación de una cooperación en proyecto Programa de personal de AGEH –SCP. Medellín.

Corporación Jurídica Libertad – CJL (2017). Proyecto: Fortalecimiento de la comunicación e incidencia política de MOVETE para la defensa del territorio en el Oriente antioqueño. Medellín.

Equipo Departamental de Servicios Públicos y Pobreza (EDSPP) (2009). Transferencias, equidad y desarrollo regional. Recuperado de <https://cjlibertad.org/regiones-29/37-oriente/268-transferencias-equidad-y-desarrollo-regional.html>

Equipo Departamental de Servicios Públicos y Pobreza (EDSPP) (2009). Rotundo éxito del Encuentro Departamental de Servicios Públicos y Pobreza. Periferia Prensa Alternativa. Recuperado de <https://www.periferiaprensa.com/index.php/component/k2/item/522-rotundo-exito-del-encuentro-departamental-de-servicios-publicos-y-pobreza>

Esteva, Gustavo (1996). Desarrollo. En Wolfgang Sachs (Ed.). Diccionario del desarrollo, una guía del conocimiento como poder. PRACTEC. Perú. Pp. 386

Fals Borda, Orlando (1989). Movimientos sociales y poder político. Revista Análisis Político, Número 8, p. 49-59. Disponible en: <https://revistas.unal.edu.co/index.php/anpol/article/view/74240/67083>

García, Clara Inés (2017). Conflicto, discursos y reconfiguración regional. El oriente antioqueño: de la Violencia de los cincuenta al Laboratorio de Paz. Revista Controversia n.189 (diciembre). P. 130-145.

García, Clara Inés y Aramburo, Clara Inés (2011). *Geografías de la guerra, el poder y la resistencia, Oriente y Urabá antioqueños 1990-2008*. INER- Odecofi, Colombia. Pp. 483.

Taller de sistematización (2018). Encuentro y conversación regional con líderes y lideresas del Movete. La Unión, Antioquia.

Higueta, Johan (2017). Enseñanzas políticas del Movimiento Cívico para el MOVETE. Periódico Movimiento Social por la Vida y la Defensa del Territorio - Movete, Edición 3 (año 3), octubre, Oriente antioqueño, p.5.

Higueta Granada, Johan Andrés (2018). La Unión: un territorio en disputa, memorias del conflicto armado (tesis de grado). Departamento de Sociología, Universidad de Antioquia, Medellín (Colombia). Disponible en: [http://200.24.17.74:8080/jspui/bitstream/fcsh/1206/3/HiguetaJohan\\_2018\\_UnionTerritorioDisputa.pdf](http://200.24.17.74:8080/jspui/bitstream/fcsh/1206/3/HiguetaJohan_2018_UnionTerritorioDisputa.pdf)

Higueta, Johan (2017). Memoria viva: la dignidad de recordar a los nuestros. Periódico Movimiento Social por la Vida y la Defensa del Territorio - Movete, Edición 4 (año 4), octubre, Oriente antioqueño, Págs. 12-13.

Juan Bernal (2018). *Reunión del equipo sistematización de Movete. La Unión*.

Juan Bernal (2018). Entrevista virtual.

*Manifiesto Gran Festival del Agua del Oriente Antioqueño “Por La Autonomía, La Defensa del Territorio, la Vida y la Paz”*. El Carmen de Viboral, octubre 26 de 2013.

Markez, Andrés “El Germen” (2011). El festival del agua, en formación para la resistencia. Periferia Prensa Alternativa. Recuperado de: <https://periferiaprensa.com/index.php/component/k2/item/849-el-festival-del-agua-en-formacion-para-la-resistencia>.

Mesa de DDHH del Oriente Antioqueño (2012). Informe de Derechos Humanos – 2011 – 2012. Rionegro: Universidad Católica de Oriente.

Movete (2014). El Sexto Festival Del Agua en defensa del territorio, San Carlos - Antioquia.  
**<http://moveteoriente.blogspot.com/2014/10/el-sexto-festival-del-agua-en-defensa.html>**

Movete (2018). Marco filosófico-estratégico.

Novoa Torres, Edgar Alberto (2009). Luchas cívicas, trayectorias geopolíticas en Colombia: Movimiento Cívico del Oriente Antioqueño, Movimiento Popular Los Inconformes y Comité de Integración del Macizo Colombia no CIMA. Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Departamento de Ciencia Política, Bogotá.

Olaya, Carlos. (2012). Nunca más contra nadie: Ciclos de violencia en la historia de San Carlos. Cuervo Editores. Medellín. Pp. 397.

Olaya, Carlos (2016). El exterminio del Movimiento Cívico del Oriente de Antioquia. AGO.USB Medellín - Colombia Vol. 17 No. 1 Págs. 128-144. Enero – junio 2017. Pp.323. Recuperado de:  
**<http://www.scielo.org.co/pdf/agor/v17n1/v17n1a07.pdf>**

Periferia (2012). El Oriente Antioqueño y su problemática energética. Periferia Prensa Alternativa. Recuperado de:  
**<https://periferiaprensa.com/index.php/component/k2/item/957-el-oriente-antioqueno-y-su-problema-energetica>**

Producciones EL RETORNO (2007). Foro Energético del Oriente Antioqueño -Santuario - 24-09-07. Recuperado de:  
**<https://www.youtube.com/watch?v=NCD8wxtQZX8>**

Proyecto de Ley 088 de 2010 por medio del cual se modifica el artículo 45 de la Ley 99 de 1993 y el párrafo 2° del artículo 54 de la Ley 143 de 1994.

Restrepo García, Fabián Emilio (2015). El proyecto minero-energético en la región del Oriente Antioqueño y sus impactos sobre el territorio. Medellín: Corporación Jurídica Libertad.

JRuíz, Carlos (1984). Un pueblo en lucha: El Oriente Antioqueño. Pp. 68

Sáenz, Orlando (1986). Desarrollo regional y movimientos cívicos en el Oriente Antioqueño. 1860 – 1982. En CINEP (Ed.). Los Movimientos Cívicos (Págs. 41-52). Editorial CINEP. Bogotá. Pp. 119

Torres Carrillo, Alfonso (1997). Movimientos sociales y organización popular. Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de Unisur. Bogotá. Pp. 190

Zapata, Rubén Darío (2014); Crónicas del Destierro, Oriente Antioqueño: el color púrpura del progreso. Fondo Editorial Periferia. Medellín. Pp. 137



*Esteban Valencia -  
Corregimiento de Santa Ana en el municipio de Granada.  
Quien abre camino entre el matorral es un campesino llamado Guillermo,  
de los pocos que permaneció en el corregimiento después del despla-  
zamiento masivo por la violencia.*

## La lucha por la defensa de lo común: aproximación a los conflictos socioambientales desde movimiento por la vida y la defensa del territorio - Movete

María Alejandra Villada Ríos<sup>15</sup>  
Andrés Felipe Jiménez Gómez<sup>16</sup>

*“En esta época de la ermitaña historia que olvidaron muchos y de la memoria lejana de otros cuantos, en donde el pasado no esta enfrente de ellos y no saben ya a que huelen los guayabos y como suena el agua que desciende. En estos días de extinción de las labranzas, de los segadores y labriegos. Es preciso alzar la lengua, entonar los toles, desaforarnos en el canto para reencontrar las primigenias esencias y resistir ante el embate de las ruinas del progreso que nos pintan, que nos ofrecen como espejos.*

*Porque progreso no es tener los edificios resplandecientes, ni los parques como oro, tampoco es tener el cemento en los sueños, ni mucho menos en el alma. Es simple, progreso es aquello donde habitan las mercancías, el dinero como único dios, la economía monetaria, el individualismo por ende la indiferencia y la envidia, la avaricia, la miseria, el hambre y la sed, no solo de la justicia, sino también la sed del liquido incoloro tan simple de nombrar pero tan complejo de reconocer para muchos como sagrado “AGUA”.*

15 Trabajadora Social de la Universidad de Antioquia, Maestra en Gestión Sustentable del Agua del Colegio de San Luis –México-, participante de la Red de Acción Frente al Extractivismo –RAFE- y del Movimiento Social por la Vida y la Defensa del Territorio – Movete. Correo: aleja.rios88@gmail.com

16 Antropólogo de la Universidad de Antioquia, Maestro en Gestión Sustentable del Agua del Colegio de San Luis –México-, participante de la Red de Acción Frente al Extractivismo –RAFE- y del Movimiento Social por la Vida y la Defensa del Territorio – Movete. Correo: andresjimenezg@hotmail.com

*Por eso es necesario ir mas alla de lo que muchos llaman el progreso y ver que es solo una extensión más del horroroso capitalismo y de la infecunda industria que luego de haber agotado los recursos de muchos otros territorios, hoy se quiere asentar en nuestras mentes y en nuestros campos, sin ni siquiera hacer la pregunta a los nativos que han protegido las huertas, los nacimientos, los riachuelos por millones de años.*

*¡Alza tu voz pueblo! Cuando lo creas necesario, que no se olvide que amamos el sol porque anda libre al igual que las aguas, que no se olvide que somos ante todo y originariamente pueblo campesino y rural y que por naturaleza no pertenecen las aguas a nosotros, sino nosotros a ellas; y esa ruralidad, esa forma líquida que nos rodea, esa posibilidad que tenemos todavía de alimentarnos de la tierra y mantenerla viva, esa capacidad de estar en el campo que muchos rechazan, quizás por olvido, quizá por ignorancia, quizá por ver el mundo a través de los televisores y entenderlo solamente a través de las computadoras”.*

**Alejandro Trujillo**  
**(El Carmen de Viboral)**

## Introducción

La forma de comprender los conflictos socioambientales en un territorio depende mucho del lugar de observación, posicionamiento y lucha desde la que nos encontremos. Desde Movete hemos construido un proceso organizativo frente a los diferentes conflictos socioecológicos que han emergido debido a la implantación de un modelo extractivo sobre nuestros territorios. Como sabemos, cada uno de estos conflictos es un “mundo”, con sus historias, actores e intereses, por lo que sabemos que nuestras luchas son diversas, y las estrategias dependen del contexto y de los caminos que el propio proceso organizativo va mostrando, y de la respuesta de los demás actores (institucionalidad estatal local, ambiental y regional, las empresas, etc.)



**Imagen 1: Recorrido ruta del cacao. X festival del agua.  
Municipio de San Francisco 2018.**

Los conflictos socioambientales están ligados a miradas, lenguajes, formas de conocer y ser que se han producido a partir de un relacionamiento histórico con determinados territorios. Las apuestas hegemónicas, sus proyectos territoriales, sus sueños crematísticos, siempre han estado en disputa con las formas de apropiación, organización y proyección que las comunidades campesinas y urbano populares han construido sobre estos mismos territorios. Las epistemologías comunitarias (Villada 2017), las políticas comunitarias de re-existencia (Dávila 2017; Tobón 2013; Jiménez Gómez 2017), y la recreación de sus medios y modos de vida en la cotidianidad, se configuran como estrategias propias para la transformación de estos conflictos socioambientales.

De ahí que pensar sobre los conflictos socioambientales nos lleve a pensarnos también las autonomías. Es decir, nuestras propuestas para el ordenamiento territorial, para el fortalecimiento de las economías campesinas, por el respeto a los procesos comunitarios, para la conservación con comunidades campesinas, por el respeto a los ríos, montañas y páramos, por la autogestión comunitaria del agua, entre otras, están articuladas a nuestros medios y modos de vida. Estas formas nuestras de ser y estar se enfrentan con las políticas y leyes de despojo que vienen desde arriba, que quieren un campo sin campesinos, que ven la naturaleza como una fuente de riquezas privadas, como un negocio que responde a intereses foráneos metropolitanos y capitalistas.

Este capítulo está compuesto de varios momentos. Primero realizamos una presentación del territorio, su ubicación y los principales elementos que creemos han influido en la configuración de los conflictos socioambientales presentes. Además, también hacemos un rastreo sobre la arquitectura jurídica que ha facilitado

y potenciado la nueva-vieja implantación del modelo extractivo. Luego, en un segundo momento, entramos a definir qué entendemos por conflictos socioambientales, cuáles han sido sus efectos o afectaciones sobre las comunidades y como se han venido gestando en el Oriente antioqueño. En el tercer momento, hacemos una síntesis sobre el antagonismo entre las formas de vida y racionalidades campesinas y las de las élites regionales.

Las apuestas por la vida se encuentran en el centro de las disputas territoriales por la construcción de otras formas de relacionarnos, tejernos y construir formas de vida digna, autónoma, basada en el reconocimiento de las naturalezas que habitamos/somos como seres vivos. Desde el Movimiento por la Vida y la Defensa del Territorio seguimos caminando por la recuperación del tejido y la organización comunitaria-popular-campesina para la reapropiación colectiva de nuestros comunes.

### **Contextualización.**

El Oriente es una subregión del departamento de Antioquia y está conformada por 23 municipios que ocupan un territorio de 7.021km (Área de Paz, Desarrollo y Reconciliación –PNUD-, 2010). Los 23 municipios están distribuidos a su vez en cuatro subregiones:

- **Altiplano:** abarca los municipios de Rionegro, La Ceja, El Carmen de Viboral, Marinilla, Guarne, Santuario, San Vicente, La Unión y El Retiro.
- **Aguas:** con los municipios de Alejandría, Concepción, Granada, Guatapé, Peñol, San Carlos y San Rafael.
- **Páramo:** la conforman Abejorral, Sonsón, Nariño

y Argelia.

- **Bosques:** comprende los municipios de Cocorná, San Francisco y San Luis.

La región del Oriente es considerada una zona geoestratégica por estar ubicada en la cordillera central y estar bañada por dos cuencas importantes para el país como son las cuencas de los ríos Magdalena y Cauca. Los ríos tributarios de estas dos cuencas y que conforman la red hídrica del Oriente son: Nare, Río Negro, Buey, Arma, Calderas, Río Claro, Samaná Norte y Samaná Sur. Estas particularidades hídricas y geográficas potencian la producción campesina relacionada con la producción, comercialización, autoconsumo y consumo local de café, panela, papa, frijón, maíz, frutas y ganado de leche. En este sentido las características agro biodiversas de la región están siendo amenazadas por la imposición de proyectos ligados a los agrotóxicos, la privatización de los bosques y cuencas hídricas, la expansión de la minería para materiales de la construcción, calizas y metales preciosos, la construcción de hidroeléctricas, la urbanización acelerada y los monocultivos forestales.

La llegada de megaproyectos extractivos y de privatización al Oriente en las últimas décadas ha estado ligada a la configuración de violencias profundas y de dinámicas socio territoriales cambiantes y agresivas con las comunidades locales (Echeverri & Jiménez Gómez, 2016, p. 5; Dávila, 2017; Arias, 2017). La instalación de un modelo de desarrollo basado en la extracción y privatización de los elementos comunes como el agua (Tobón, 2013), los bosques, los minerales, las semillas, la biodiversidad y las relaciones comunales impactan de manera negativa los medios y modos de vida de las y los campesinos que hemos habitado ancestralmente

estos territorios (Agudelo 2017; Olaya 2015; Restrepo 2015).

Este modelo de desarrollo se fundamenta en la estructuración de arquitecturas legales que amparan y justifican la degradación de los territorios y el despojo de las comunidades locales. En Colombia, el entramado normativo está caracterizado por normas dispersas, poco actualizadas y con grandes vacíos, y por una falta de autoridades especializadas nacionales o territoriales. Para el caso del modelo que se implementa en el Oriente y que se extiende en todo territorio colombiano, la configuración de normas y reglas se fundamenta en la gobernanza neoliberal<sup>17</sup> entendida como una matriz socio-jurídica hegemónica de regulaciones e interacciones entre gobernados y gobernantes, que “legítima” la dominación estatal sobre los sujetos políticos, direccionándola hacia el beneficio de intereses empresariales del sector privado. Estos intereses empresariales están relacionados con mercantilización y privatización del agua, la vida y nuestros territorios. En palabras de Jiménez Gómez (2017)

El auge de proyectos de desarrollo extractivos está ligado a la financiarización de la naturaleza: la valoración de los ecosistemas, su funcionamiento y componentes, como servicios ambientales comercializables en bolsas de valores. El ingreso del agua, la biodiversidad, los minerales, las semillas, los territorios, las selvas y los páramos,

17 Jiménez Gómez (2015, p. 20-28) aborda varias de las características que configuran la gobernanza neoliberal como la transformación de las relaciones entre gobernados y gobernantes a partir de ciertos procesos, regulaciones e interacciones sociopolíticas que conjugan los ajustes estructurales neoliberales y la consolidación de regímenes democráticos. Esta “transformación” busca la asimilación de ciertas prácticas que han sido exitosas en los países del “norte” para la configuración de un “buen gobierno”, como son: la transparencia administrativa, la descentralización, la ampliación de los mecanismos de participación y control ciudadanos y el reconocimiento de grupos diferenciales de derecho. Todas estas “recomendaciones” combinadas con el gobierno de mercado. En este sentido, entendemos acertada la definición de Santos (2007) de la gobernanza como la matriz política de la globalización neoliberal.

entre otros, como activos financieros o commodities regidos por el mercado bajo la oferta y la demanda, crea fuertes tensiones para las comunidades locales que de manera ancestral o tradicional han criado diversos entramados sacionaturales de vida. (p. 47).

Y es en este punto (en las formas de concebir, aprehender y soñar la vida) donde se presentan las disputas territoriales entre los actores hegemónicos globales y las comunidades y organizaciones campesinas, populares, juveniles, de mujeres, de acueductos comunitarios, entre otros. Es decir, mientras las “políticas estado-céntricas impulsan la competitividad, la eficiencia, la eficacia y el lucro; las políticas comunitarias, se centran en el cuidado, mantenimiento e impulso de prácticas de economía solidaria, cooperación y apoyo entre las diferentes familias y vecinos que conforman la comunidad” (Villada, 2017, p. 5). En este contexto las aguas, las montañas, los minerales y las semillas adquieren una importancia creciente y se constituyen en campos de disputa, aumentando progresivamente los conflictos socioambientales (Navarro, 2015; Toro, Fierro, Coronado y Roa, 2012).

En este sentido, el modelo extractivo de la gobernanza neoliberal ha permeado las políticas hídricas, ambientales y territoriales en Colombia, favoreciendo la incursión de proyectos extractivos y de privatización que vienen amenazando las vidas humanas y no humanas que habitamos el Oriente antioqueño. Si bien no vamos a profundizar en cada uno de los regímenes normativos que amparan la instalación del modelo de gobernanza neoliberal en estos territorios, sí vamos a nombrar algunas normas y leyes que fundamentan el tema de conservación, hidroeléctrico, de gestión del agua y minero.

## **Despojo legal del modelo extractivo y de privatización**

Desde el Movimiento, si bien hemos analizado la normatividad relacionada con la imposición del modelo hegemónico y hemos encontrado vacíos y desconocimientos con relación a las características de nuestro territorio, consideramos necesario evidenciar esta guerra legal contra los pueblos, de manera tal que nos permita entender las intencionalidades de los diversos grupos de poder (Gobierno, multinacionales y empresas locales). Estas intencionalidades en resumen dominan y fragmentan el territorio para “integrarlo” según sus intereses. Debemos comprender que el extractivismo llega a nuestros territorios no solo como un proyecto, sino como un encadenamiento de varios proyectos de extracción, impulsados por una reestructuración legal ligada al consenso de las commodities (Svampa, 2012).

Por ejemplo, en el Páramo de Sonsón están llegando proyectos agroindustriales, de conservación, hidroenergéticos y mineros. Se implementan políticas de delimitación y declaración de áreas protegidas para la conservación del agua y así producir grandes cantidades del líquido vital que sirvan de “insumo” para 1) la generación de energía eléctrica a través de construcción de pequeñas y medianas centrales hidroeléctricas; 2) el abastecimiento de los grandes centros urbanos y 3) la posible llegada de la minería metalífera. A su vez, esa abundancia de agua y de generación de energía son piezas fundamentales para la extracción de minerales y materiales para la construcción de las urbes y para la exportación energética.

### *Políticas de Conservación*

Las políticas de conservación que se vienen implementando en el Oriente antioqueño comenzaron con la Ley

2a de 1959 en la cual se fijan los límites sobre “ecosistemas estratégicos” incluyendo varios territorios bajo la jurisdicción de la Reserva Forestal Central, a través de la cual se pretendía proteger las cuencas hidrográficas. Además de este determinante ambiental, es importante nombrar que las políticas de conservación se han estructurado bajo la figura de áreas protegidas.

El tema de áreas protegidas en Colombia se encuentra reglamentado por el Decreto 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993. No obstante, la aplicación de esta estrategia en Colombia comenzó en 1938 con las primeras reservas forestales protectoras nacionales, atadas a la necesidad de conservar el “recurso hídrico” requerido para la industria cañera en el Valle del Cauca. Específicamente en el suroriente antioqueño, la intervención que significó la Ley 2a en estos territorios se materializó con la elaboración desde finales de los años 80 del “Plan de Manejo de Sonsón, Argelia y Nariño” (Cornare, 1994) y la declaración del Área de Manejo Especial del Páramo de Sonsón tras el acuerdo 038 de 1995. El área objeto de este Plan de Manejo es de una extensión aproximada de 120 km<sup>2</sup>. A través de este Plan se desplegaron dispositivos de control, vigilancia, prohibición y sanción sobre los territorios campesinos de en Sonsón, Argelia y Nariño.

Es importante nombrar además el Decreto 2372 de 2010 a través del cual se reglamenta el Decreto 2811 de 1974, la Ley 99 de 1993, la Ley 165 de 1994 y el Decreto 213 de 2003, en relación con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, y las categorías de manejo que lo conforman. Así mismo, la Resolución 1125 de 2015 por la cual se adopta la ruta para la declaratoria de las áreas protegidas. La ruta declaratoria está compuesta por tres fases: la fase I de preparación, en la cual a partir de la identificación de las prioridades de

conservación se da a conocer la iniciativa a los actores estratégicos; la fase II de aprestamiento, en la que se recopila toda la información, se delimita y se categoriza el área; y la fase III de declaratoria, que culmina el proceso mediante la elaboración del documento síntesis y declaratoria.

Bajo estos enfoques de la conservación en el Oriente se ha ido construyendo un Sistema Regional de Áreas Protegidas (SIRAP) especialmente ubicadas en la zona páramos y en la zona de aguas para la protección de los bosques que surten a los embalses de proyectos hidroenergéticos. Este sistema está compuesto por diez Distritos de Manejo Integrado, ocho Reservas Forestales Protectoras Regionales, una Reserva Forestal Nacional, 16 Reservas Naturales de la Sociedad Civil, el Complejo de Páramos de Sonsón y la Reserva Forestal Central (Ley 2a). Si le agregamos varias áreas que están en la actualidad en la ruta declaratoria (Páramo y Bosque Alto Andino y el corredor Cárstico) el 25% de la jurisdicción de Cornare estaría bajo figuras de conservación. De ahí que resulte fundamental la entrada de proyectos de crecimiento verde, en los que la mercantilización de la naturaleza se maquilla con programas de pago por servicios ambientales como Banco2 con sus diferentes modalidades.

#### *El tema hidroeléctrico*

La hidroelectricidad ha sido una de las formas de despojo que más ha afectado el territorio del Oriente antioqueño, ya que empezó a ser un nodo estratégico a nivel energético a escala nacional. Si bien han cambiado de estrategias (ya las centrales hidroeléctricas que se tienen proyectadas no implican áreas de inundación tan grandes como en los años 70 y 80, y más que proyectos grandes se proyecta la instalación de múltiples

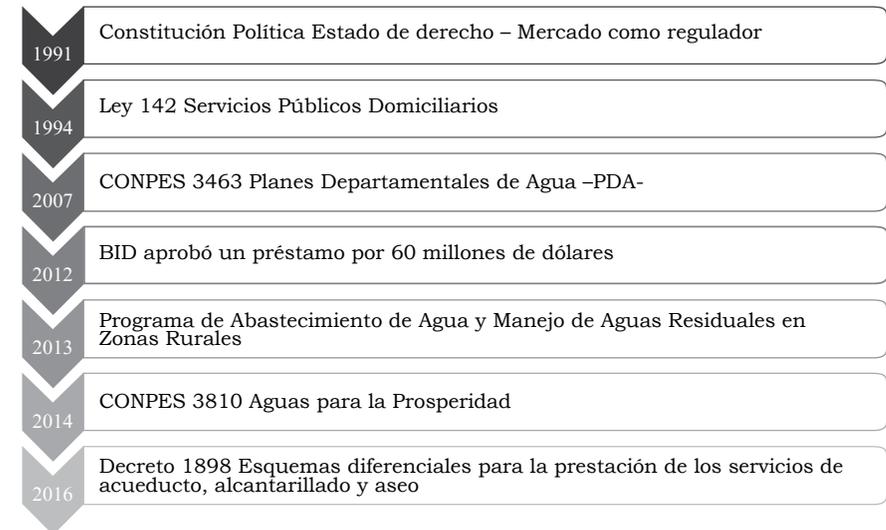
pequeñas centrales), este negocio se sigue dividiendo en varias etapas: generación, transmisión, distribución y comercialización. Cada una de estas puede generar distintos conflictos, por ejemplo la sustracción definitiva de un área de la Reserva Forestal Central para diferentes proyectos hidráulicos, el trazado de carreteras por pendientes no aptas para las mismas, la profundización de las aguas o la privatización territorial por la instalación de la casa de máquinas de pequeñas centrales hidroeléctricas, etc.

El capitalismo utiliza de forma voraz e insustentable la energía, por lo cual su generación ha ido en aumento constante en los últimos años. En 2014 la energía hidráulica (aquella que se obtiene por el movimiento, caída y corriente de las aguas) representó el 64% de la energía total del Sistema Interconectado Nacional, aumentando su participación en la matriz energética en casi un 11%. En 2015 este porcentaje llegó a más de 70%, lo que quiere decir que de diez bombillos que se prenden en el país, siete son alumbrados por nuestros ríos. La mayor parte de la energía nacional es generada por los ríos de Colombia y ese porcentaje parece que será cada vez mayor.

Sin embargo, menos del 5% de esta energía está destinada a abastecer de gas, energía y electricidad a los centros poblados; casi la mitad (45,5%) termina siendo usada por las industrias y 21% es empleada en la explotación de minas y canteras, lo que significa que las minas y canteras gastan cuatro veces más energía de lo que nosotros hacemos en nuestras casas y es energía que en gran porcentaje requiere de la privatización de nuestros ríos y territorios para su generación, y que además genera otras injusticias en sus etapas de transmisión, distribución y comercialización<sup>18</sup>.

18 Este apartado se basó en (Echeverri & Jiménez Gómez 2016).

## Gestión del agua



**Figura 1: Elaboración propia con base en Villada (2017), “Hacia una Política de lo Común. Experiencia de Gestión Comunitaria del Agua en el municipio de Támesis – Antioquia – Colombia”**

Con base en la ilustración anterior, podemos decir, que con la Constitución de 1991 la configuración de la prestación del servicio de agua dio un giro permitiendo tres formas de prestar el servicio: el estado de forma directa e indirecta, las comunidades organizadas y los particulares; teniendo mayor respaldo institucional el estado y los particulares. A su vez la Constitución junto con la Ley 142 de 1994 de Servicios Públicos Domiciliarios, asocian el medio ambiente y el agua a asuntos netamente económicos, relacionados con el tema de la eficiencia y la eficacia. De esta manera, se impone a los servicios públicos, una lógica de negocio privado, causando como mayor impacto las alzas en la tarifas, amenazas de privatización de la distribución e inequidad en el acceso al líquido vital.

La instauración de políticas privatizadoras en el sector del agua ha venido aumentando en los últimos años, con el argumento de mejorar la calidad de vida de la población e implementar manejos financieros que garanticen una mejor prestación del servicio. En el año 2006, el Gobierno nacional adoptó como política sectorial la implementación de los Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento (PDA). Esta política estaba orientada a la creación de empresas regionales de carácter mixto, con el propósito de fortalecer el manejo empresarial de los servicios y articular los recursos de inversión provenientes de la Nación, departamentos, distritos, municipios y Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), los cuales se han concentrado en la atención de la población urbana brindando apoyo para la ejecución de inversiones y pago de subsidios (Villada, 2017).

Acorde a los Planes Departamentales de Agua -PDA y su despliegue normativo, el Gobierno de Santos (2010-2014) implementó acciones para la provisión de agua potable y saneamiento básico en zonas rurales a través del Consejo de Política Económica y Social -CONPES-3810, por el cual se crea la política de agua para la ruralidad denominada Aguas para la prosperidad. Esta política planteó promover el acceso al agua potable y saneamiento básico en las zonas rurales, a través de soluciones acordes con las características de dichas áreas que contribuyan al mejoramiento de las condiciones de vida de la población. Sin embargo, esta política “recae en los mismos esquemas de financiación [de los PDA] privilegiando a los operadores especializados para su ejecución [...] desconociendo el sujeto campesino y los acueductos comunitarios al no mencionarlos ni tenerlos en cuenta en la planeación” (Martínez, 2016, p. 31).

Aunado a lo anterior, en el 2016 se expidió el Decreto 1898 que se articula a préstamos y directrices que viene dando el Banco Interamericano de Desarrollo BID desde el 2012, afirmando que el fortalecimiento de la gestión comunitaria del agua requiere conocimiento técnico y especializado para el manejo del líquido vital y se liga a los valores y principios como la eficiencia, la eficacia, la rentabilidad y la calidad. Estándares sobre los cuales se desconoce la gestión que por ejemplo realizan acueductos comunitarios.

Esta normativa en el Oriente antioqueño está operando con la creación de empresas regionales como Aguas de Oriente y Empresas Públicas del Oriente, donde el accionista mayoritario es el Grupo EPM. Este grupo empresarial compró en el año 2018 a la empresa municipal de Rionegro EPRio porque el municipio necesitaba obras complementarias, debido a su crecimiento urbanístico, por medio billón de pesos, cuando su presupuesto anual es de 365 mil millones de pesos. Este modelo regional de prestación de servicios públicos de agua, alcantarillado y aseo amenaza la gestión del agua en manos de los entes territoriales y a su vez la gestión comunitaria del agua.

Es el caso que vivió el acueducto comunitario del barrio San Antonio de Pereira en Rionegro, que en 2013 fue multado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios por no reportar información contable y financiera a una plataforma virtual con la que cuenta la institución. La multa ascendió a \$20.000.000, lo que debilitó la gestión comunitaria, y ocasionó una pérdida paulatina de la autonomía, reflejada específicamente en la definición de la tarifa del acueducto comunitario, pues ya no se define por asamblea como se hacía históricamente, sino a través de una metodología tarifaria que determina a nivel nacional la Comisión de Regu-

lación de Agua Potable y Saneamiento Básico –CRA–, causando un alza en las tarifas de hasta un 90% (Villa-da & Arias, 2017, 41).

### Políticas Mineras

La implementación de un proceso de recolonización extractiva está ligada a la reestructuración de las legislaciones nacionales. Esto ha aumentado el interés de las multinacionales para la explotación de minerales como el oro y el carbón, lo que pone en riesgo los modos de producción y vida de las comunidades locales. Gestar el modelo económico minero energético en el país ha implicado reformar las normas sectoriales para darle apertura a la inversión extranjera y al aprovechamiento de los bienes comunes.

La Ley 685 de 2001 modificó radicalmente el modelo de desarrollo minero que rigió en Colombia durante más de dos siglos. Su aprobación coincidió con la reforma estructural de la economía y su articulación al mercado internacional<sup>19</sup>. Según Pardo (2013) los aspectos más importantes del código de minas se resumen así:

- Reduce el papel del estado a la regulación, promoción y fiscalización del sector.
- Formaliza el principio: “Primero en el tiempo, Primero en el Derecho” para acceder a los títulos mineros y ratifica al sector como de utilidad pública e interés social en todas sus ramas y fases.
- Libera las áreas que el Estado había reservado para el desarrollo minero con control estatal, re-

19 Con el consenso de Washington se empiezan a implementar en América Latina políticas neoliberales que ofrecen un marco propicio para las inversiones extranjeras y en especial en el sector minero por el auge en el alza de los precios minerales.

conoce la autonomía empresarial en la actividad y cede el papel protagónico al sector privado.

- Elimina los rangos de la minería y establece procedimientos genéricos para pequeños, medianos y gran minería, y flexibiliza el procedimiento para acceder al título minero.
- Unifica la forma de contratar con el estado a través de las concesiones y elimina la pluralidad contractual anterior, entre ellos, los aportes mineros. Las empresas que habían suscrito contratos de aporte con entidades públicas antes de la expedición de la ley, pasaron a ser los titulares sin variación en sus condiciones legales y económicas.
- El periodo de los contratos de concesión se unificó en 30 años, se ampliaron las condiciones para la prórroga de los contratos y se unificaron, bajo el contrato de concesión, todas las fases del ciclo minero, desde la exploración hasta el cierre y abandono.
- Se reconocen los derechos de las minorías, la obligación de pagar regalías de acuerdo con la Ley 141 de 1994, y establecieron áreas que tienen tratamiento especial frente a la minería, como las zonas de reserva especial, las zonas de seguridad nacional, las zonas excluibles de la minería (zonas de protección y desarrollo de los RNNR), las zonas de minería restringida (zonas de interés arqueológico, históricos y culturales, zonas de bajamar y trayectos fluviales, zonas de minería indígena, comunidades negras y mixtas) (Pardo, 2013, p.185).

Esta reforma generó tensiones al interior del ordenamiento político y jurídico del país, es decir, ¿puede el ordenamiento minero superponerse sobre el ordena-

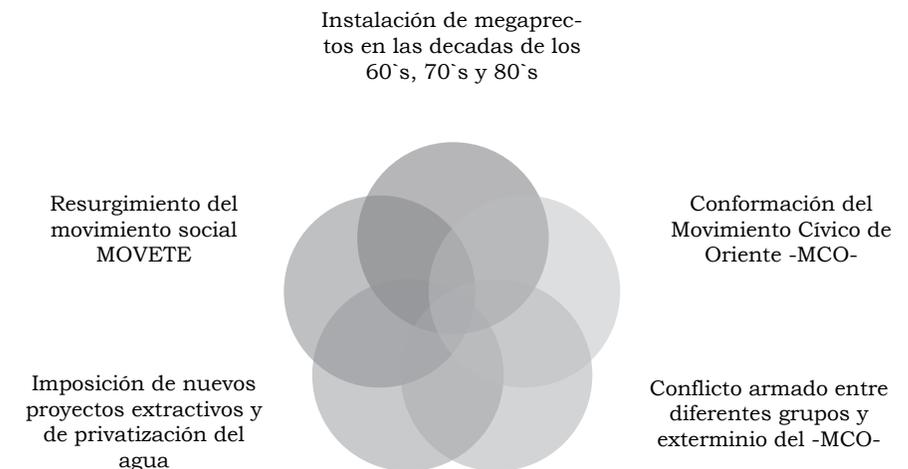
miento territorial, que es competencia de los municipios, sus concejos y los departamentos según la Ley 1454 de 2011, la Ley 388 de 1998 y el Artículo 313 de la Constitución Política de 1991?

Sobre la base de este cuestionamiento y con el derrotero normativo que acabamos de abordar, consideramos como Movete que el campo socio-jurídico es un campo de disputa: entre los intereses del Estado y las instituciones financieras internacionales que conciben los comunes como bienes económicos y como mercancías que se pueden vender, y nosotras como Movimiento y comunidades campesinas que defendemos estos comunes, pues nos permiten seguir reproduciendo la vida en nuestros territorios. Desde el Movete podemos concluir que la disputa ha transitado por una serie de negociaciones con los gobiernos locales y otras instituciones, caracterizadas por la rigidez e inflexibilidad para incluir las demandas y propuestas realizadas desde el Movimiento.

En este sentido, las resistencias y la construcción de alternativas que tejemos como Movimiento frente a la imposición de proyectos de conservación, hidroeléctricos, de empresas regionales de servicios públicos y de minería, han generado una serie de disputas y conflictos socioambientales por la defensa de nuestro territorio. En el próximo aparte queremos evidenciar cómo desde el Movete comprendemos, analizamos y generamos acciones frente estos conflictos socioambientales.

## ¿Qué entendemos por conflictos socioambientales?

La agro - biodiversidad<sup>20</sup> sobre la cual se ha configurado históricamente la subregión del Oriente Antioqueño, es parte fundamental de la conformación de las dinámicas socioterritoriales así como de los conflictos socioambientales que se tejen en la región. Como MOVE-TE consideramos que los conflictos socioambientales que se vienen generando se dan a partir de la estructuración e interrelación de 5 momentos importantes:



**Figura 2: Configuración los conflictos socioambientales en el Oriente antioqueño**  
Fuente: elaboración propia

20 Hacemos referencia a las características de producción campesina y de diversidad de flora y fauna que configuran el Oriente antioqueño. Este territorio hace parte de dos cuencas hidrográficas, la del río Magdalena y la del río Cauca, que atraviesa la cordillera central. En sus dos vertientes viven comunidades que sustentan su vida a través de la cultura y la economía campesina y a través de su relación con las montañas, los ríos y los animales que allí habitan.

Estos momentos han sido abordados en diferentes producciones académicas (Agudelo, 2017; Dávila, 2017; Jiménez Gómez, 2017; Olaya, 2016; Restrepo, 2015; Quintero, 2007,) y desde el Movimiento los identificamos así:

1) ) La instalación de megaproyectos en las décadas de los 60, 70 y 80 por parte del Estado con el auspicio del Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo BID.

2) La configuración del Movimiento Cívico de Oriente en las décadas de los 80 y 90 a causa de la inconformidad ciudadana por la implementación de un modelo de desarrollo que no beneficiaba a los habitantes del Oriente (especialmente ligado al rechazo a las consecuencias de las grandes hidroeléctricas) y por las altas tarifas en los servicios públicos domiciliarios.

3) El establecimiento del conflicto armado entre diferentes grupos guerrilleros, paramilitares y militares que generó la criminalización de la protesta social y la profundización del modelo de despojo.

La implementación e imposición de nuevos proyectos extractivos y de privatización del agua, ligada a las políticas minero energéticas y de conservación en torno al crecimiento verde, que quiere responsabilizarnos como campesinos y habitantes ancestrales de estos territorios de una degradación y destrucción de la que, a lo sumo, somos los principales afectados.

5) Finalmente, el resurgimiento de la protesta social y la movilización materializado en el Movimiento Social por la Vida y la Defensa del Territorio –Movete–.

Estos momentos y dinámicas extractivas, de privatización de los comunes (agua, bosque, alimentos, prácticas campesinas), de proyectos de conservación que se fundamentan en la economía verde, son puestos en tensión por las resistencias que tejemos como Movimiento en diferentes territorios desplegando estrategias de investigación, organización y movilización. A partir de estas estrategias denunciamos el desconocimiento que tiene el modelo hegemónico de nuestros medios y modos de vida campesinos, con lo que revictimiza nuestras formas de apropiación territorial y genera más desplazamientos, pues históricamente hemos sido comunidades afectadas y desplazadas por el conflicto armado y hoy por hoy por el modelo extractivo.

En este sentido, como movimiento que defiende el agua, la vida y los territorios del Oriente antioqueño, nos parece fundamental reflexionar y construir referentes teóricos y prácticos que nos permitan comprender ¿qué es eso de conflictos socioambientales?, ¿cómo se han venido gestando en el territorio del Oriente antioqueño?, y ¿cuáles han sido sus efectos o afectaciones sobre las comunidades que habitamos estos territorios?

### ***¿Qué es eso de conflictos socioambientales?***

Es importante resaltar que los conflictos que configuran los procesos comunitarios de defensa del agua y la vida en el Oriente antioqueño, se enmarcan un contexto histórico de largo aliento. Como plantea Restrepo (2015, p. 59) “A lo largo de los últimos dos siglos, el Oriente antioqueño ha escrito su historia en torno a los conflictos que opusieron a diversos actores económicos y políticos para el control sobre la región”. Estos conflictos socioambientales y armados, enmarcados bajo la configuración de un modelo de gobernanza neoliberal, han desplegado una serie de disputas entre dife-



**Imagen 2: Dinámica Tejiendo redes. VIII Festival del Agua. Municipio de San Luis 2016**

rentes actores que se caracterizan por tener relaciones asimétricas y diferentes concepciones del territorio de acuerdo a su forma de apropiación/dominación.

Desde el Movimiento, a través del diálogo y encuentro con procesos y organizaciones comunitarias de los territorios y con aportes de autores que reflexionan frente a este tema, consideramos que los conflictos se generan por el despliegue de un proceso de cercamiento de la vida para la acumulación de capital que está afectando a las comunidades que habitamos estos territorios. Así mismo, consideramos que:

El conflicto socioambiental implica una conciencia de los sujetos afectados por la problemática ambiental que en el Oriente ha sido configurada

a partir de un ordenamiento territorial planteado por actores externos y de élite. Es un ordenamiento que se nos quiere imponer. Pero el conflicto emerge cuando las comunidades afectadas tienen plena conciencia de ese actor externo que llega y en ese sentido las comunidades se empiezan a formar políticamente y a generar acciones que hacen que el conflicto emerja. Ese conflicto también se caracteriza por la acumulación por desposesión hídrica y que conlleva es a una privatización de la vida. (Taller sistematización Movete, 2018).

Como lo expresamos, el conflicto socioambiental implica la conciencia; una conciencia organizada desde nuestras veredas, corregimientos, barrios, municipios, zonas y región. En este sentido también nos parece importante reflexionar frente al extractivismo pensado como una técnica de producción de un espacio-temporalidad capitalista funcionalizada a su lógica insaciable de acumulación. Como Movimiento, a través de una serie de espacios de formación en los territorios, hemos logrado abstraer nueve rasgos fundamentales que caracterizan al extractivismo como técnica de intervención socio-natural:

1. Alta dependencia de elementos comunes naturales para sus negocios (agua, tierra, bosques, etc.)
2. Utilización y extracción de grandes volúmenes de estos elementos comunes naturales.
3. Privatización de los territorios y sus elementos. Esta privatización se da en dos sentidos: por contaminación y por apropiación (Martínez, 2016).
4. Financiarización de los elementos comunes naturales (conversión en commodities- mercancías de

los elementos de la naturaleza como el agua y el aire (carbono), y su posicionamiento en las bolsas de valores).

5. Externalización negativa en las comunidades locales de los costos socioambientales que generan los proyectos (“Las comunidades se llevan la peor parte o consecuencias negativas del proyecto”).
6. El papel del Estado está centrado en la ayuda, funcionalización y financiación de los objetivos de los proyectos de desarrollo extractivo (p.e. mecanismos de desarrollo limpio, infraestructura vial, batallones mineros energéticos), cuando no es el mismo Estado el que genera el despojo.
7. Violencia y violación de los derechos humanos y de los pueblos como elemento constitutivo del modelo extractivo; criminalización constante de las voces disidentes y de los procesos organizativos de defensa territorial (Gudynas, 2013; Svampa, 2012).
8. R8. Relación patriarcal con el cuerpo de la mujer y su territorio. El extractivismo se basa en una relación violenta sobre los procesos de sostenibilidad de la vida, donde las mujeres son las protagonistas. Por eso sus efectos son más fuertes en el cuerpo y los territorios de las mujeres.
9. Lucha (asimétrica) de imaginarios: más que responder a estudios “científicos” son finalmente los imaginarios colectivos los que abren o cierran la puerta a los debates. Estos forman un sustrato más profundo que los programas de los políticos, los argumentos técnicos de los expertos o las agendas de las ONG. Es decir, el extractivismo se

apropia e instrumentaliza los imaginarios existentes en la sociedad para dividir a las comunidades e imponer sus intereses (Rodríguez- Carmona, Castro, Sánchez, 2013). Discursos como el del desarrollo, el progreso y el trabajo son usualmente utilizados para fragmentar los procesos de defensa territorial y ganar adeptos en las comunidades.

Estos elementos se articulan a proyectos extractivos como los monocultivos agroindustriales, la minería a gran escala, las hidroeléctricas, proyectos de conservación y de privatización del agua, entre otros. El extractivismo se configura no solo como un proyecto aislado, sino como un encadenamiento extractivo en que varios proyectos se conectan, se ayudan y se consolidan como parte de una política de despojo integral y estructural. En el contexto regional el encadenamiento de proyectos extractivos se liga a los proyectos de conservación para el cuidado de los páramos, donde nacen las principales fuentes de agua, y poder garantizar un volumen importante del líquido vital para la generación de energía que requieren las grandes empresas mineras y agroindustriales.

### ***¿Cómo se han venido gestando los conflictos socioambientales en el territorio del Oriente antioqueño?***

Como vimos en el capítulo anterior, estos procesos de acumulación por desposesión han estado articulados al conflicto armado que ha vivido la región y a la incorporación del modelo minero energético que en la actualidad se agudiza con los proyectos de conservación, de privatización del agua, agroindustria y un ordenamiento territorial hegemónico que favorece la expansión urbana.

Como podemos observar en el mapa, el Oriente antioqueño es una región que está siendo intervenida territorialmente desde múltiples proyectos extractivos y de privatización de los comunes, generando múltiples afectaciones sociales, políticas, económicas, ambientales y comunitarias, así como un despliegue creativo que desde las organizaciones sociales y comunitarias venimos desarrollando para luchar y defender nuestras formas de vida y nuestros procesos de apropiación territorial.

Es así como las comunidades que habitamos ancestralmente el Oriente de Antioquia, podemos caracterizarnos como comunidades agro-biodiversas que tradicionalmente hemos reproducido nuestras vidas a través de la relación intrínseca que tenemos con los comunes, entendiéndolos como el agua, los bosques, la tierra, los alimentos y las relaciones comunitarias que tejemos en torno a la gestión, uso, apropiación y cuidado de los mismos. Estos comunes son nuestros modos y medios de vida comunitarios. Estos modos y medios de vida han estado históricamente afectados por el conflicto armado, el extractivismo y el conservacionismo como formas de relacionamiento que se basan en lógicas coloniales, jerárquicas y patriarcales que buscan someter a las naturalezas para generar procesos de acumulación de capital que despoja y criminaliza las formas y medios de vida campesinos.

En palabras de Andrés Duque, integrante de Vigías del río Dormilón en San Luis, este modelo extractivo y de conservación busca “capitalizar el recurso hídrico que por generaciones ha sido parte de los ecosistemas culturales y ambientales de estos territorios, para llenar las arcas de grupos de personas que solo ven correr dinero por nuestros ríos y que en apariencia en nada padecen los efectos adversos de estas obras”.



Para ser más precisas, el extractivismo se potenció aproximadamente desde el 2007 “con un aumento de los títulos y de las solicitudes para explotación de minerales, oro, metales preciosos y materiales de construcción, y con un aumento de las solicitudes, estudios y construcciones de grandes, pequeñas y microcentrales hidroeléctricas” (Dávila, 2016, 64). En el tema de conservación, si bien desde los años 90 se tenía un plan de manejo para el Páramo de Sonsón, la delimitación de páramos entró en vigencia en marzo de 2016 con la resolución 493 del Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. Y en los últimos años, Cornare ha estado creando áreas de protección sin la consulta y participación de las comunidades campesinas en varias montañas del Oriente (por ejemplo, la Reserva Forestal Protectora Regional La Cuchilla del Tigre, el Cañón y la Osa y la Reserva Forestal Protectora Regional de los Cañones de los ríos Melcocho y Santo Domingo).

Tanto el extractivismo como el conservacionismo se amparan bajo políticas de Estado que desconocen y debilitan nuestras prácticas y saberes como comunidades campesinas que ancestralmente hemos habitado y defendido nuestra permanencia en el territorio.

Los actores, empresas y multinacionales involucrados en este tipo de políticas y proyectos son “para materiales de construcción, la multinacional cementos Argos de Colombia, la multinacional Cemex de México y la multinacional Holcim de Suiza, y para la minería de Oro y metales preciosos, la multinacional Anglo Gold Ashanti de Sudáfrica y la multinacional Northem Colombia de Canadá” (Dávila, 2016, 61).

En temas de generación de energía intervienen las Empresas Públicas de Medellín, la empresa ISAGEN, la empresa EMGEA (producto de una alianza público pri-

vada en la que participan la Gobernación de Antioquia, el Instituto para el Desarrollo de Antioquia –IDEA, la Cámara Colombiana de Infraestructura, la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos –SAI–, y la fundación promotora del empleo de Antioquia), la empresa CELSIA que hace parte de Argos, la empresa Helm Group Company HBI Banca de Inversión y Generamos energía S.A. (Ibíd., 63).

En temas de conservación para la implementación del primer Plan de Crecimiento Verde y desarrollo compatible con el clima, liderado por Cornare, se han articulado la Fundación Natura y WWF Colombia –Fondo Mundial para la Vida Silvestre–, con el apoyo de la Alianza Clima y Desarrollo, CDKN (Censat, 2016).

### ***¿Cuáles han sido sus efectos o afectaciones sobre las comunidades que habitan estos territorios?***

Durante varios escenarios de visibilización, movilización e incidencia como los festivales del agua, hemos logrado identificar, a través de estudios de casos por municipios o zonas, cuáles han sido las principales afectaciones sociales, ambientales, políticas, económicas y culturales sobre nuestros territorios a causa de la imposición del modelo extractivo y de privatización del agua.

En las **afectaciones ambientales**, cuando hay intervención de hidroeléctricas hemos encontrado para las aguas disminución en los caudales, contaminación y privatización de tramos de ríos y la migración de peces se paraliza afectando su vida y nuestra alimentación y recreación; el cambio en las características naturales del río (temperatura, movimiento, profundidad) destruye su diversidad y el modo como nos relacionamos con él; las transformaciones en el caudal del agua por

amplios períodos de tiempo pueden generar inundaciones y sequías que nos afectan gravemente (Echeverri, 2016). Asimismo, pérdidas de suelos debido a prácticas agrarias no adecuadas y utilización de agro tóxicos, contaminación de las aguas y afectaciones a la salud por la misma causa.

En las **afectaciones sociales**, hemos identificado la revictimización de las comunidades que fueron desplazadas por el conflicto armado y que hoy por hoy llevaban un proceso de retorno a sus territorios. A causa de la declaratoria de estos proyectos de utilidad pública e interés general, las comunidades tienen la amenaza de ser expropiadas, es decir, nuevamente desplazadas de sus veredas o barrios. En este sentido muchos de los afectados afirman que Cornare no cumple con el papel de control y vigilancia del plan de manejo ambiental, en especial con las quejas y reclamos a que están obligados los proyectos. Cornare hace muy poco en la verificación ambiental de las afectaciones a la comunidad y solo lo hace cuando es requerido, denotando poco interés respecto al seguimiento y verificación de las alteraciones ambientales.

En las afectaciones culturales y económicas hemos evidenciado una pérdida de identidad con relación a la cultura campesina a causa del cambio en la vocación agrícola, ya que muchos de los campesinos y campesinas que han padecido la instalación de estos proyectos, se ven en la necesidad de generar otras labores ligadas a la mano de obra para estas empresas o al desplazamiento forzado porque sus tierras son declaradas de interés social. En palabras de Agudelo:

Estos proyectos llegan y profundizan el problema del abandono del campo, al competir por la mano de obra local con el campesino, lo que ocasiona

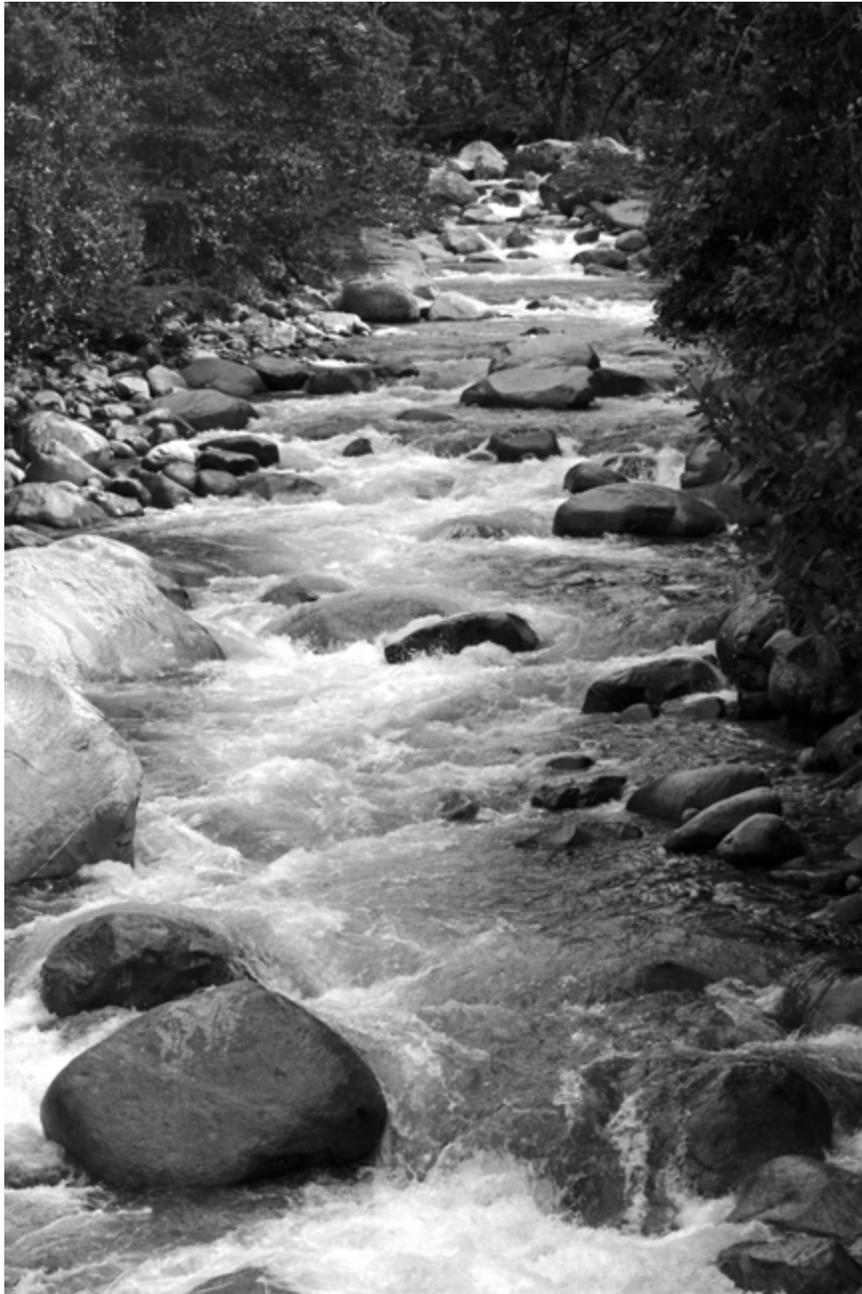
que los pocos jóvenes presentes en el campo, terminen trabajando con las empresas y después de terminado el proyecto migren a otro, pero no regresen a ser agricultores.

A lo anterior, se le suma que si un campesino entra a trabajar en estas construcciones, debe dejar de trabajar la finca, pues los horarios son largos, pesados, de trabajo continuo y sin días de descanso por la necesidad de terminar la obra con rapidez. Las obras duran en promedio de 2 a 6 años, así que después de laborar en la empresa durante varios años, al campesino le es casi imposible, o muy costoso, recuperar la finca que abandonó, lo que lo obliga a buscar otras alternativas de supervivencia: se desplaza y termina aumentando los cinturones de miseria en las ciudades y los procesos descampesinización. (2017, p. 15)

Todas estas afectaciones no son contempladas en los costos o impactos que generan este tipo de proyectos. Para muchas de las comunidades estos proyectos no logran mejorar la calidad de vida de la población (como prometen serlo), ni generar un bienestar económico, ambiental y social; al contrario, degradan en las múltiples dimensiones las vidas humanas y no humanas que habitamos estos territorios.

### **Antagonismo entre las formas de vida y racionalidades campesinas vs las élites con sus proyecciones territoriales**

Después de esta revisión de los conflictos socioambientales que tenemos en el Oriente antioqueño, resulta útil poder sintetizar un poco la discusión en torno a los modos y medios de vida que están en disputa entre las formas de reproducción comunitaria de la vida y los proyectos capitalistas de maldesarrollo.



**Imagen 3: Río Verde de los Montes, Municipio de Sonsón.  
Diciembre 7 de 2018**

Es fundamental reconocer que en el Oriente antioqueño se han instalado desde hace varios siglos unas élites y unas formas hegemónicas de habitar y proyectar el territorio, ligadas a la acumulación de capitales y tierras. El proyecto de estas élites se enclavó en un territorio bio-socio-diverso, con una geomorfología andina e hidrología abundante, estratégicamente ubicado entre el mar Pacífico y el Atlántico (Dávila, 2017). Sobre estos lugares se configuraron proyectos territoriales para la acumulación de capital de mineros, comerciantes e industriales que posicionaron formas coloniales de habitar y reproducir estas naturalezas del Oriente antioqueño, pensados desde las élites como lugares de extracción (minera, agrícola, hídrica, etc.) para beneficiar intereses foráneos.

Esta relación colonial con el Oriente antioqueño se profundiza con el reposicionamiento estratégico que las élites empezaron a implementar desde los años 60 para esta subregión. Este proceso de hidraulización del Oriente implicó un nuevo proyecto “civilizatorio” para estos territorios, al pasar a configurar un nodo fundamental en la colonización capitalista que se profundizó en la segunda mitad del siglo XX. Colombia en los años 70 comenzó un proceso de “modernización neoliberal” en el que la apertura al libre comercio estuvo acompañada de grandes préstamos del Banco Mundial para la construcción de grandes centrales hidroeléctricas y represas. Como hemos venido señalando, esta re-ubicación geoestratégica del Oriente transformó profundamente las formas de habitar estos territorios por las comunidades campesinas, y sus modos de criar la montaña, el agua y la vida.

Estas formas otras de identidad, territorialidad y memoria colectiva que tienen las comunidades campesinas, la permanencia de estas formas de pensamiento diverso desde los sentires y las ex-

periencias vecinales, es lo que está en disputa. Como dice Carlos Olaya:

Está en disputa la visión de las maneras propias de habitar el territorio. ¿Nosotros qué nos disputamos aquí? La manera propia de entender cómo habitamos nosotros este territorio, cómo lo disfrutamos. ¿Que nosotros defendemos el agua por qué? Porque sin el río no pudiéramos vivir, porque el río es el medio vital. Entonces estamos disputando la manera en como nosotros habitamos el territorio porque nos van a imponer otra manera distinta de habitarlo. (Taller sistematización Movete, 2018)

De ahí que “acá en el Oriente se está jugando es la permanencia, el tejido social y comunitario, la configuración del territorio como tal”. Estas formas antagónicas de pensar el territorio responden a los objetivos e intereses que tienen los actores que intervienen en los conflictos socioambientales. Por eso, vemos un proyecto de tejido comunal para la vida, donde el reconocimiento de las memorias y las identidades permitan construir formas dignas de habitar y soñar los territorios en las comunidades campesinas y urbanas populares.

En este proyecto, los significados del agua para las comunidades campesinas están ligados a la vida (“vital para la vida de todo ser viviente”, “fuente de nuestra vida”), la salud, la riqueza, las tareas domésticas (la limpieza, el aseo), a los alimentos para la montaña y nosotros (“el agua es alimento, es lo principal para nuestra alimentación”, “sin agua no somos nada, el agua es todo”), a la energía, la diversión y el compartir con la misma naturaleza. Las montañas son narradas a partir de palabras como la vida, oxígeno-aire puro, la tranquilidad-silencio, el sustento-lugar de trabajo,

protección del agua (“por medio de la montaña tenemos agua y no tenemos derrumbes”), madera para hacer de comer y construir, cultivos, diversión, ganado, pesca, calor, libertad, animales para recrearse y comer, en fin, “tantas cosas que no sabemos explicar”.

Estas formas de narrar y conceptualizar las aguas y las montañas que tienen las comunidades campesinas en el Oriente antioqueño nos llevan a pensar en los procesos de crianza sacionatural que se tejen en los procesos comunitarios. Son las aguas y las montañas donde se crían y reproducen las relaciones sacionaturales en donde emergen los mundos de vida campesinos. El agua como vida-sustento-alimento-diversión y la montaña como libertad-tranquilidad-trabajo-madera crean horizontes de sentido que influyen en los procesos de auto-organización y en los sueños de las comunidades campesinas.

Resulta interesante cómo al narrar sus territorios no se rigen por una división tajante entre lo social y lo natural, sino que despliegan una sabiduría emocional donde la riqueza hídrica, la tranquilidad de la vida comunal y la salud colectiva y familiar se articulan con horizontes como la libertad, el compartir y la diversión. Es decir, donde las montañas y el agua son entramados sacionaturales fundamentales para la crianza de la vida comunal campesina.

A estas formas de crianza campesina de la vida se opone el otro proyecto, ligado a la generación de destrucción ambiental y despojo social para la acumulación de capital de actores foráneos. Este proyecto neocolonial tiene proyectada la extracción minera e hídrica para el fortalecimiento de unas élites regionales que solo siguen generando hambre en los territorios. Y aunque no es nada nuevo, sobre el Oriente se viene un aumen-

to de las exigencias energéticas a través de Pequeñas Centrales Hidroeléctricas (PCH's) y otros mecanismos de despojo, que aumentan la conflictualidad socioambiental en los territorios donde tiene presencia el Movete.



*Imagen 4: Corregimiento Río Verde de los Montes, Municipio de Sonsón. Diciembre 8 de 2018*

## Conclusiones

Como vemos a lo largo de este capítulo, al interior de Movete hemos decidido defender los territorios agro-biodiversos del Oriente antioqueño para la reproducción comunitaria de la vida. Esto ha implicado la generación de múltiples conflictos socioambientales en la región, a través de los cuales hemos ido transitando de las luchas por la tierra a la defensa del territorio, comprendiendo también las dimensiones socioculturales y comunitarias que se tejen en estos procesos de cuidado y defensa. Por eso, como Movimiento seguimos comprendiendo que nuestras soluciones frente a los conflictos socioambientales pasan por la transformación del modelo de desarrollo energético y buscan fortalecer la participación comunitaria y la autonomía territorial ligadas a la reproducción de la vida.

Los conflictos socioambientales son disputas territoriales que ponen en tensión formas de tejer y entender la vida. No debemos olvidar que este es el eje de la reflexión y el campo de disputa trascendental: la vida (apuestas-proyectos, prácticas, memorias, saberes y haceres). Es por eso que hoy es fundamental desplegar acciones (entre ellas reflexiones) que nos permitan generar formas de sentipensar de manera “otra” la relación que tejemos con la vida. Repensar la vida, sus procesos, articulaciones, formas de fluir y emerger, es un elemento urgente que nos debe potenciar para imaginar y crear formas alternativas ante la crisis civilizatoria que se agudiza con el continuo movimiento del capital. Como Movete, sentipensamos que defender nuestros planes de vida comunitarios en nuestros

territorios, aprender de nuestras prácticas y procesos locales, nos permite cosechar aprendizajes para nuestros sueños colectivos de reapropiación de la vida.

## **Bibliografía**

Agudelo, S. (2017). Las afectaciones de las represas, Centrales Hidroeléctricas (CH) y Pequeñas Centrales Hidroeléctricas (PCH) en el Oriente Antioqueño, un pequeño recuento. Corporación Cocorná Consciente, Movimiento Social por la Vida y la Defensa del Territorio –MOVETE-.

Área de Paz, Desarrollo y Reconciliación –PNUD-. (2010). Oriente antioqueño: Análisis de la conflictividad. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD.

Arias, J. (2017). El cambio climático en los discursos ambientales: entre la economía verde y la justicia en el Oriente antioqueño. (Tesis de Grado Maestría). Universidad Nacional de Colombia, Medellín.

Cornare (1994). Plan de Manejo delo Páramo de Sonsón, Argelia y Nariño. Rionegro: Cornare.

Dávila, N. (2017). La naturaleza se cuida y se defiende: conflictos por neoextractivismo en el oriente del departamento de Antioquia Colombia. (Tesis de Grado Maestría). Universidade Federal do Paraná, Curitiba, Brasil.

Echeverri, A (2016). Extractivismo y derechos

humanos en el Oriente Antioqueño- Colombia. Movimiento Social por la Vida y la Defensa del Territorio –MOVETE-.

Echeverri, A. & JiménezGómez, A. (2016). Tejiendo territorios para la defensa de la vida y la permanencia en el Oriente Antioqueño. Sistematización del proceso de formación de MOVETE 2015. Movimiento Social por la Vida y la Defensa del Territorio –MOVETE.

Gudynas, E. (2013). Extracciones, extractivismos y extrahecciones. Un marco conceptual sobre la apropiación de recursos naturales [versión electrónica]. En: Observatorio del Desarrollo # 18, CLAES.

JiménezGómez, A. (2015). La gobernanza neoliberal y la “invención” de sujetos colectivos de derecho en conflictos socioambientales generados por proyectos de desarrollo extractivo. (Tesis de Grado). Universidad de Antioquia, Medellín.

\_\_\_\_\_ (2017). Criando la montaña, el agua y la vida: procesos hidrocomunitarios campesinos y acumulación por despojo hídrico en el Complejo de Páramos de Sonsón en Antioquia (Tesis de Grado Maestría). Colegio de San Luis, San Luis Potosí, México.

Martínez, D. (2017). Aguas: entre la privatización y las alternativas. CENSAT Agua Viva-Amigos de la tierra Colombia. Bogotá, Colombia.

Navarro, M. (2015). Luchas por lo común. Antagonismo social contra el despojo capitalista de los bienes naturales en México. México: BUAP, Bajo Tierra A.C.

Olaya, C (2015). Conflictos socio-ambientales en el Oriente Antioqueño. En: Revista Kavilado, 7, 1, pp. 15-21, Medellín.

\_\_\_\_\_ (2016). El exterminio del Movimiento Cívico del Oriente de Antioquia. En: Revista Agora, Universidad San Buenaventura, 17, 1, pp. 128-144, Medellín.

Pardo, L. (2013). Propuestas para recuperar la gobernanza del sector minero Colombiano. En J.V. Saldarriaga et al. (Ed.), Minería en Colombia. *Fundamentos para superar el modelo extractivista*. Bogotá, Colombia: Contraloría General de la República.

Quintero, J. (2007). Efectos de las políticas públicas del sector eléctrico en la participación de las organizaciones comunitarias del Oriente Antioqueño - estudio de caso - Asociación Campesina del Oriente Antioqueño – ACOA. En: *Cuadernos de Desarrollo Rural*, Pontificia Universidad Javeriana, 58, pp. 101-127, Bogotá.

Restrepo, F. (2015). El proyecto minero-energético en la región del Oriente Antioqueño. Sus impactos sobre el territorio. Corporación Jurídica Libertad.

Rodriguez-Carmoma, A., Castro, M., Sánchez, P. (2013). *Imaginario a cielo abierto. Una mirada alternativa a los conflictos mineros en Perú y Bolivia*. Madrid: ACSUR.

Santos, M. (2000). *La Naturaleza del espacio*. Barcelona: Ariel.

Svampa, M., Solá, M. & Bottaro, L. (2009)

Los movimientos contra la minería metalífera a cielo abierto: escenarios y conflictos. Entre el “efecto Esquel” y el “efecto La Alumbreira. En M. Svampa, & M. Antonelli (Eds.) Minería transnacional, narrativas del desarrollo y resistencias sociales. Buenos Aires: Biblos.

Svampa, M. (2012) Pensar el desarrollo desde América latina. En: Massuh, G. (2012) *Renunciar al bien común. Extractivismo y (pos)desarrollo en América Latina*. Buenos Aires: Mar Dulce.

Taller de sistematización (2018). Encuentro y conversación regional con líderes y lideresas del Movete. La Unión, Antioquia.

Tobón, D. (2013). Aguas para todos o todos por el agua. Espacialidades de resistencia frente al plan departamental de aguas en el Carmen de Viboral, Antioquia. (Tesis de Grado Maestría). Instituto de Estudios Regionales INER, Universidad de Antioquia, Medellín.

Toro, C., Fierro, J, Coronado, S. y Roa, T. (2012). Minería, territorio y conflicto en Colombia. Colombia: Universidad Nacional, CENSAT.

Villada, M & Arias, J. (2017). El “desarrollo” y sus impactos sobre la gestión comunitaria del agua. Análisis de un caso en la ciudad de Rionegro-Antioquia. En: Rupturas metabólicas del agua en complejas relaciones urbano-rurales, revista (In) justicia hídrica. Resistencias y alternativas en América Latina. 3, pp. 39-45, Medellín.

Villada, M. (2017). Hacia una Política de lo Común. Experiencia de Gestión Comunitaria del Agua en



Foto: Colectivo Desde el 12

## **Acciones Colectivas del Movete: caminos de reivindicación e incidencia por la defensa del territorio**

---

*Maria Alejandra Salazar<sup>21</sup>*

---

21 Socióloga de la Universidad de Antioquia, investigadora de la Corporación Tulpa Comunitaria.  
Correo: marialejandra190@gmail.com



## Introducción

El Movimiento Social por la Vida y la Defensa del Territorio –Movete–, desde su constitución en el año 2013 ha buscado formas con las cuales hacer escuchar su clamor por el buen vivir y la dignidad en la región del Oriente antioqueño. Nuestra bandera de lucha a lo largo del tiempo ha sido clara, no estamos de acuerdo con el modelo económico actual, que explota, empobrece y daña nuestros territorios, costumbres y vida cotidiana. La región del Oriente antioqueño, golpeada por fuertes enfrentamientos entre guerrillas, Fuerza Pública y paramilitares, renace con la fuerza del movimiento social, ese que a pesar de ser intimidado diariamente, sigue en pie por la defensa de la vida.

El presente capítulo recopila y analiza algunas de las Acciones Colectivas desarrolladas o acompañadas por el Movete. Entendemos por Acción Colectiva todas esas estrategias y repertorios por los cuales los movimientos sociales han visibilizado las injusticias, los conflictos y la exclusión social, también para generar diálogos con los gobiernos y Estados (o empresas) y generar consciencia sobre las consecuencias de sus políticas, que generan el enriquecimiento de unos pocos y la marginalidad y empobrecimiento de la mayoría.

Para este análisis, queremos dialogar con la teoría de la Acción Colectiva y Subjetividad de Alfonso Torres Carrillo<sup>22</sup>, el cual nos brinda una herramienta de análisis fundamental para desentrañar algunos elementos básicos de los movimientos sociales latinoamericanos y sus formas de acción y lucha.

Los movimientos sociales, desde hace varios años, han estado en el foco de análisis de las ciencias sociales. A medida

que pasa el tiempo y existen más interpretaciones sobre los individuos y grupos sociales, se acrecienta también el panorama de interpretación sobre las acciones que se desarrollan en pro de alguna causa común.

Con respecto a la Acción Colectiva, hacia los años 70, algunos teóricos de las ciencias sociales contribuyeron a nutrir los debates que se habían estado dando años atrás sobre los movimientos sociales (Torres, 2009), en este sentido, Alberto Melucci dio origen al concepto de “sistema de acción colectiva” (Melucci, 1976) el cual se define por la presencia de un conflicto y la solidaridad, un sistema de relaciones que liga e identifica a aquellos que participen en él. De acuerdo a la investigación de los movimientos sociales de los años 80, Melucci identifica algunos rasgos de la Acción Colectiva:

1. Evidencian que la emergencia de los conflictos tiene un carácter permanente, no coyuntural;
2. Expresan la tensión entre los sistemas institucionales de decisión y la sociedad civil;
3. Sus temáticas son particulares;
4. Sus actores son temporales;
5. Poseen una transversalidad social y una globalidad espacial;
6. Revelan a la sociedad que estos problemas existen;
7. La acción de los movimientos son ellas mismas un mensaje y una alternativa para la sociedad;
8. Dan lugar central a la expresión simbólica;
9. No buscan principalmente temas materiales. (Torres, 2009)

Es así como se van configurando los movimientos sociales según Melucci, respondiendo a tensiones entre la estructura o sistema económico a través de Acciones Colectivas, que dan cuenta de la organización y estructuración del movimiento.

Torres Carrillo, analizando y recogiendo algunas teorías sobre los movimientos sociales y la acción colectiva, propone un marco de análisis para las Acciones Colectivas. Para él, “en todos los procesos constitutivos de identidad colectiva,

22 Doctor en estudios latinoamericanos. Docente e investigador de la Universidad Pedagógica Nacional.

de actores sociales y de acción colectiva confluyen condiciones políticas y sociales estructurales, procesos generados por la propia experiencia asociativa y de lucha, y dimensiones subjetivas previas e instituidas por el movimiento” (Torres, 2009, pág. 67), según su experiencia investigativa, para el análisis de la acción colectiva, es necesario considerar:

1. “El contexto histórico en sus dimensiones estructural y coyuntural.
2. El contexto territorial en el cual se manifiestan las tensiones estructurales y coyunturales y son percibidas y elaboradas por la gente desde sus marcos interpretativos (cognitivos, valóricos e ideológicos)
3. Los vínculos de solidaridad entre los actores, que dan una base comunitaria a los movimientos, así como de unas dinámicas organizacionales y estrategias que estructuran la acción colectiva.
4. La formación –siempre abierta y conflictiva- de identidades y solidaridades que garantizan la unidad y continuidad de las organizaciones y luchas.
5. Las formas y modalidades de movilización colectiva que hacen visible el movimiento.
6. Su incidencia tanto en la coyuntura inmediata en la que actúan como en el conjunto de la sociedad. (Torres, 2009, pág. 67)

Retomando estos elementos, se buscó analizar tres Acciones Colectivas que se consideran importantes para el Movete y la región del Oriente antioqueño: los Festivales del Agua desde la conformación del movimiento en el año 2013 hasta el año 2017, la Caravana por la Vida, el Territorio y la Paz del Oriente antioqueño y el Samaná Fest Comunitario por la defensa del río Samaná. Para cumplir este objetivo, se hizo una revisión sobre los documentos que dieran cuenta de esta temática y que pertenecen al Movete (actas, invitaciones, relatorías, documentos internos), se realizó un rastreo de prensa con el que se elaboró una matriz con noticias

sobre Acciones Colectivas desde el 2009 al 2018, que arrojó más de noventa entradas, y se desarrolló un Taller de Sistematización el día 6 de octubre de 2018 con miembros del Movete y participantes de organizaciones que han trabajado con el movimiento. De forma mayoritaria, el resultado del diálogo en el Taller de sistematización está consignado en el apartado de los Festivales del Agua.

Teniendo en cuenta los alcances de este trabajo de investigación, sabemos que lo contenido en el capítulo no da cuenta de todas las voces, perspectivas y opiniones de los integrantes del movimiento y de los trabajos adelantados en cada municipio, sin embargo reconocemos lo necesario de recopilar las memorias de estos años de historia y lucha en el territorio.

Agradecemos especialmente a las personas que dispusieron su palabra en el Taller de sistematización, pues sus testimonios fueron fundamentales para entender los derroteros e incidencia en el territorio.

### **Festivales del Agua**

En este apartado analizaremos una de las Acciones Colectivas más importantes para la región y para el Movete: “El Festival del Agua” como espacio de encuentro entre los diferentes municipios del Oriente antioqueño y las organizaciones sociales y populares que trabajan desde lo local.

La consolidación de un espacio de encuentro e integración para los pueblos de la región del Oriente antioqueño, dio sus primeros pasos hacia el año 2009 en El Peñol, liderada por el Equipo Departamental de Servicios Públicos y Pobreza que agrupaba en esa época organizaciones sociales y populares del Valle de Aburrá y el Oriente antioqueño. Este encuentro departamental permitió que se agruparan más de 2500 campesinas, campesinos y habitantes de algunos

barrios de Medellín desconectados de los servicios públicos, con un propósito fundamental: elaborar un pliego de peticiones y de discusión con el Gobierno, las empresas y las multinacionales asentadas en la región del Oriente, para atribuir su responsabilidad directa por la problemática más fuerte que se identificaba en ese entonces, la pobreza (además de las altas tarifas en las facturas de servicios públicos y la nula atención a la desconexión de los servicios públicos de algunos barrios de Medellín).

Cabe resaltar que en septiembre del año 2007 se llevó a cabo la realización del “I Foro Energético del Oriente Antioqueño” con la participación de algunas comunidades campesinas de los municipios de Cocorná, San Luis, Granada y San Carlos y organizaciones sociales de Medellín, que se juntaron alrededor de la problemática energética que vive la región (Cárdenas, 2009).

Sobre estos antecedentes se dio pie a que en la región existiera un espacio de encuentro para la discusión sobre ese modelo de desarrollo impuesto que ha imperado desde los años 70 aproximadamente, y sobre las problemáticas de las comunidades campesinas en la región del Oriente antioqueño<sup>23</sup>. Fue a partir del año 2009 donde se estableció el Festival del Agua en diferentes municipios como mecanismo de discusión y visibilización, por lo que en el año 2010 se realizó en Cocorná, en 2011 en San Francisco y en 2012 en Granada.

Los Festivales del Agua fueron inicialmente “una excusa para volver a encontrarnos, juntar las comunidades y procesos sociales de la región” (Johan Higueta, Taller de sistematización, 2018) alrededor de la defensa del territorio y de la autonomía. En ese sentido, estos eventos de articulación regional se constituyeron como actos de resistencia de

23 Para ampliar el panorama sobre los antecedentes del Movete y de los Festivales del Agua, revisar el capítulo: “Del Movimiento Cívico del Oriente antioqueño al Movete: un recuento de luchas populares y ambientales de la región”, de la presente sistematización.

las comunidades ante los procesos de desarrollo como los proyectos hidroeléctricos, mineros, agroindustriales entre otros, de movilización en defensa del territorio y los bienes comunes. Además, como espacios de reconocimiento y articulación regional con el elemento festivo como forma de movilización y lucha. Se optó por el término y la forma de “festivales” ante la opresión de los espacios políticos y comunitarios por medio de la estigmatización y persecución política a las comunidades (Carlos Olaya, Taller de sistematización, 2018).

Para el año 2013, el V Festival del Agua se realizó en el municipio de El Carmen de Viboral. Allí se dio nacimiento al Movimiento Social por la Vida y la Defensa del Territorio – Movete, escenario de articulación de los municipios del Oriente antioqueño y organizaciones sociales que trabajan desde lo local en estos municipios. Este Festival del Agua permitió la aglomeración de 20 municipios de la región y la discusión sobre otras situaciones que estaban presentes en el territorio como la minería (específicamente en la zona de altiplano), y desde este año empezó a trabajar por mesas temáticas, lo que amplió la discusión sobre los problemas socioambientales del territorio. Además, se desarrolló en un momento álgido para el país, con las movilizaciones del Paro Nacional Agrario que generaron en la región la movilización espontánea por los derechos de las comunidades, especialmente campesinas.

Posterior a la exacerbación de la violencia resultado del conflicto armado en la región, la política estatal de Seguridad Democrática del Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010)<sup>24</sup> enfocó la intervención estatal en la región a atender la crisis

24 Una de estas estrategias de intervención para la región, fue el Laboratorio de Paz del Oriente antioqueño, el cual fue financiado parcialmente por la Unión Europea y pretendía beneficiar a 23 municipios de la región. Con esta estrategia se quería financiar proyectos en los municipios, que debían contener alguna de las siguientes temáticas: Derechos Humanos, Paz y Vida Digna, Gobernabilidad y Participación Ciudadana y Desarrollo Socioeconómico. Ver más en: <https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1519911>; <https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1506708>.

La política de seguridad y defensa de Álvaro Uribe en su primer gobierno, arremetió militarmente en algunos municipios del Oriente, como Cocorná, San Luis, San Francisco y Sonsón. En los municipios de San Francisco y Sonsón las arremetidas fueron en contra de las FARC, principalmente de los frentes 9 y 47 en el marco de la operación Ejemplar. Esta información es recopilada del informe: Impacto de la Política de Seguridad Democrática sobre la confrontación armada, el narcotráfico y los derechos humanos, 2008.

humanitaria y política que se vivía producto del conflicto armado. El movimiento social, para esta época, quedó completamente disminuido, además se implementaron los planes de consolidación territorial a nivel nacional, en asocio con el Gobierno estadounidense, los cuales tenían como objetivo la militarización de los territorios y un plan invasivo contrainsurgente, en el cual también participaron los paramilitares.

Los Festivales del Agua para la región del Oriente, después de la época del conflicto armado, significaron la apertura al movimiento social en la región a través de la celebración y el jolgorio, una expresión de protesta contundente después de que uno de los resultados directos del conflicto armado, el paramilitarismo y las políticas estatales fuera el resquebrajamiento de las relaciones sociales y el tejido comunitario. Es sobre este escenario de visibilización de los procesos sociales y movilización social donde se dio cuenta del agotamiento de la institucionalidad y de algunas ONG's que hacían presencia en el territorio. Fue resurgiendo de a poco la movilización social y la presencia desde lo local de algunos procesos organizativos y comunitarios. A partir de esta Acción Colectiva que se empezó a gestar en el territorio y del resurgimiento de la movilización social, en pro del encuentro de los pueblos y la defensa del territorio, fue como se produjeron las condiciones sociales para la creación y establecimiento de la plataforma social de articulación Movete (año 2013), que permitiría desarrollar más Acciones Colectivas en el territorio y fundamentar la justeza de peticiones de vida digna de los habitantes del Oriente antioqueño.

Para el Festival del Agua del 2013 se logró dar de nuevo importancia al territorio como articulador, por la congregación de los municipios y como escenario fundamental de las luchas por lo común. Sobre esto podemos decir que agradecemos a los caminos abonados por el Movimiento Cívico del Oriente antioqueño, que son de a poco retomados por el Movete, no solo desde lo discursivo, sino sobre una base fundamental de movilización social.

Los resultados de este Festival del Agua fueron muy positivos en términos de incidencia social y cultural. En este escenario de nuevo apareció la juventud como motor de cambio social después de que varias generaciones que sentaron su voz de protesta, fueran silenciadas a través de la intimidación y el exterminio (caso del Movimiento Cívico); este resurgir de la voz de las y los jóvenes posibilitó un cambio generacional necesario en la región y el Movimiento, para discutir el modelo de desarrollo impuesto, diversificar las formas de protesta a través de la marcha carnaval, lo artístico y lúdico y cualificar y nutrir el movimiento regional. Entre algunos de los procesos locales que se involucraron con bastante fuerza, podemos resaltar la intervención del “Colectivo Antorcha” desde lo local en la organización del Festival, en el que además se logró que la Alcaldía municipal atendiera la voz y la presión de las comunidades y organizaciones sociales que venían denunciando las afectaciones de la minería en el territorio.

Para el año 2014, el Festival del Agua se desarrolló en el municipio de San Carlos bajo el lema “Por la autonomía, la defensa del territorio, la vida y la paz”. Ese año, en el contexto nacional, se dieron las mesas de negociaciones con el Gobierno posteriores al Paro Nacional Agrario, además ya resonaban con fuerza en todo el territorio nacional las negociaciones con la entonces guerrilla de las FARC.

El municipio de San Carlos, debido al conflicto armado interno y sus repercusiones, había quedado durante un tiempo “alejado” del Oriente antioqueño<sup>25</sup>; el movimiento social que fue importante para denunciar la construcción de Pe-

25 Algunas cifras del conflicto armado en el municipio de San Carlos: “Hubo por lo menos 33 masacres, se registraron 156 desapariciones forzadas y 78 personas fueron víctimas de las minas antipersonal (Verdad Abierta, 2011).

Informes sobre la violencia en el municipio: San Carlos. Memorias del éxodo en la guerra (CNRR, 2011)

Nunca más contra nadie. (Olaya, 2012)

queñas Centrales Hidroeléctricas (PCH) o Microcentrales y Centrales Hidroeléctricas quedó minimizado posterior a esta época. Acá es fundamental mencionar la relación que hay entre los territorios con riqueza natural, susceptibles de ser apropiados por grandes empresas y multinacionales, y las arremetidas paramilitares. Para el año 2011 llegó a San Carlos la empresa Celsia a reclamar derechos sobre el río Samaná (importante afluente de la región y último río libre de Antioquia<sup>26</sup>) y a imponer la construcción de la Hidroeléctrica Porvenir II, con auspicio de la empresa Integral la cual a mediados de los años 70 había realizado los estudios pertinentes para su licencia ambiental y debido a la presencia guerrillera y paramilitar en los cauces del río no pudo intervenir. Para el año 2012 se realizaron foros por parte de organizaciones sociales, en los que se intentó visibilizar lo que sucede en el territorio y las repercusiones negativas que tendría la construcción de esta hidroeléctrica para San Carlos, es así como el año 2013 este municipio se unió al Movete y para el 2014 pidió que se realizara el Festival del Agua en su territorio, con la intención de que se discutiera en un espacio de carácter regional la problemática hidroeléctrica local.

Este Festival del Agua fue clave para que el Movete se posicionara más a nivel regional y departamental, y además maduró la discusión sobre el tema hidroeléctrico: para la época de los años 70 y 80 del siglo pasado se solicitaba a la institucionalidad y las empresas hacer parte a las comunidades del modelo de desarrollo, con la llegada de cableado eléctrico a veredas alejadas de algunos municipios, la donación de regalías y el apoyo a comunidades campesinas, sin embargo, para dicho Festival la apuesta era rotunda, decir que en los territorios **no** se querían más hidroeléctricas y microcentrales y que **no** se estaba de acuerdo con el modelo de desarrollo y la absoluta necesidad de replantearlo. En este mismo Festival se dio la movilización en contra de la

26 Para ampliar el panorama sobre este problema socioambiental del río Samaná, ver el capítulo “La defensa del Samaná Norte: el último río “libre” de Antioquia”, de esta misma sistematización.

construcción de la PCH “La Chorrera”, una Audiencia Pública sobre el proyecto Porvenir II del río Samaná y la marcha a Cornare en defensa del territorio.

Para ese año y debido al posicionamiento y reconocimiento del Movete y de las organizaciones sociales sancarlitanas, se contó con apoyo de la Alcaldía municipal para la realización del Festival, además, por la gestión de la Personería municipal, a este espacio se sumó la Mesa de Derechos Humanos del Oriente antioqueño, un escenario fundamental de denuncia a las violaciones de Derechos Humanos a raíz del conflicto armado en la región, y que para el año 2012 mostraba la creciente presentación de proyectos extractivos en el territorio: 52 pedidos de concesión para pequeñas, medianas y grandes centrales hidroeléctricas; a partir de lo cual se reconoció una fundamental violación a los Derechos Humanos, ya no sobre sucesos violentos, sino sobre la apropiación de los territorios y proyectos extractivos (sin dejar de decir que una de las razones del conflicto sea precisamente la llegada de proyectos extractivos al territorio).



**Imagen 1: Festival del Agua San Carlos – 2014.**  
**Archivo Movete.**

En el año 2015 nuevamente el Carmen de Viboral recibió el VII Festival del Agua bajo el lema “Nuestras aguas son patrimonio para la vida”. En el contexto nacional se seguían adelantando los diálogos de paz con las FARC, y se desarrolló la II Asamblea Nacional por la Paz con una línea temática fuerte de construcción de paz, cultura de paz y post acuerdos. En lo regional, se dio la promoción del Plan de Crecimiento Verde y Desarrollo Compatible con el Clima para el Oriente antioqueño por parte de Cornare y el posicionamiento de Cumbre Agraria Antioquia. Este año fue importante en términos de incidencia, por el cubrimiento masivo de los medios de comunicación tanto alternativos como tradicionales. Además, se asistió al Festival con un acumulado político importante de las comunidades campesinas que conocían lo que sucedía en sus territorios, resultado del proceso de formación liderado por la Red de Acción Frente al Extractivismo en los municipios del Oriente antioqueño (este proceso de formación, es en sí también una Acción Colectiva, una estrategia importante para el movimiento en términos de cualificación y construcción de conocimiento). De este proceso de formación resultó como producto un mapa de conflictos socioambientales del Oriente antioqueño.

En términos de incidencia, se logró el diálogo entre Cornare y las comunidades del Oriente antioqueño en la Mesa de Conflictos Socioambientales. Allí se buscó negociación sobre la labor de la corporación autónoma concerniente a la gestión ambiental en el territorio, y atribuir responsabilidad a la misma por el detrimento de los bienes comunes de la región por otorgar licenciamientos a proyectos extractivos. En esta Mesa de diálogo se hizo un trabajo fuerte para la incidencia institucional, sin embargo, por su inasistencia el Movete perdió este escenario que permitiría intervenir acerca de importantes conflictos socioambientales, por lo que se hizo un llamado a la coordinación y unidad por parte de las organizaciones que hacían parte del Movimiento, pues alcanzaban estos espacios de participación, pero aún no habían logrado capacidad para mantenerlos.

En el 2015 también hubo actores claves de procesos organizativos del Oriente antioqueño que participaron en las negociaciones del Paro Agrario, los cuales también hicieron parte de Cumbre Agraria Antioquia, y se dio pie en el marco de estas negociaciones a las Cumbres de Paso o por regiones que también hicieron presencia en el territorio.

El VIII Festival del Agua del 2016 se realizó en San Luis, bajo el lema “Por la justicia ambiental y la paz territorial, que las aguas fluyan hacia la paz”. En el contexto nacional, ese año se firmó el Acuerdo Final de Paz, se destacaron también las movilizaciones en torno a la “Minga Nacional” y la instalación de la Mesa Social Minero Energética y Ambiental por la Paz (dándole continuidad a los acuerdos de la II Asamblea Nacional por la Paz, 2015).

En el mes de mayo de ese mismo año, en el marco de la Minga Agraria, Campesina, Étnica y Popular que se desarrollaba a nivel nacional, se realizó un encuentro en el municipio de El Santuario, al cual se vinculó el Movete y el Congreso de los Pueblos del Oriente antioqueño. Este encuentro fue importante pues se vincularon procesos del Valle de Aburrá y se discutió el pliego nacional agrario y el incumplimiento del Gobierno a las comunidades campesinas, también se discutió acerca de las necesidades del territorio del Oriente antioqueño en este escenario nacional. Así se integró el Movete al escenario de protestas nacionales, sin embargo se encontró en esas alianzas un nivel de represión más alto al movimiento social, y hubo denuncias de parte del entonces representante a la Cámara Víctor Correa y de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de los Pueblos Antioquia sobre la persecución y el hostigamiento por parte de diferentes integrantes de la Fuerza Pública en contra de la concentración desarrollada en el municipio de El Santuario (Correa, 2016).

En cuanto a la incidencia, podemos destacar que gracias a los procesos de formación del año 2015 y 2016, los proce-

Los organizativos que conforman el Movete llegaron a este festival más cualificados; se entendieron e identificaron con mayor claridad los conflictos socioambientales y hubo un escenario claro de coordinación de luchas en toda la región, además existió una apropiación de las problemáticas de todo el territorio. También entró al debate la forma en que la defensa de los bienes comunes contribuye a la construcción de paz territorial. Gracias a todo esto, se fue generando una unificación de discursos que lograron una fuerte identidad y arraigo al Movete desde los territorios y comunidades, lo que generó más claridades con respecto al horizonte político del Movimiento que logró mayor fuerza para la movilización y la incidencia.



**Imagen 2: Festival del agua San Luis – 2016.  
Archivo Movete.**

El IX Festival del Agua para el año 2017 se desarrolló en el municipio de Sonsón bajo el lema “Para amar, vivir y defender el páramo”. Este año se dieron importantes movili-

zaciones en el Oriente antioqueño, como el Encuentro de Comunidades Afectadas por Proyectos Hidroeléctricos en el Oriente antioqueño, en Puerto Garza, San Carlos; el Samaná Fest Comunitario; la Movilización contra las Hidroeléctricas en el municipio de Cocorná; el Foro y plantón de la comunidad sancarlitana en contra del proyecto Porvenir II y la Caravana por la Vida, el Territorio y la Paz. En el municipio de Sonsón se visibilizaron las afectaciones provocadas por las microcentrales Aures Bajo (desarrollado en la jurisdicción de los municipios de Sonsón y Abejorral)<sup>27</sup> e Hidroarma (ubicado en la cuenca media del río Arma, en los municipios de Sonsón - Antioquia y Aguadas - Caldas)<sup>28</sup>.

En el marco del Festival del Agua se hizo la tradicional marcha carnaval y algunos recorridos territoriales que lograron evidenciar las problemáticas en el territorio, en especial la del cultivo del aguacate y la extranjerización de la tierra, pues han llegado empresas de Chile y España a comprar terrenos para sembrar grandes extensiones de este cultivo, a pesar de que en el municipio hay zonas de reserva por su cercanía al Páramo de Sonsón; Cornare no ha hecho vigilancia efectiva de la situación, y las empresas llegan al territorio a tumbar el bosque en límites con el Páramo. Durante este Festival también se realizó la “Audiencia Pública Senatorial Proyectos Mineros y Conflictos Socioambientales en el Oriente antioqueño” con la presencia del senador Alberto Castilla y el representante a la cámara Víctor Correa. El objetivo de este encuentro fue “conocer los proyectos de minería y microcentrales que se vienen adelantando en el territorio, para visibilizar y denunciar los impactos ambientales y de violación de derechos humanos que se generan en la región” (Castilla,

<sup>27</sup> Este proyecto fue licenciado por Cornare en enero de 2013 a la sociedad AURES BAJO S.A.S E.S.P.

<sup>28</sup> Para mayor información sobre la hidroeléctrica Hidroarma (Proyecto Cañaverál) visitar la página oficial de la empresa HIDROARMA S.A.S E.S.P. Página web: [http://www.hidroarma.com/wordpress/?page\\_id=3844](http://www.hidroarma.com/wordpress/?page_id=3844)

2017). Una falencia del Movimiento es que no hubo seguimiento a los momentos posteriores a la audiencia senatorial. Para este festival resaltó la participación de las comunidades de Río Verde pues fue importante para la visibilización de la problemática sobre la construcción de PCH's e Hidroeléctricas en Sonsón, también porque dio cuenta de la resistencia y arraigo en el territorio. Posterior al Festival del Agua se siguen adelantando acciones de denuncia e incidencia en Sonsón, lo que hace que el Movete en lo local se fortalezca y se camine efectivamente en la defensa del territorio.

En esta ocasión no se contó con el apoyo de la Alcaldía municipal, y días posteriores a la realización del Festival se dieron fuertes señalamientos y estigmatizaciones a los líderes y lideresas que hacen parte del Movete, lo que resultó preocupante tanto por la violencia y asesinato creciente a líderes sociales<sup>29</sup>, como por la situación de seguridad en el Oriente antioqueño. Se han presentado algunos señalamientos que parecen aislados, pero que pueden ir generando opiniones negativas al Movimiento y a integrantes particulares y pueden generar luego la justificación de hechos violentos. Al respecto se señala una situación preocupante, pues luego de estos señalamientos en Sonsón no se ha hecho seguimiento a más situaciones similares y el Movimiento no se ha manifestado respecto a los mismos.

Para este año también resalta la conformación del Comité de Comunicadores del Movete, que inició su trabajo en el mes de febrero con la creación de un comité impulsor de la propuesta en la región, para luego, en junio de ese mismo año, iniciar el proceso de formación en comunicación popular. Consideramos que era una deuda con el Movimiento, pues se necesitaba impulsar una propuesta comunicativa con fuerza, además de fortalecer la difusión de las actividades que realiza el Movimiento en todo el territorio. Este comité logró impulsar una estrategia comunicativa importante

29 Según cifras del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, para el 2017 se presentaron 441 ataques a líderes y lideresas sociales, de los cuales 121 fueron asesinatos.

para el Festival del Agua en Sonsón y posteriormente, para el año 2018, apoyó las actividades realizadas en el Festival del Agua de San Francisco y la difusión de las mismas<sup>30</sup>.

El estudio y sistematización de la Acción Colectiva de los Festivales del Agua, es fundamental para entender los derroteros del Movete en el Oriente antioqueño, además da cuenta de la maduración del movimiento y la reivindicación de la protesta como forma fundamental de incidencia. Los Festivales del Agua logran que año tras año lleguen nuevos procesos y personas al Movete, además que siempre exista una conversación intergeneracional, lo que permite la ampliación del Movimiento y las estrategias para lograr vida digna en el territorio, además con esta conversación entre generación y saberes se amplía el panorama tanto de problemas socioambientales, como de lucha del Movimiento. Gracias también a estos caminos recorridos, no solo con los Festivales del Agua, sino también con otras acciones colectivas, vamos creando en el territorio una fuerte identidad con el Movete y los procesos locales, y un lenguaje común acerca de lo que nos está pasando en la región, así como las alternativas que se construyen como respuesta a esto.

Para la posteridad y discusión, como resultado del Taller de sistematización desarrollado surgen algunas apreciaciones con respecto a lo organizativo del Movete y que tienen que ver con todo el derrotero de Acciones Colectivas desarrolladas en el territorio. A pesar de que se ha generado identidad y reconocimiento del Movimiento, aún es necesario identificar de forma clara las banderas de lucha concretas a corto, mediano y largo plazo<sup>31</sup>, además coordinar la presencia del movimiento en escenarios claves, tanto a nivel nacional como a nivel regional, pues en los escenarios se hacen articulaciones pero esas articulaciones no se mantienen, y en

30 Se reconocen como vitales las apuestas de radio comunitaria antes de los festivales, también la circulación del periódico del Movete y el material audiovisual construido a lo largo del proceso formativo.

31 Al respecto, se reconoce la importancia de los debates de las Asambleas anuales del Movimiento, pues han generado la convergencia de las y los integrantes del mismo, sin embargo, hace falta retomar lo construido, es necesario volver sobre el marco filosófico del movimiento.

los escenarios regionales el Movete no ha estado presente en algunas discusiones fundamentales y no ha puesto sus demandas en una mesa de diálogo interinstitucional, la cual permita negociar con los actores implicados.

Por último, reconocemos la importancia de la Acción Colectiva de los Festivales del Agua en la región del oriente antioqueño, como forma contundente de protesta, sin embargo se señala la necesidad de ampliar el panorama y las formas de protesta, para que surjan así nuevas Acciones Colectivas en el territorio y hacer consciencia de la justeza de las demandas.

### **Caravana por la vida, el territorio y la paz del Oriente antioqueño<sup>32 33</sup>**

En la construcción del Redher<sup>34</sup>, es un espacio de confluencia de organizaciones internacionalistas que tiene como estrategia la solidaridad entre los pueblos. En Colombia ha ayudado a impulsar y fortalecer distintos procesos organizativos locales y regionales y la articulación de los mismos, y en tal propósito el Oriente antioqueño no ha sido una región ajena. En los años 90 esta plataforma hizo parte del acompañamiento a procesos locales a través de la Asociación Campesina de Antioquia –ACA–, la Corporación Jurídica Libertad, y CODEHSEL (Colectivo de Derechos Humanos Semillas de Libertad, que trabajó desde 1995 en la defensa y difusión de los Derechos Humanos), principalmente en los

32 Extendemos nuestro agradecimiento a Pilar Parra de la Asociación Campesina de Antioquia por su disposición a compartir su testimonio sobre la organización de esta Acción Colectiva. Reconocemos de igual forma su trabajo en la región del Oriente antioqueño y su liderazgo.

33 Apoyo investigativo de Alexandra Zuluaga. Abogada especialista en DDHH y DIH. Realiza trabajo comunitario en Derechos Humanos de las Mujeres. Es comunicadora comunitaria del Movete. Municipio de La Unión. Correo: abogadafeminista@gmail.com

34 La Red de Hermandad y Solidaridad con Colombia –Redher–, es una iniciativa que surge en 1994, como proceso aliado y complementario de la Coordinación Colombia-Europa, Estados Unidos –CCEEU– cuyo objetivo es la denuncia, cabildeo y lobby ante los gobiernos de Europa y Estados Unidos por las graves violaciones de DDHH en Colombia. Algunas de estas organizaciones que hacían parte de la CCEEU, vieron la necesidad de generar una relación con los pueblos de Europa desde una perspectiva popular e internacionalista construyendo lazos con organizaciones, comités, sindicatos, con los que se compartía una oposición radical al sistema de explotación y represión vigente en el mundo (Redher, 2018).

municipios de Granada, Cocorná y San Luis. Este acompañamiento fue posible hasta el momento en que el conflicto armado lo permitió y posteriormente Redher continuó el acompañamiento a procesos urbanos en la ciudad de Medellín, principalmente con personas en situación de desplazamiento. Por Antioquia, siguieron participando del proceso la ACA y la Corporación Social Nuevo Día. La Corporación Jurídica Libertad priorizó el espacio de la CCEEU.

Año tras año, una de las acciones más importantes realizadas por Redher han sido las Caravanas por el territorio, por lo que en 2016, la ACA planteó una iniciativa y convocaron a la Corporación Social Nuevo Día para atreverse a solicitar una para el Oriente antioqueño, sin embargo, por dificultades en la sustentación y por elementos del contexto que llevaron a la necesidad de realizar la Caravana ese año en la región del Sumapaz, se acordó que preferiblemente al siguiente año se realizaría en el Oriente antioqueño.

En 2017, la Coordinación Nacional de Redher escribió a la ACA, con el objetivo de indagar si se mantenía la idea de realizar la Caravana en el Oriente antioqueño, y después de hacer un análisis de la propuesta se decidió llevarla a un espacio asambleario del Movete, ya que consideraban que se podía sacar mayor provecho a la iniciativa en términos de visibilización política del Movimiento. La propuesta fue acogida, sin embargo, hubo preocupaciones en torno a los costos económicos, la experiencia para llevarla a cabo y el hecho de asumir la realización de dos actividades de gran envergadura para el Movete como lo eran la Caravana y luego el Festival del Agua. Posteriormente hubo interlocución de Redher con el Movete para generar claridades en torno a los objetivos y proyecciones de la Red de Hermandad, y a los alcances que podría tener la realización de la Caravana en el Oriente antioqueño.

Así, durante ocho días (del 12 al 19 de agosto de 2017), 50 personas recorrieron el Oriente antioqueño. Los parti-

cipantes eran delegados de organizaciones sociales, de la solidaridad internacional y de Colombia, y los objetivos eran conocer las problemáticas de la región y las iniciativas de las comunidades para solventarlas, compartir experiencias frente a las problemáticas minero-energéticas en Colombia y sus graves impactos socioambientales, para visibilizarlas y construir alternativas conjuntas. Los temas que emergieron en el recorrido fueron: conflictos por proyectos minero-energéticos, el ordenamiento territorial y la expansión urbanística, la situación de derechos humanos en la región, y la memoria del Movimiento Cívico del Oriente antioqueño<sup>35</sup>.

Los lugares por los que pasó la caravana fueron: San Luis, San Francisco (visita al Pajuí), Cocorná (visita a microcentral), San Carlos (Puerto Garza - problemática Porvenir II), Marinilla, Rionegro (Mesa de DDHH), Sonsón (Vereda El Naranjal), La Unión (visita a La Honda, Foro Regional).

**Primer día de recorrido, San Luis. (12 de agosto):** en este municipio se realizó un foro a cargo de Vigías del río Dormilón, en el que expusieron las amenazas contra el río Samaná y sus dos brazos: el río Dormilón y el río Santo Domingo; además se cuestionó el discurso de energía limpia entre empresas y Estado y se dieron a conocer los antecedentes de desplazamiento forzado en la población de la zona. Otro aspecto importante es que los ponentes de Vigías enunciaron los principales propósitos de su proceso social:

1. Intervenir en el desarrollo de los proyectos energéticos desde que se empiezan a solicitar los permisos de estudio, buscando evitar que los procedimientos lleguen a su fase de licencia.
2. Presionar para que el Estado en su Ordenamiento Territorial establezca figuras para proteger el río Dormilón, prohibiendo proyectos hidroenergéticos, mineros y de extracción forestal y definiendo y privilegiando usos

35 Reseña de la Caravana y sus objetivos: <https://www.youtube.com/watch?v=rWOZlAgH-DDQ&feature=youtu.be&t=39>. Periferia Prensa Alternativa, agosto 30 de 2017.

del suelo para la recreación y el turismo de naturaleza.

También explicaron sus mecanismos de incidencia política:

- Asambleas comunitarias.
- Cabildos Abiertos.
- Marchas por la autopista Medellín-Bogotá.
- Publicaciones mensuales en el periódico El Arriero.
- Relacionamiento entre profesionales y comunidades.
- Realización de Videoforos en el parque principal de San Luis.

**Segundo día de recorrido, San Francisco (13 de agosto):** representantes de la institucionalidad hablaron sobre la propuesta BanCo2, y enunciaron que en San Francisco hay 84 familias que hacen parte del proyecto. Cada familia se adscribe al proyecto con dos hectáreas de bosque. Otra intervención giró en torno a las solicitudes de títulos para proyectos hidroeléctricos en el municipio, como el proyecto en el río Santo Domingo que tiene Empresas Públicas de Medellín –EPM–. Las veredas donde se ha realizado la socialización para este proyecto son El Pajuí y La Maravilla.

**Tercer día de recorrido, Cocorná (14 de agosto):** se realizó **un** reconocimiento territorial a la Pequeña Central Hidroeléctrica El Popal, construida por HMV ingenieros a partir del año 2011. Se expuso también la relación de 172 ejecuciones extrajudiciales en la zona con el Batallón Minero Energético, así como las alternativas que se tienen frente a los impactos que generan estos megaproyectos, como el fortalecimiento de la identidad campesina.

**Cuarto día de recorrido (15 de agosto):**

**San Carlos:** se visitó el corregimiento de Puerto Garza. Allí se hizo énfasis en la declaratoria de la Cuenca del Cañón del Samaná Norte como “utilidad pública” para el otorgamiento de la licencia al proyecto hidroeléctrico Porvenir II. Así mismo, en un ejercicio de recuperar la memoria, se mencionó la

relación del conflicto armado con las hidroeléctricas y se expusieron los mecanismos utilizados por la población local:

- Organización de mesas desde la organización comunitaria.
- Audiencia pública.
- Alianzas con otros actores.
- Creación de Mesa de Concertación.
- Se compromete a la alcaldesa para que convoque a reuniones.
- En las reuniones se convoca al Concejo Municipal, Celsia/Integral, la personería y la comunidad.
- Se lleva proyecto a Concejo Municipal.
- Se crean Mesas de Seguimiento al proyecto Porvenir II.
- Se le asigna presupuesto para apoyo técnico y científico.
- Se promueve un debate por la Defensa del Agua, la Vida y el Territorio.
- Organizaciones de DDHH como la Corporación Jurídica Libertad brindan apoyo.
- La administración municipal brinda apoyo.
- Puerto Garza exige un Plan de Acueductos y Alcantarillados.

**Marinilla:** se conversó sobre la historia del Movimiento Cívico en el Oriente antioqueño. Se narraron eventos como la privatización de los servicios públicos en la década de 1970 y se recordaron figuras importantes como la de Ramón Emilio Arcila, asesinado antes de la elección popular de alcaldes, quien pensaba el Movimiento Cívico como un germen del poder popular en Antioquia. Se recordó la primera masacre perpetrada en San Carlos, donde cayeron Víctor Velásquez y Libardo Duque en octubre de 1998, en el marco de una negociación entre ISA y el Movimiento Cívico por la construcción de la línea 500. Igualmente se habló sobre la iniciativa de reconocimiento del Movimiento Cívico como sujeto de reparación colectiva.

**Quinto día de recorrido, Marinilla (16 de agosto):** se realizó un foro con la Mesa de DDHH del Oriente antioqueño. Allí se denunciaron los procesos de retorno y la alta informalidad de la tierra en el municipio de San Francisco, así como la presencia de agrotóxicos por la industria de las flores en el altiplano, los cuales son utilizados cerca de las fuentes de agua. Igualmente se visibilizaron las problemáticas de veredas como San Vicente y La Esperanza del Carmen de Viboral, que van a ser afectadas por la hidroeléctrica Cocorná.

**Sexto día de recorrido, Sonsón (17 de agosto):** la caravana visitó la vereda La Loma, corregimiento de Alto de Sabanas. Allí la comunidad relató las afectaciones provocadas por la construcción ilegal de una carretera para transportar material de construcción del proyecto hidroeléctrico en el río Aures, que se ha hecho arrojando sedimentos al río. Los principales impactos serían sobre todo en las veredas Naranjal abajo, Naranjal arriba, Alto de Sabanas y La Habana. Las comunidades denunciaron inundaciones de las casas y de entables paneleros y los constantes derrumbes que afectan los cultivos, también que la compañía Aures Bajo ha tirado el material de construcción a nacimientos de ríos, de donde la comunidad tomaba el agua para cultivos y animales, y que ha habido un desplazamiento de pobladores que han quedado con sus tierras dentro de los predios de la empresa. Relataron que han intentado cerrar la vía, pero el patrimonio arqueológico ha sido saqueado por la empresa.

**Séptimo día de recorrido, La Unión (18 de agosto):** la caravana visitó la vereda La Honda, que se encuentra en jurisdicción del Carmen de Viboral, pero que tiene prácticas comunitarias con el municipio de La Unión, y en donde se declaró una de las cuatro Reservas Forestales Protectoras que tiene el Oriente antioqueño, ubicadas en los ríos Melcocho y Santo Domingo. Las áreas delimitadas como Reservas Forestales están directamente relacionadas con las áreas destinadas para la construcción de hidroeléctricas. Las normas y reglamentaciones con respecto al uso del suelo en las Reservas no garantizan los derechos de las comunidades

retornadas, que en la legislación tienen los derechos de las víctimas del conflicto armado.

Por eso, durante la visita, se explicó el contexto de la vereda La Honda como entrada a los municipios de San Francisco y San Luis, de ahí que haya sido un escenario de disputa en el marco del conflicto armado. Se hizo hincapié en su ubicación estratégica porque allí se ubican los nacimientos de los ríos que pretenden ser capturados para producir energía. La comunidad denunció: “Pretenden que cuidemos los bosques, cuidemos las aguas, para más abajo hacer proyectos hidroeléctricos”. Igualmente resaltaron que con la reserva pretenden “cuidar el agua y los bosques que van a usar en las hidroeléctricas”, “Nosotros tenemos el pulmón para ellos, para pagar lo que ellos van a contaminar con los megaproyectos”. Igualmente se señaló que en los territorios en donde se han hecho programas de desminado es donde actualmente hay mayores intereses económicos.

**Octavo día de recorrido, Foro Regional (19 de agosto):**

inicialmente se hizo una presentación de los grupos de trabajo de la Caravana: proyectos minero-energéticos, áreas protegidas, economía campesina, y expansión urbana. Posteriormente el senador Alberto Castilla enmarcó las problemáticas y conflictos socializados en los equipos de trabajo dentro de un modelo de acumulación de capital que es dinamizado por medio del despojo y la desposesión de los pueblos y sus territorios. Posteriormente habló de la “descampesinización” del campo, que tiene qué ver con la pérdida de la seguridad y la soberanía alimentarias, así como de la identidad campesina vinculada a la producción de alimentos y a una cultura común al campesinado. Esta pérdida se asocia a un proceso de empresarización del campo, donde el campesino, de ser “su propio patrón”, pasa a trabajar para empresas o particulares, en figuras como el trabajo al jornal.

En términos de proyección de la Caravana, se recogieron las siguientes propuestas que surgieron del Foro:

- Articular propuestas en la región por el reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos: Distritos Agrarios en el Oriente antioqueño, Territorios Campesinos Agroalimentarios, Zonas de Reserva Campesina, implementación de los Acuerdos de La Habana. Con base en estas, estudiar qué es lo que mejor le conviene al campesinado de la región y a sus territorios.
- Intercambios entre movimientos y regiones para compartir experiencias. Sistematizar, socializar y compartir experiencias de otros territorios para retomar y replicar en nuestros territorios. Que de la caravana salga una red de apoyo entre procesos y organizaciones.
- Que Movete acompañe a las comunidades junto a sus luchas.
- Empoderarse del conocimiento de nuevos modelos de explotación como la fractura hidráulica (fracking).
- Articularse para hacer Audiencia Ambiental a Cornare. Se necesita de compromiso de Alberto Castilla (senador) y Víctor Correa (representante a la Cámara). Hacer Audiencia Pública desde el Congreso de la República. Conversar y tener asesorías sobre qué tipo de audiencia es más efectiva para confrontar a Cornare.
- Incidir en el Ordenamiento Territorial, en los POT.
- Promover organización de líderes campesinos e intercambios en el tema de la agroecología.
- Formar jóvenes comunicadores populares.
- Plantear un modelo de desarrollo propio.
- Actualización de los POT.
- Seguir consolidando el Movimiento Cívico Regional que va a defender este territorio. Vinculación a la marcha carnaval por la vida y la defensa del territorio (propuesta impulsada en Cajamarca por COSAJUCA).
- Crear una Mesa Nacional donde se sienten distintas comunidades afectadas por áreas protegidas.
- Diplomado o curso con respecto a los temas de Territorio y Ordenamiento Territorial, que cuente con un módulo de áreas protegidas y un módulo conceptual.

El diseño de dicho recorrido fue clave, y aunque era difícil de realizar, hizo mucho más visible las temáticas gruesas que se venían visibilizando en los Festivales del Agua, sobre las cuales quedó claro que se deben profundizar en su investigación para poder hacer incidencia política. Estas temáticas tomaron fuerza posteriormente en la Audiencia Senatorial que se realizó en el marco del IX Festival del Agua, teniendo en cuenta los mecanismos legales y legislados de la incidencia política y también la movilización social.

Otro elemento importante de la Caravana es la conciencia crítica que se generó sobre el legado del Movimiento Cívico y la necesidad de retomar la consigna “de la protesta a la propuesta” de Ramón Emilio Arcila, líder de este movimiento, en el entendido de profundizar en las problemáticas, pero también en las propuestas y las alternativas.

La organización de la Caravana se hizo sin financiación externa, y fue posible gracias a la autogestión desde los procesos locales mostrando su iniciativa y compromiso. De otro lado, el hecho de que participaran integrantes de organizaciones de otras regiones posibilitó ver las similitudes en las situaciones y conflictos socioambientales, e intercambiar aprendizajes.

Otro aspecto clave en esta caravana fue la difusión masiva en medios de comunicación, antes, durante y después de los recorridos. La primera gran Caravana que se realizó en el país con el Redher se hizo en el contexto del conflicto armado, lo que enseñó la importancia de las estrategias de comunicación como la creación de artículos de prensa que se publicaban con anterioridad en Europa para generar expectativa internacional y apoyo. En ese sentido se creó la estrategia comunicativa del 2017, con el objetivo de visibilizar nacional e internacionalmente lo que sucede en la región del Oriente antioqueño, así como buscar alianzas con los pueblos de otras latitudes.

Con respeto a la incidencia en las mismas comunidades que se visitaron, es importante anotar que a pesar de que estas iniciativas y formas de resistencia son supremamente valiosas para la región, necesitan más fortalecimiento organizativo, ya que muchas de las problemáticas que se encuentran en lo local, se continúan viendo como algo solo de ese sector o esa comunidad, y se deja de lado la conciencia de la complejidad del territorio y la magnitud de los problemas socioambientales de la región.

Finalmente, en este contexto sentimos que el Movete y Redher debe seguir trabajando en varios aspectos y retos frente a las comunidades campesinas del Oriente antioqueño. Uno de ellos es incidir en doble vía en las comunidades para ser muy conscientes de nuestro territorio y sus problemáticas socioambientales, y en la importancia de la incidencia ante las entidades estatales, empresas y multinacionales; en el mismo sentido articular procesos en todo el territorio colombiano, para fortalecerlos en el escenario nacional, pensando que este proceso no debe ser truncado por las diferencias políticas organizativas entre comunidades y organizaciones, sino por el ánimo de construir el territorio que soñamos.

### **Samaná Fest Comunitario**

El Samaná Fest comunitario es un evento para el encuentro de las comunidades del Oriente antioqueño, que busca defender y visibilizar la importancia de las fuentes hídricas en el departamento, en especial el río Samaná, importante afluente de la región y último río libre de Antioquia.

Este Festival, que para el año 2018 llegó a su quinta versión, es organizado y promovido por la Fundación Yumaná:

Esta organización promueve un modelo de protección de corredores biológicos y ecosistemas únicos, con aprovechamiento de los recursos naturales, culturales y arqueológicos, con fines de implementar un esquema de desarrollo sostenible, con promoción del ecoturismo, la permacultura y modos de producción energética sostenible e innovadoras; con la participación de las organizaciones campesinas, sociales, ambientales y líderes locales, desarrollando estrategias de inclusión socioeconómica y siendo un referente de integración comunitaria, modelo de reconciliación y paz. (Fundación Yumaná, 2017).

Este Festival tiene como objetivo la congregación de los pobladores de la región, además generar un encuentro en el que confluyan las pedagogías del cuidado del medio ambiente, la defensa del río Samaná y la denuncia e inconformidad por la construcción del proyecto hidroeléctrico Porvenir II de la empresa Celsia.

Para las últimas versiones del Samaná Fest, especialmente la cuarta versión en el 2017, la Fundación Yumaná ha hecho algunas alianzas estratégicas con organizaciones sociales de la región, como los Vigías del Patrimonio Cultural y Natural del corregimiento El Prodigio de San Luis, el Move-te, la Asociación de Mineros y Pescadores de Puerto Garza en San Carlos, Movimiento Vigías del Río Dormilón de San Luis, Mesas de Concertación por el Agua, la Vida y la Defensa del Territorio de San Carlos, el Grupo de Investigación Kavilando y la Asociación Campesina de Antioquia -ACA-. Es así como el Move-te se ha hecho parte activa de este festival, pues reconoce que se integra sus banderas de lucha en la defensa del territorio y la protección de los bienes comunes como el agua.

La Fundación Yumaná, siendo consciente de la problemática social y ambiental que tiene para la región del Oriente antioqueño la construcción de la presa hidroeléctrica Porve-

nir II, ha recuperado algunos datos fundamentales sobre la riqueza ambiental de la cuenca. El proyecto Hidroeléctrico Porvenir II de la empresa Celsia estaría entre los municipios de San Luis, San Carlos y Puerto Nare, su estudio ambiental lo realizó la empresa Integral, que sería entregado a la ANLA el 2014<sup>36</sup>. La construcción de esta presa intervendría 4.180Km<sup>2</sup>, lo que representa un 7,45% de la cuenta, y por su gran magnitud la pérdida ambiental sería devastadora:

Se produciría un cambio total del uso del suelo, con consecuencias como la destrucción total del hábitat de 673 especies de flora distribuidas en 103 familias, de las cuales hay 22 con alto valor de conservación; 64 especies de mamíferos, 273 especies de aves (2 endémicas), 33 de anfibios (3 endémicas) y 35 de reptiles (1 endémica), tala de más de 76.000 individuos de especies arbóreas catalogadas en alguna categoría de peligro (incluyendo 2 endémicas, 2 en peligro crítico y 5 en peligro), además de afectar especies endémicas cuya área de distribución no supera los 2 departamentos (afectación de más de 29.000 individuos). Además, de las 55 especies ícticas reportadas para el AID del Proyecto Hidroeléctrico Porvenir II, el 58,2% son especies endémicas de la cuenca Magdalena-Cauca, y 15 son migratorias (27,3%), de las cuales nueve (9) se encuentran en alguna categoría de amenaza (i.e. susceptible de extinguirse en un futuro próximo). (Fundación Yumaná, 2017)

Aparte de los argumentos biológicos para decir no a la construcción de la presa, las consecuencias sociales serían también muy graves. Las comunidades y sus costumbres se verían afectadas, y se producirían cambios también en el uso y tenencia de la tierra, pues actualmente las comunidades riverenas del río sostienen su actividad económica de la pesca artesanal y la agricultura.

36 Página web del Proyecto Porvenir II: <http://www.proyectoporvenir.com/Paginas/El-proyecto.aspx>

El río Samaná por muchos años estuvo “escondido”, por su cauce pasaron varias guerras y actores armados, lo que hizo que fuera olvidado por las grandes empresas y el Estado. A pesar de que van aproximadamente cincuenta años de destrucción de los bienes comunes y los ríos en el territorio, Celsia quiere amurallar y encarcelar el único río de la región libre.

La Acción Colectiva del Samaná Fest ha generado que organismos nacionales e internacionales se interesen en la protección del río Samaná, además ha generado en los pobladores alternativas sostenibles para su territorio como el ecoturismo, inclusive para algunos pueblos y comunidades que apenas regresan al territorio después del rigor de la guerra. Aparte de esto, la discusión y opinión sobre el represamiento del río ha estado en muchos medios de comunicación oficiales y alternativos, trabajos de investigación académicos, reportajes, videos y un sinfín de material que visibiliza la importancia de los ríos libres. Sobre la protección del río Samaná, también se reconoce la importancia de la comunidad sancarlitana y líderes y lideresas que se integran al Movete.



**Imagen 3: Samaná Fest 2017.**  
**Archivo Movete**

### **3. Otras acciones colectivas adelantadas en el territorio**

No queríamos dejar pasar este espacio, sin mencionar algunas Acciones Colectivas en defensa del territorio que han surgido desde los diferentes procesos, organizaciones y territorios que hacen parte del Movete, estando seguras que faltan muchas más por añadir:

- Movilización en San Carlos en contra de la construcción de la Microcentral Hidroeléctrica La Chorrera.
- Movilizaciones del Paro Campesino en la región del Oriente antioqueño, en los años 2014 y 2015.
- Defensa del Río Dormilón, por Vigías del Río Dormilón en San Luis.
- Movilizaciones en el Carmen de Viboral en contra de la minería en el territorio, 2015.
- Procesos Formativos del Movete, 2015 y 2016.
- “El Dormilón que nos despertó. Sistematización del proceso ciudadano para la protección y defensa del río Dormilón”. Vigías del río Dormilón, San Luis, 2016.
- Movilización en Cocorná en contra de los proyectos hidroeléctricos, 2017.
- Audiencia Pública Senatorial, 2017.
- Asambleas Comunitarias Locales.
- Acciones Jurídicas contra el extractivismo en la región.

## **Bibliografía**

- Cárdenas, O. (2009). *Hacia un Movimiento Departamental. Periferia*. Prensa Alternativa, pág. Edición 44. Página 6.
- Castilla, A. (17 de Octubre de 2017). Alberto Castilla. Senador Campesino. Obtenido de *Proyectos Mineroenergéticos y Conflictos Socioambientales en el Oriente Antioqueño*:  
***<http://albertocastilla.org/el-oriente-antioque-no-realizara-audiencia-publica-sobre-proyectos-mineros/>***
- CNRR. (2011). *SAN CARLOS: MEMORIAS DEL ÉXODO EN LA GUERRA*. Bogotá, Colombia: Editora Aguilar, Altea, Taurus, Alfaguara, S.A.
- Correa, V. (30 de Mayo de 2016). Militares de civil hostigan actividad de la Minga Agraria, Campesina, Étnica y Popular en Santuario Antioquia. Denuncia Pública. Victor Correa Vélez, Representante a la Cámara por Antioquia, págs. 1.  
***URL:<http://www.victorcorrea.com.co/militares-de-civil-hostigan-la-minga-en-santuario/>***
- Fundación Yumaná. (2017). *Propuesta para la realización del Festival del Río Samaná 2017 - Espacio comunitario para el reconocimiento y apropiación del río y su territorio*. Medellín: Fund. Yumaná.

- Melucci, A. (1976). La teoría de los movimientos sociales. En A. Melucci, Teoría y forma de la acción colectiva. Milan: Etas Libri.
- Olaya, C. H. (2012). *Nunca más contra nadie. Ciclos de violencia en la historia de San Carlos, un pueblo devastado por la guerra. Colombia: CUERVO EDITORES.*
- Redher. (2018). REDHER. RED DE HERMANDAD Y SOLIDARIDAD CON COLOMBIA. Obtenido de Proceso histórico de Redher:  
**<https://www.redcolombia.org/historia/>**
- Taller de sistematización (2018). Encuentro y conversación regional con líderes y lideresas del Movete. La Unión, Antioquia.
- Torres, A. (2009). Acción Colectiva y Subjetividad. Un balance desde los estudios sociales. Revista Folios, 51-74.
- Verdad Abierta. (24 de Noviembre de 2011). Así vivieron el conflicto armado en San Carlos, Antioquia. Verdad Abierta. URL: **<https://verdadabierta.com/asi-vivieron-el-conflicto-armado-en-san-carlos-antioquia/>**, pág. 1.



**YO SOY!**  
**Samana.**  
Nos unimos por el territorio

## **La defensa del Samaná Norte: el último río “libre” de Antioquia**

---

*Juan David Arias-Henao*<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Doctorando en Ciencias Sociales. Magister en medio ambiente y desarrollo. Investigador del grupo Territorio, e integrante del Movete. Correo electrónico: juandavidariashenao@gmail.com



## Introducción

Este texto tiene como objetivo fundamental documentar el proceso de defensa del río Samaná Norte, una de las principales cuencas hidrográficas del Oriente antioqueño. De manera específica se refiere al surgimiento, proceso de movilización y posicionamiento político de las Mesas por la Defensa del Agua, la Vida y el Territorio de San Carlos, organización de base articulada al Movimiento Social por la Vida y la Defensa del Territorio del Oriente antioqueño - Movete.

Analizar la defensa del río Samaná Norte es importante en varios sentidos. Primero porque el río hace parte de una cuenca con una extensa diversidad biológica, arqueológica y cultural; segundo porque resulta vital para el Movete visibilizar la problemática que se desarrolla sobre uno de los pocos ríos del planeta que permanecen libres de represas o canales que se interpongan en su cauce natural; y tercero porque el proceso de resistencia y movilización social en defensa del río, aunque aún no ha logrado despejar del todo las amenazas que representan las empresas del sector eléctrico, ha sido exitoso de varias maneras.

Para realizar este ejercicio se eligió una metodología de análisis de casos de justicia ambiental propuesta por Pérez-Rincón (2016), y que consta de algunos de los siguientes elementos: análisis de datos básicos de actores, localización y ubicación geográfica, proyectos generadores de conflictos, impactos de los proyectos, instituciones vinculadas, papel del movimiento social, marco legal y político, triunfos del movimiento, y alternativas propuestas. Esta metodología fue modificada en varios aspectos a medida que se realizaron las visitas de campo, con la finalidad de adaptarla a las condiciones de este estudio.

La recolección de información se hizo con base en una rigurosa búsqueda de material bibliográfico, documental e informes de prensa. Se recogieron además documentos del Movete, archivos de las autoridades ambientales, textos de las empresas generadoras del conflicto, archivos audiovisuales, documentos del movimiento local, entre otros. En un segundo momento se utilizaron técnicas como entrevistas a profundidad (10) y la observación participante para complementar la información requerida. El análisis de estos datos se hizo de acuerdo con los objetivos planteados.

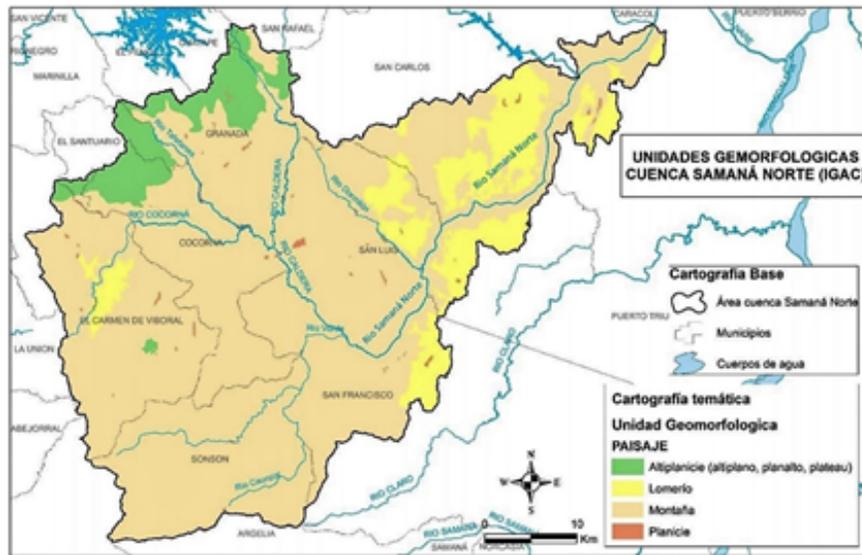
Como se verá a continuación el texto se divide en tres partes. En la primera se caracteriza desde el punto de vista biofísico, económico y cultural la cuenca del río Samaná Norte y en especial las comunidades ribereñas. En la segunda se estudia el surgimiento y accionar de las Mesas por la Defensa del Agua, la Vida y el Territorio, en el marco de la amenaza de diversos proyectos hidroeléctricos sobre el río Samaná. En la tercera parte se presta especial atención a los aportes de este movimiento y su perspectiva de futuro.

### **Diversidad biocultural y arqueológica del río Samaná Norte**

*“el río es una vena que proporciona vida por donde se extiende”*  
Jules Domine, hidrólogo.

La cuenca del río Samaná Norte nace en el páramo de Sonsón y desemboca en el río Magdalena, atravesando ecosistemas de bosques húmedos y muy húmedos (Fundación Jardín Botánico de Medellín, 2017). Tiene una extensión de 2.656 kilómetros, surcando las estribaciones de la Cordillera Central. Se conforma con la confluencia de los ríos Verde, Santo Domingo y Calderas, los cuales a su vez recogen las aguas de los ríos y quebradas de la cuenca. Cruza los municipios de Sonsón, Argelia, el Carmen de Viboral, San Francisco, San Luis, San Carlos, Caracolí y Puerto Nare (ver figura 1). El río Samaná Norte es la única fuente hídrica de

Antioquia que aún se encuentra sin muros de contención que intervengan su cauce natural (Morales, 2016).



**Figura 1: Cuenca del río Samaná Norte. Fuente: POMCA (2017).**

Tal como argumenta Bernal (2017a), el cañón del río Samaná Norte posee una naturaleza prístina y una riqueza biológica y geológica abrumadora. Este río, bordeado por selva tropical, se extiende a lo largo de 60 kilómetros y presenta pendientes escarpadas de hasta 750 metros de profundidad. Asimismo, presenta notables formaciones de mármol en varios kilómetros de su trayecto que son ricas en carbonato de calcio, el cual es disuelto por las aguas ácidas formando grietas y cavernas típicas de un “ecosistema cársico” (Bernal, 2017a) (ver figura 2). Dicho ecosistema es muy escaso alrededor del mundo, por lo que la cuenca del río Samaná Norte es un privilegio único para sus habitantes y el conjunto del país.



**Figura 2: Paredón de roca caliza en medio de un cono cársico. Corregimiento El Prodigio. Municipio de San Luis. Fuente: Elaboración propia**

Desde los años 80 el ecosistema cársico del río Samaná Norte ha sido objeto de estudio de diferentes expediciones de investigación, en especial sobre su etnobotánica y la conservación de especies vegetales de la zona. En dichas investigaciones se han encontrado diversas plantas, entre las que se encuentra el “guanábano de monte” (*Magnolia Silvioi*), una especie reportada en el Libro Rojo de las Plantas de Colombia, actualmente en peligro de extinción, siendo además de importancia histórica por estar entre el grupo de las primeras plantas con flores que aparecieron en el planeta tierra (Fundación Jardín Botánico de Medellín, 2017).

Los investigadores Saúl Hoyos y Rodrigo Bernal, realizaron en el año 2017 dos expediciones al Samaná Norte, en las que han encontrado 61 especies de plantas “reófitas”, de las cuales solo hay algunos cientos de especies en todo el mundo, y que se adaptan perfectamente a las corrientes de aguas rápidas. En esta cuenca se han encontrado recientemente nueve especies de plantas que son nuevas para la ciencia (Bernal, 2017b)<sup>38</sup>

Otros aspectos importantes de la cuenca del río Samaná Norte son las llamativas orillas rocosas, las cuevas que guardan incontables especies de fauna aun sin descubrir y las pinturas rupestres que son vestigios de los antiguos pueblos indígenas como los llamados “Pantágoras”, que habitaron esta zona y se encuentran en gran medida aun inexploradas. En el corregimiento El Prodigio del municipio de San Luis, el ecosistema cárstico que rodea el río Samaná cuenta con varias figuras prehispánicas en forma de petroglifos tallados y elaborados por los Pantágoras (ver figura 3). También hay evidencia de desgastes profundos de zonas rocosas denominados “metates”, en las cuales estas sociedades maceraban plantas para producir medicinas (Entrevistado 4, 2018).



**Figura 3: Petroglifo prehispánico en forma de “búho”.  
Fuente: Elaboración propia.**

La exuberante biodiversidad junto con los hallazgos arqueológicos en esta zona la convierten en un espacio de especial protección. Estos dos aspectos se suman a las poblaciones ribereñas que habitan el Samaná Norte, quienes poseen

---

publicado por Saúl Hoyos y Rodrigo Bernal en el volumen 11 de la revista internacional Tropical Conservation Science, que se titula “Rheophytes of the Samaná Norte River, Colombia: A Hydroelectric Project Threatens an Endemic Flora”.

una cultura de gran valor y tradición para el país. Desde mediados del siglo XX las riberas del Samaná fueron escenario de un proceso de colonización tardía, donde llegaron pobladores de municipios antioqueños como Guatapé, El Peñol, Granada y San Rafael (Entrevistado 1, 2018; Olaya, 2018). En los años cincuenta las riberas del Samaná fueron el escenario de una atroz violencia. Una guerrilla liberal de Santander incursionó en el territorio y se enfrentó con las contraguerrillas conservadoras de Antioquia por el control de esta zona, fenómeno que desoló la región. Los núcleos poblacionales que lograron permanecer son el origen de los corregimientos que actualmente se encuentran en este territorio (Olaya, 2018).

Los habitantes de estos poblados tradicionalmente usan el río para actividades económicas, recreativas y culturales. Alternan la minería artesanal con la agricultura de subsistencia y la pesca. Se acostumbra a sembrar y cosechar en época de lluvia y en la temporada seca se extrae mineral de los ríos. En la temporada seca que normalmente se presenta entre los meses de diciembre a marzo es la llegada masiva de peces que suben por el río Samaná desde las ciénagas del río Magdalena, fenómeno que es conocido popularmente en la zona como la “subienda”. En esta época la pesca dinamiza de manera muy fuerte la economía. Por eso para muchos habitantes de la zona el Samaná Norte es el “patrón” que da trabajo cuando no está muy “enojado” (turbulento), y que además no discrimina a nadie: el río deja trabajar a cualquiera, sin importar si eres mujer, joven, anciano o negro; el río no exige diplomas a nadie (Entrevistado 1, 2018; Entrevistado 5, 2018; Olaya, 2018). El río genera cerca del 90% de los recursos con los cuales sobreviven las comunidades (Hincapié, 2018). Para muchos habitantes el río es incluso un “patrimonio” que ha mantenido la existencia y la reproducción de la vida (Castrillón, 2018).

Es importante señalar entonces la fuerte relación que tienen los habitantes ribereños con el Samaná, para quienes

el río es la vida misma. Biodiversidad, hallazgos arqueológicos y poblaciones ribereñas hacen parte de un complejo sistema de interrelaciones entre los aspectos biológicos, físicos, culturales y económicos que integran el río, siendo así un escenario de gran valor y riqueza. Estas características a su vez han convertido al río Samaná en un espacio de disputas entre diferentes actores del panorama regional y nacional. Como se verá a continuación hay diversas amenazas latentes que originaron nuevos impactos y conflictos para el sistema hídrico y social del Samaná Norte, pero que a su vez generaron también el nacimiento de un proceso de resistencia.

### **La defensa del último río libre de Antioquia**

La cuenca del río Samaná Norte ha sufrido un proceso de cambio repentino durante los últimos 40 años que ha modificado de manera muy importante su dinámica. Los proyectos de infraestructura para el desarrollo se convirtieron desde los años 70 del siglo XX en un fenómeno de altos impactos en términos ambientales, económicos y culturales. La dinámica estructurante y nuclear que cumplía el río Samaná para la cuenca, fue reemplazada por la construcción de la autopista Medellín-Bogotá que comenzó a jugar un papel muy importante en términos de transporte de mercancías hacia diversas regiones del país, dejando al río en un segundo plano para la región (Entrevistado 1, 2018).

Pero tal vez la amenaza más importante para el río Samaná es la apropiación de sus aguas para la producción de energía hidroeléctrica. Por razones históricas, una de las zonas de la cuenca más afectadas por la construcción de proyectos hidroenergéticos es la correspondiente a los corregimientos de Puerto Garza, El Jordán y el Alto del Samaná en el municipio de San Carlos. El embalse “Punchiná”, que hace parte del complejo hidroeléctrico del Oriente antioqueño, fue puesto en funcionamiento en su totalidad hacia 1987 represando el río Guatapé, un afluente directo del Sa-

maná Norte, convirtiéndose desde entonces en la hidroeléctrica de mayor capacidad instalada de Colombia con 1240 MW (megavatios). La construcción de dicho embalse implicó el desplazamiento de los habitantes de un antiguo caserío que tenía el nombre de “Puerto Belo” y de importantes veredas de alta producción agrícola, muchas de las cuales fueron inundadas en su totalidad, en tanto otras quedaron aisladas por la desaparición de carreteras y caminos por lo que sus pobladores debieron abandonarlas (Entrevistado 5, 2018; Olaya, 2018).

La construcción del embalse Punchiná (ver figura 4) en los años 80 es recordada por los pobladores ribereños del Samaná Norte como un fenómeno de notorios impactos negativos para el territorio. Según Londoño (2018), Ciro (2018) y Olaya (2018), las obras del embalse produjeron una serie de desechos en forma de materiales rocosos y de construcción que eran arrojados directamente al río Guatapé y que finalmente fueron arrastrados hacia el Samaná, teniendo fuertes impactos en la dinámica del río. Con las hidroeléctricas Punchiná y Playas se represó en su totalidad el río Guatapé, afectado además con las descargas de la represa de El Peñol Guatapé, así como con el trasvase de la represa Jaguas. Con tal acumulación de aguas represadas se alteró la humedad relativa, el ciclo hidrológico, el microclima de la zona, las temporadas de lluvia y sequía, y por lo tanto los cultivos tradicionales y las formas de vida campesinas. La construcción de las mega obras en el municipio de San Carlos implicó también la llegada masiva de cerca de tres mil quinientos trabajadores foráneos que transformaron los modos de vida de los habitantes locales en su economía y cultura (Grupo de Memoria Histórica, 2011), profundizando así problemas sociales muy marcados en esa época como fue la prostitución y drogadicción (Entrevistado 1, 2018; Londoño, 2018).

La promesa del “desarrollo” para la región anunciada por los promotores de los proyectos de infraestructura poco a poco se fue desvaneciendo y convirtiéndose más bien en una

pesadilla. Desde aquella época el boom económico producto de la construcción de las centrales hidroeléctricas produjo grandes cambios en el territorio, que implicaron a su vez la llegada de una nueva oleada de violencia. Los grupos insurgentes llegaron a la zona provenientes del Magdalena Medio manteniendo cierto control social hasta el momento en que arriban los grupos paramilitares y se desata un conflicto armado que implicó el desplazamiento de cerca del 80% de la población del municipio de San Carlos (Entrevistado 1, 2018; Entrevistado 2, 2018; Londoño, 2018; Olaya, 2018). Este municipio fue uno de los “más afectados por la guerra. Hubo cientos de víctimas de las minas anti persona, desapariciones, asesinatos y desplazamientos forzados, y no menos de 33 masacres” (Morales, 2013: párr. 5).

Algunos habitantes resistieron en el territorio en medio de la guerra, otros se desplazaron y volvieron debido a su apego por el río que les da el sustento. Entre el 2003 y 2004 hubo un primer ciclo de retorno, aunque la zona aún continuaba controlada por los grupos paramilitares. Cuando estos finalmente se retiraron, por la firma de acuerdos y la presión social e institucional, se presentó otro ciclo de retorno y un reacomodamiento de las poblaciones que volvieron a su lugar de origen. A medida que la población local intentaba recomponer sus formas de vida, retomó las actividades productivas, se activaron nuevamente las formas de organización política y se fue reconstruyendo el tejido social, pero aparecieron nuevas amenazas de desplazamiento de la población, esta vez por parte de nuevos proyectos hidroeléctricos.

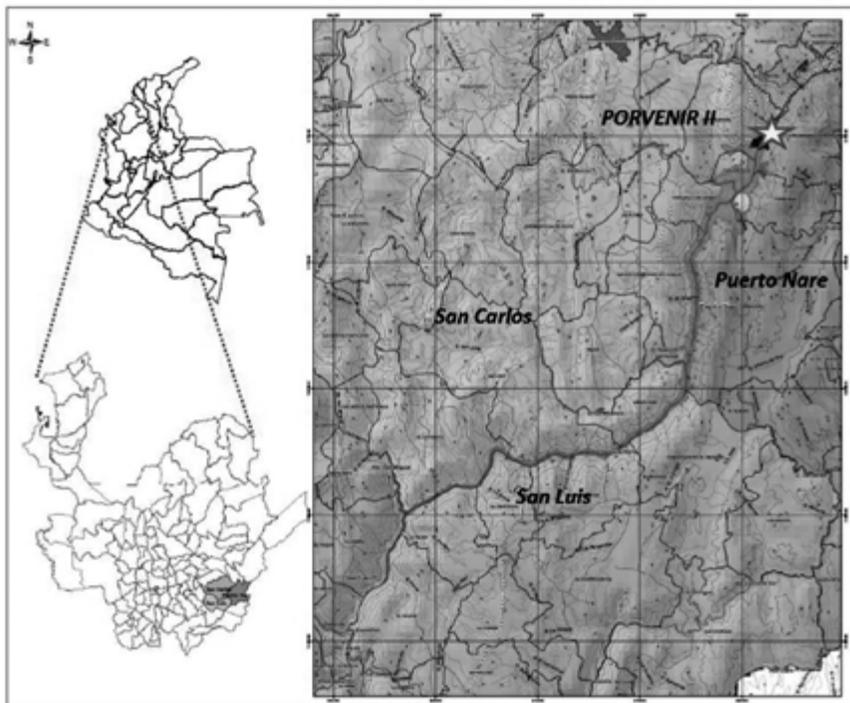
Hacia el año 2008 la población de los corregimientos Puerto Garza, El Jordán y Alto del Samaná en el municipio de San Carlos, comenzaron a observar movimientos de algunos extraños que pasaban por la zona tomando medidas en la orilla del río, haciendo aforos en los predios sin pedir permiso a los campesinos para entrar, y consultando información con los habitantes locales. La inquietud de la po-

blación aumentó y al final se dieron cuenta que la actividad de personas extrañas en el territorio era por la intención de construir un nuevo proyecto hidroeléctrico. Las comunidades organizadas en ese momento en las juntas de acción comunal comenzaron a tratar el tema en sus reuniones, y decidieron llamar a la empresa para conocer directamente sus pretensiones (Londoño, 2018).

A diferencia de las hidroeléctricas construidas en los años 70 y 80 en el Oriente antioqueño, los proyectos que comenzaron a planearse desde el 2008 sobre el río Samaná Norte no son propiedad del sector público, sino de empresas privadas. Los promotores de estos nuevos proyectos son el grupo Integral y el grupo empresarial Argos, quien conformó a “Celsia”, una productora privada de energía que actualmente cuenta con 21 centrales hidroeléctricas construidas en Colombia (18) y Panamá (3). Dicha empresa tiene además otros tipos de negocio como las centrales térmicas, de energía eólica y granjas solares, con presencia en diversos países de América Latina. El nuevo proyecto hidroeléctrico fue llamado “Porvenir II”, con una capacidad de generación de energía de 352 MW, que pretende ser construido en aguas del río Samaná Norte, en jurisdicción de los municipios de San Carlos, San Luis, Caracolí y Puerto Nare (Celsia, 2018) (Figura 4). El proyecto inundaría 975 hectáreas, de las cuales 500 son de bosque nativo. Las otras son potreros, predios agrícolas y bosques maderables. Este proyecto generaría el 3% del total de la energía del país (Inforiente, 2017).

Desde el año 2011 cuando los funcionarios de Socya, entidad que trabaja la investigación social en las áreas de interés para el grupo Argos, empezaron a promover en la Alcaldía y el Concejo municipal el proyecto Porvenir II, las comunidades que recién empezaban a recuperarse de las aflicciones sufridas en medio de la guerra, se alertaron. Para hacer frente a esta situación se empezaron a promover reuniones y foros para establecer con claridad la posición de las comunidades frente a este tipo de proyectos. Esta labor fue facili-

tada por la personería municipal que se puso del lado de los campesinos en el restablecimiento de sus derechos. Como resultado se conformaron las “Mesas de Concertación”.



**Figura 4: Ubicación del proyecto hidroeléctrico Porvenir II.**  
**Fuente: Integral (2015).**

Estas mesas inicialmente se conformaron como un espacio para un posible diálogo con la empresa promotora del proyecto Porvenir II, que para ese momento no era directamente Celsia sino “PROE SAS”. Las afectaciones con las hidroeléctricas ya construidas habían propiciado los elementos de análisis que permitían plantear con propiedad la participación en la toma de decisiones respecto a este tipo de obras. Al respecto surgieron expectativas sobre los beneficios que ahora sí se pudieran obtener para el municipio y familias afectadas. En general los problemas padecidos con los anteriores proyectos hidroeléctricos y la deuda histórica

que había con la región, por las promesas de desarrollo incumplidas, se constituían en el centro de la discusión. En ese momento se consideró el tema de las indemnizaciones, compensaciones, reubicaciones y retribuciones que se podrían exigir al igual que el tema del precio a pagar por los predios y las hectáreas de terrenos que ocuparía este proyecto. La preocupación principal se concentraba en la situación de los pescadores y mineros artesanales por la pérdida del medio de sustento. Otros temas eran la pavimentación de las vías que tanto se había prometido y nunca se había cumplido, así como las mejoras en los centros de salud, entre otros (Londoño, 2018).

Estos planteamientos fueron hechos por representantes de las mesas ante funcionarios de la empresa que habían vendido la idea de que con la llegada del proyecto Porvenir II florecería el desarrollo para el territorio, debido a la gran cantidad de nuevos empleos que producirían. Las Mesas



**Figura 5: Pancarta desplegada en la movilización por las calles de San Carlos en el marco del sexto festival del agua.**  
**[Imagen de archivo del MDAVT]**

consideraban que si se iba a hablar de desarrollo era necesario verlo de una forma integral, porque de lo contrario no habría tal desarrollo. La experiencia de las comunidades locales con proyectos hidroeléctricos había sido muy negativa, y era claro que los empleos que la empresa prometía eran solo por un corto periodo, mientras duraba la construcción de la obra, lo que resultaba una compensación insignificante para la pérdida y muerte de todo un río que ha dado sustento permanente a estas poblaciones. Ante esto, PROESAS consideró que no era de su incumbencia abordar estos temas, puesto que eran responsabilidad del Estado y que no le correspondía resolver a la empresa.

Ante la negativa de PROESAS para centrar el diálogo en los beneficios de la obra para el territorio, los delegados de las Mesas de Concertación decidieron no continuar en las reuniones con dicha empresa. El objeto de las Mesas fue entonces modificado. Así el movimiento pasó a llamarse “Mesas por la Defensa del Agua, la Vida y el Territorio” (en adelante MDAVT) (Londoño, 2018).



**Figura 6: Afiche del foro.**  
[Imagen de archivo del MDAVT]

Seguidamente, las MDAVT junto con la Corporación ambiental Natybos, organización que había sido constituida por pobladores resistentes y retornados, junto a la Personería municipal de San Carlos, realizaron en diciembre de 2012 un primer foro denominado “Agua, Identidad y Territorio” (ver figura 6), en el que se presentó la situación del sector energético colombiano y los impactos de los proyectos hidroeléctricos, y se optó por impulsar una oposición al proyecto Porvenir II a través de mecanismos legislados y no legislados (Entrevistado 1, 2018; Olaya, 2018).

En marzo de 2013, tras el llamado de las MDAVT, la Mesa de Derechos Humanos del Oriente antioqueño realizó una sesión descentralizada en el municipio de San Carlos, con

la finalidad de establecer lazos con las comunidades afectadas por el proyecto hidroeléctrico Porvenir II, y fortalecer los argumentos de la población local como preparativo para la Audiencia Pública Ambiental sobre Porvenir II que se convocaría para el año siguiente. Asimismo, en abril de 2013 las MDAVT y delegados de las comunidades de las zonas afectadas



**Figura 7: Sector “Chorros”. Río Samaná Norte.**  
Fuente: Elaboración propia.

tadas por los proyectos hidroeléctricos que venían siendo planeados sobre el río Samaná Norte, se presentaron ante la Asamblea Departamental de Antioquia, donde expusieron las preocupaciones y temores asociados a dichos megaproyectos. Allí, los diputados del departamento nombraron a la comisión de infraestructura para que acompañara los reclamos de las comunidades, y sirviera como intermediaria ante los ministerios de Minas y Medio Ambiente y ante la ANLA para buscar algún tipo de acuerdo (Morales, 2013).

En diciembre de 2013, las MDAVT junto con la Personería municipal de San Carlos y la corporación ambiental Natybos, realizaron un segundo foro denominado “Agua, Memoria y Vida”, en el que se analizó el tema de las víctimas del conflicto armado, en especial lo ocurrido entre los años 1995 y 2010, que obligó a gran parte de la población local a desplazarse de su territorio. En este evento, proyectos hidroeléctricos como Porvenir II fueron considerados como un factor desestabilizador del proceso de reconstrucción del territorio y el tejido social que se venía adelantando con las comunidades que decidieron retornar (Olaya, 2015).

Más adelante, en julio del año 2014, se realizó en el municipio de San Carlos la Audiencia Pública Ambiental sobre Porvenir II, que tuvo como eje central la discusión sobre los trámites para el otorgamiento de la licencia ambiental para el proyecto hidroeléctrico. En este espacio las MDAVT y la comunidad sancarlitana en general expresaron su contundente rechazo a la aprobación de la licencia. La discusión giró en gran parte alrededor de las afectaciones socioeconómicas de amplios grupos poblacionales de pescadores, mineros artesanales, caficultores, pequeños ganaderos, cacaoteros y campesinos de los municipios afectados por el proyecto. Las comunidades señalaron la falta de rigurosidad con que la empresa promotora de Porvenir II había presentado los estudios previos, tanto así que la propia ANLA les exigió al momento de otorgarles la licencia, más de 2600 requerimientos de información adicional, ratificándose que

habían presentado estudios muy incompletos. Además, en la audiencia la Defensoría del Pueblo y la Personería municipal de San Carlos le pidieron a la ANLA, de manera pública y con documentos, no otorgar la licencia ambiental para el proyecto Porvenir II debido a que estaban en curso procesos de restitución de derechos a las víctimas de la violencia que se verían truncados (Olaya, 2014).

Luego, en octubre de 2014, se realizó en San Carlos la sexta versión del Festival del Agua del Movimiento Social por la Vida y la Defensa del Territorio –Movete–, escenario que anualmente se lleva a cabo en el marco de la resistencia de diversas colectividades del Oriente antioqueño, frente a los proyectos minero-energéticos y sus impactos negativos sobre las formas autónomas de habitar los territorios. En esta versión del Festival, orientada principalmente por la corporación ambiental Natybos y las MDAVT, se debatió alrededor de tres temas generales: la experiencia de resistencia frente a la construcción de la hidroeléctrica Porvenir II, un análisis del sector eléctrico nacional y el modelo de desarrollo nacional y sus impactos territoriales (Olaya, 2015).

Sin embargo, en el año 2014, el Gobierno declaró que Porvenir II era un “Proyecto de Interés Nacional Estratégico” (Celsia, 2018). A pocos meses de esta decisión, el 13 de febrero de 2015 la ANLA otorgó la licencia que permite la construcción de Porvenir II, pese a que desde el 2012 los habitantes del territorio realizaron foros, seminarios, encuentros y participaron en una audiencia pública donde presentaron argumentos que demostraban la inconveniencia de este tipo de obras. Meses antes de que se expidiera esta licencia, el Gobierno nacional declaró el área de influencia de Porvenir II como de “utilidad pública e interés general”. Ambas declaraciones le permitieron a Celsia tener mayor capacidad de gestionar trámites y procesos con el Estado (Portafolio, 2015). Además, la declaratoria de utilidad pública e interés social le permitiría a la empresa expropiar 10,075 hectáreas de tierra de la zona de impacto directo e indirecto del pro-

yecto hidroeléctrico, en los casos en que no fuera posible negociar con los propietarios (Entrevistado 1, 2018).

Ante esto, las MDAVT junto con la Personería municipal y con la ayuda de un equipo jurídico presentaron una demanda de nulidad contra esta declaratoria con solicitud de suspensión provisional, argumentando principalmente que a la luz de las normas internacionales, la jurisprudencia de la Corte Constitucional y la Ley de Víctimas, este tipo de proyectos violaba el restablecimiento pleno de derechos de las víctimas que retornaban a sus territorios en las riberas del río Samaná Norte (Entrevistado 1, 2018).

Por aquella época se denunció que antes de dar la licencia ambiental para el proyecto Porvenir II, a tres de los funcionarios encargados por la ANLA que habían presentado un riguroso concepto negativo para este proyecto, que coincidía con el análisis hecho por la Unidad de Víctimas del Municipio de San Carlos, no se les renovó el contrato, lo que constituyó un grave hecho de acoso laboral al interior de la ANLA (Acosta, 2016). Los nuevos funcionarios designados, en pocos meses, emitieron concepto positivo para la licencia ambiental, la cual fue otorgada mediante la resolución 0168 del 13 de febrero de 2015.

A lo anterior se suma la denuncia de las MDAVT frente a la utilización de los mecanismos de participación ciudadana, mediante los cuales se instrumentaliza la asistencia de las comunidades a diversos escenarios de discusión. Al respecto se observa claramente cómo la ANLA hizo caso omiso a la negativa de los habitantes ribereños del Samaná a la otorgación de esta licencia. Por esto, en estas comunidades hay amplios sectores de opinión que están inconformes con la instrumentalización de los mecanismos de participación a favor de las empresas del sector eléctrico, los cuales han sido aprovechados hábil y fraudulentamente por Celsia para lograr sus propósitos (Castaño, 2017). Muchos de estos son como una simulación porque se usan en función del aval de

los proyectos hidroeléctricos. Se socializan determinados tipos de estudio que hacen las empresas interesadas y eso se considera participación, pero no se ha tenido en cuenta de manera efectiva y real los conceptos que han sido emitidos por las comunidades (Olaya, 2017).

En el año 2016, la Fundación Yumaná, una aliada de las MDAVT, presentó una acción popular ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca con la cual se solicitan medidas cautelares ante las afectaciones irreversibles en el medio natural y la vulneración de los derechos colectivos con la construcción de Porvenir II (La República, 2018). A esta acción jurídica se sumaron las demandas contra la declaratoria de utilidad pública del proyecto y contra la otorgación de la licencia ambiental que presentó un grupo de asesores jurídicos junto con la Personería de San Carlos y las MDAVT. Estos procesos están en espera de fallo.

Además de lo anterior, en enero 2017, se realizó en el corregimiento de Puerto Garza, municipio de San Carlos, el encuentro de comunidades afectadas por las hidroeléctricas en el Oriente antioqueño, en el que se hicieron presentes delegados de diferentes municipios, preocupados por la gran cantidad de solicitudes y proyectos que están siendo licenciados para el uso de las fuentes hídricas de esta subregión antioqueña. Durante todo ese año las MDAVT realizaron encuentros, reuniones y eventos para promover la protección de los bienes comunes naturales frente a las amenazas del modelo extractivista que se ha venido imponiendo en los territorios por donde pasó la guerra.

Sin embargo, a pesar de todo el proceso de resistencia frente a la construcción de la hidroeléctrica Porvenir II, las amenazas sobre el río Samaná aumentan debido a que la empresa Isagen pretende construir la hidroeléctrica Palagua, localizada en el área principal de pesca artesanal del corregimiento Puerto Garza (ver figura 7). Este nuevo proyecto hidroeléctrico se venía pensando sobre el cauce del río Samaná sin que la comunidad local fuera informada sobre

ello. Desde el año 2014 Isagen comenzó a hacer los estudios correspondientes para este proyecto hidroeléctrico con capacidad de generación de 98 MW en jurisdicción de los municipios de San Carlos, Puerto Nare y Caracolí, con infraestructura del tipo a filo de agua, cuyo embalse ocuparía un total de 33 hectáreas (Isagen, 2017). La licencia ambiental de este proyecto quedó a cargo de Cornare.



**Figura 8: Flor Gallego y Beatriz Gómez. Líderesas de la región del Oriente antioqueño e integrantes del Movete desde los procesos locales de La Unión y El Carmen de Viboral. Archivo de la Tulpa comunitaria. Fuente: Isagen (2017).**

Cuando se anunció el trámite de la licencia, las MDAVT tomaron cartas en el asunto y comenzaron a requerir la información pertinente ante las autoridades regionales y nacionales. En el marco de la Audiencia Pública Senatorial realizada en octubre de 2017 junto con el Noveno Festival del Agua (Sonsón), las MDAVT manifestaron que los proyectos hidroeléctricos previstos sobre el río Samaná Norte vulneran la Ley 1448 de 2011, que pretende velar por los derechos de las víctimas del conflicto armado. De igual modo, se declaró que la Fiscalía General de la Nación ha tenido conocimiento de la existencia de fosas comunes en el área de influencia de los proyectos hidroeléctricos sobre el Samaná, donde además se registran casos de bienes y predios en espera de restitución, por lo que se estaría vulnerando el derecho al retorno y la reparación integral de las víctimas de

la violencia (MDAVT, 2017). En dicha audiencia, las MDAVT solicitaron a las autoridades locales, regionales y nacionales pertinentes que:

[...] tomen las medidas necesarias para la protección de las cuencas hídricas, los ecosistemas y la biodiversidad frente a la construcción de grandes, medianas y pequeñas centrales hidroeléctricas, embalses y la explotación minera a gran escala, obras que, además de afectar de manera grave e irreversible los ecosistemas, vulneran el derecho de los campesinos y pobladores rurales a habitar los territorios. (MDAVT, 2017: párr. 3)

En este espacio las MDAVT solicitaron a la ANLA que derogara la resolución 0168 del 13 de febrero de 2015, mediante la cual se concedió la licencia ambiental al proyecto hidroeléctrico Porvenir II. Asimismo, se solicitó a Cornare que suspendiera los trámites que la empresa Isagen había venido realizando para la ejecución de la hidroeléctrica Palagua. Ante esto, el Movimiento propuso un espacio de discusión sobre la implementación de un modelo energético alternativo que preservara los ecosistemas (MDAVT, 2017).

Posteriormente, en diciembre de 2017, las MDAVT enviaron a Cornare un derecho de petición con 43 interrogantes acerca de la manera irregular como se estaba tramitando la licencia del proyecto Palagua, sin tener en cuenta en absoluto la voz de las comunidades afectadas. Este derecho de petición no fue contestado por la autoridad ambiental, violando claramente el derecho a la información de las comunidades locales. En lugar de garantizar los derechos de la ciudadanía, el 24 de agosto de 2018 Cornare otorgó la licencia ambiental al proyecto hidroeléctrico Palagua, ante lo cual las MDAVT solicitaron la revocatoria inmediata de dicha licencia a través de un derecho de petición, en el que expresaban que era necesario establecer en este caso el principio de precaución para evitar los daños socioambientales que no son estimados por las autoridades competentes.

## Logros y perspectiva del proceso de defensa del río Samaná Norte

El río Samaná Norte puede ser considerado como un gran patrimonio de la humanidad. Su rica diversidad biológica, arqueológica y cultural lo convierte en un escenario perfecto para la reproducción de la vida humana y no humana. Esto hace que sea de igual modo un ecosistema muy frágil y sensible a cualquier cambio abrupto de su dinámica. Las MDAVT han contribuido de una manera notable a visibilizar este ecosistema a nivel nacional y a la defensa activa del agua, la vida y el territorio en el Oriente antioqueño.



**Figura 9: Río Samaná Norte.**  
**Fuente: elaboración propia.**

La actual tarea de revocatoria de las licencias de proyectos hidroeléctricos como Porvenir II y Palagua no son simples sueños idealistas, sino exigencias basadas en aprendizajes de procesos de resistencia previos. Así ocurrió con el proceso de revocatoria de la licencia para el proyecto hidroeléctrico “La Chorrera” en el mismo municipio de San Carlos, cuando a través de marchas y diversas manifestaciones la población

local presionó hasta el punto que la autoridad ambiental revocó una licencia ya otorgada para ese proyecto. Este tipo de experiencias ya dadas en la región son una motivación adicional para continuar en la exigencia de revocatoria de licencias otorgadas sobre el río Samaná Norte.

Las MDAVT también han contribuido a poner en el escenario de discusión local, regional y nacional los impactos no estimados de los proyectos hidroeléctricos. Los estudios de impacto ambiental a menudo descartan los sofisticados conocimientos que producen los pueblos en movimiento, que en este caso han llamado la atención sobre las limitaciones que tienen los técnicos de las empresas que producen estudios de impacto descontextualizados y sin participación real de las comunidades locales.

La pérdida de las condiciones de subsistencia de los pescadores, mineros artesanales, pequeños ganaderos y campesinos, la presión migratoria, la llegada de personas foráneas con su impacto sobre las formas de vida locales, el aumento de problemas como la drogadicción o la prostitución, la pérdida de la vocación económica del territorio, el bloqueo de la tradición, la privatización de amplios tramos del río, la transformación del flujo hídrico, la pérdida de flora y fauna en vía de extinción, los impactos acumulativos de varios proyectos sobre un mismo río, el desplazamiento y desarraigo, el encarecimiento en el costo de vida, la transformación de la economía local, la destrucción del tejido social, la criminalización de la organización política autónoma y la movilización social, y muchos más han sido impactos aprendidos a través del conocimiento popular, de la experiencia de muchos años sufriendo las condiciones adversas que producen las hidroeléctricas y que terminan sufriendo las comunidades ribereñas asentadas en la cuenca Samaná Norte.

Las acciones de resistencia a las hidroeléctricas llevadas a cabo por las MDAVT han propiciado que se empiece a restablecer el tejido social y organizativo en las orillas del río

Samaná Norte. El proceso de retorno de la población y la unidad para la movilización social, han hecho aflorar armonía y afectos que fueron rotos por el conflicto armado. De igual modo, las comunidades potencialmente afectadas por proyectos hidroenergéticos se van familiarizando cada vez más y ganando capacidad de acción y cualificación política para intervenir en la toma de decisiones sobre las cuestiones que los afectan directamente.

Las MDAVT han logrado de manera tangible mantener el río Samaná Norte corriendo libre por su cauce. El proceso de movilización, la visibilización del punto de vista de las comunidades, y la resistencia de los pobladores ribereños, han hecho que, por ejemplo, el proyecto Porvenir II que tendría que haber entrado en construcción el 2 de febrero de 2013 y en fase de generación de energía el 1 de enero de 2018, hasta el momento no haya podido comenzar su construcción. Desde hace 10 años, este proceso ha logrado de manera efectiva defender el último río libre de Antioquia y sus actividades no van a parar. Se planean nuevos foros, asambleas comunitarias, intervenciones en espacios culturales, diálogos con las autoridades políticas de diferentes niveles, visibilización en medios de comunicación, derechos de petición, alianzas con otros movimientos, movilización social, actividades de reflexión, entre otras acciones que permiten proyectar el movimiento hacia los próximos años.

Ahora las MDAVT se plantean hacer todo lo posible para que el río Samaná Norte sea declarado como “sujeto de derechos”, y de esta forma poder blindarlo de manera mucho más efectiva de todas las amenazas externas, puesto que este río no es necesario solo para la población del Oriente antioqueño, sino para el mundo entero. Tal como afirma un líder de las MDAVT:

Nosotros no estamos reclamando un río para nosotros, sino para la humanidad. Por eso nosotros no estamos en contra de los proyectos hidroeléctricos, sino que estamos a favor

de algo mejor. No estamos buscando compensaciones con nadie, sino que realmente entendamos que el mundo se está quedando sin agua y que necesitamos defender el único río libre que hay en Antioquia, que es el río Samaná. Finalmente eso es lo que somos: agua, vida y territorio. (Londoño, 2018)

## **Bibliografía**

- Acosta, J. (2016). El multimillonario negocio de las licencias ambientales. Colombia: El Espectador. Recuperado de: **<https://www.elespectador.com/opinion/opinion/el-multimillonario-negocio-de-las-licencias-ambientales-columna-617657>**
- Bernal, R. (2017a). “La bella durmiente del Samaná”. En: El espectador. Recuperado de: **<https://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/la-bella-durmiente-del-samana-articulo-680587>**
- Bernal, R. (2017b). “Las asombrosas plantas del Río Samaná”. En: El espectador. Recuperado de: **<https://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/las-asombrosas-plantas-del-rio-samana-articulo-707375>**
- Castaño, O. [Red Interuniversitaria por la Paz]. (2017, noviembre 27). Las disputas por los territorios y los recursos. Caso Río Samana. [Archivo de video]. Recuperado de **<https://www.youtube.com/watch?v=TmsDxTLacac>**
- Castrillón, O. [Samaná Su Maná Antioquia]. (2018, marzo 25). Samaná Su Maná. [Archivo de video]. Recuperado de **<https://www.youtube.com/watch?v=oLrboREWfcU>**
- Celsia (2018). ¿Qué es porvenir 2?. Recuperado de: **<http://>**

- [www.proyectoporvenir.com/Paginas/El-proyecto.aspx](http://www.proyectoporvenir.com/Paginas/El-proyecto.aspx)**
- Ciro, J. [Samaná Su Maná Antioquia]. (2018, marzo 25). Samaná Su Maná. [Archivo de video]. Recuperado de **<https://www.youtube.com/watch?v=oLrboREWfcU>**
- Cornare (2016). Formulación del plan de ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica del Samaná Norte. Informe de aprestamiento.
- Fundación Jardín Botánico de Medellín (2017). “Acciones para la conservación del río”. En: El Espectador. Recuperado de: **<https://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/acciones-para-la-conservacion-del-rio-articulo-680588>**
- Grupo de Memoria Histórica. (2011). San Carlos: memorias del éxodo de la guerra. Editorial Aguilar. Bogotá, Colombia.
- Hincapié, F. [Samaná Su Maná Antioquia]. (2018, marzo 25). Samaná Su Maná. [Archivo de video]. Recuperado de **<https://www.youtube.com/watch?v=oLrboREWfcU>**
- Inforiente. (2017). Porvenir II y su impacto económico, social y ambiental. Recuperado de: [www.inforiente.info](http://www.inforiente.info)
- Integral. (2015). Presentación del proyecto hidroeléctrico Palagua. Recuperado de: **<https://docplayer.es/22907160-Proyecto-porvenir-ii-un-proyecto-de-generacion-de-energia-renovable-listo-para-aporar-al-crecimiento-del-pais.html>**
- Isagen. (2017). Proyecto Hidroeléctrico Palagua. Recuperado de: **[www.isagen.com.co](http://www.isagen.com.co)**
- La República. (2018). Fallas y consultas frenan entrada a operación de grandes hidroeléctricas. Recuperado de: **[www.larepublica.co](http://www.larepublica.co)**
- Llano, C. (2013). No podemos permitir que la verdad sea inundada. Recuperado de: **[www.inforiente.info](http://www.inforiente.info)**
- Londoño, R. (2018). Entrevista personal realizada por el au-

- tor el día 11 de noviembre de 2018.
- MDAVT. (2017). Declaración política en el marco de la Audiencia Senatorial realizada en el municipio de Sonsón, Antioquia. Archivos del MDAVT.
- Morales, P. (2016). “Represamiento del río Samaná Norte (Antioquia) genera polémica”. En: El Tiempo. Recuperado de: **<http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16507993>**
- Olaya, C. (2018). Entrevista personal realizada por el autor el día 30 de octubre de 2018.
- Olaya, C. (2015). Acciones en defensa del río Samaná Norte. Documento presentado el 26 de abril de 2015 en la asamblea de la corporación ambiental Natybos.
- Olaya, C. (2014). Rechazo sancarlitano a Porvenir II. Recuperado de: **[www.inforiente.info](http://www.inforiente.info)**
- Pérez-Rincón, M. (2016) “Caracterizando las injusticias ambientales en Colombia: estudio para 115 casos de conflictos socio-ambientales”. En: Working paper, MA-CA-Univalle-01. Recuperado de: **[http://censat.org/apc-aa-files/686468646b6c61736a6b-6c646a61736b/conflictos-ambientales-colombia-115-casos-mesoca-anca-v-2016\\_1.pdf](http://censat.org/apc-aa-files/686468646b6c61736a6b-6c646a61736b/conflictos-ambientales-colombia-115-casos-mesoca-anca-v-2016_1.pdf)**
- POMCA (2017). Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca hidrográfica del río Samaná Norte. Disponible en: **[www.cornare.gov.co](http://www.cornare.gov.co)**
- Portafolio. (2015). El viacrucis de porvenir II. Recuperado de: **[www.portafolio.co](http://www.portafolio.co)**



## **Plan estratégico, balances y proyecciones del Movete**

*Juan Bernal*<sup>39</sup>

*Omar Andrés Osorio García*<sup>40</sup>

*“De nuevo, como desde hace diez años, las comunidades, procesos de base, organizaciones sociales y populares del Oriente antioqueño nos hemos reunido a discutir y a movilizarnos en torno a la defensa de nuestra región. Sin embargo, esta vez el encuentro lleva un sentido fundamental, el de empezar a avanzar en la construcción de propuestas para la vida digna, como un eje estratégico que nos permita garantizar condiciones de permanencia en los territorios y como una forma de resistir frente al modelo extractivista de despojo, violencia y muerte que viene arrasando con nuestros bienes comunes, culturas y comunidades orientales”. Fragmento Declaración Política del Décimo Festival del Agua: “Sembramos en el territorio propuestas para la vida digna”. Movete, municipio de San Francisco.*

---

39 Comunicador social – periodista de la Universidad de Antioquia, estudiante de maestría en Ciencia Política del Instituto de Estudios Políticos de la UdeA. Integrante del Movete. Correo electrónico: juanfernandobernal@gmail.com

40 I Profesional en entrenamiento deportivo de la Universidad de Antioquia. Integrante de la Tulpa Comunitaria del municipio de La Unión y del Movete. Correo electrónico: oandres.osorio@udea.edu.co



*Imagne 1: Asamblea del 2018 en el Carmen de Viboral.  
Juan Bernal.*

### **Plan estratégico del Movimiento Social por la Vida y la Defensa del Territorio**

Plan estratégico del Movimiento Social por la Vida y la Defensa del Territorio

El proceso de Movete a partir de su fundación en el año 2013, sin desconocer el legado histórico de lucha cívica y popular del territorio, viene planteándose no solo acciones estratégicas para defender la región, sino también la necesidad de pensarnos desde ella y darnos a la tarea de construir propuesta alternativa al modelo extractivista para nuestra permanencia en el territorio en condiciones de vida digna.

Hemos ido avanzando en la medida que nuestros esfuerzos de acumulación y articulación van desembocando en reconfigurar las acciones a desarrollar. Siendo así, desde el

2017 surgió la necesidad no solo de crear planes de acción anual, sino pensar regionalmente nuestro horizonte estratégico: quiénes somos, qué queremos en el territorio, cuáles son nuestros objetivos políticos y desde qué líneas estratégicas podemos profundizar la lucha por permanecer en el territorio, que nos permita desde lo que hacemos local y regionalmente crecer, fortalecer la articulación y consolidar un movimiento de poder social y comunitario.

Dicho esto, en el 2017 el Movete planteó dentro su plan de acción, realizar su propio Plan Estratégico, en aras de ir fortaleciendo su apuesta alternativa al modelo. Para ello se delegó desde inicios del año una comisión que se encargara de este trabajo, construyera desde el acumulado político, lo que somos, y que permanentemente consultara con los diferentes participantes del Movimiento los avances para ir validando el proceso.

Adicionalmente, la Asamblea del Movete, realizada en diciembre de 2017, fue el escenario para acoplar este trabajo, ampliarlo, profundizar sobre las líneas estratégicas y reconocerlo como una proyección nuestra, tejida desde el movimiento.

Siendo así, el plan estratégico recoge nuestro carácter como movimiento:

Somos el Movimiento Social por la Vida y la Defensa del Territorio del Oriente antioqueño -Movete-, una articulación de comunidades, procesos locales, organizaciones sociales y activistas, quienes formamos un movimiento regional desde la participación popular, a partir del empoderamiento comunitario para la construcción colectiva de los territorios. (Movete, 2017)

Este planteamiento que ensambla “Quiénes Somos”, está fundado en tres elementos que para el proceso han sido muy importantes desde sus inicios: en primer lugar, la **arti-**

**culación** está como eje fundante del trabajo, entendida esta desde el movimiento como la posibilidad de aunar esfuerzos para la consecución de objetivos comunes. Esta articulación se da de manera primordial con las comunidades que habitan el territorio, quienes son afectadas directamente por los proyectos extractivistas, de acumulación y despojo. A esta, se suman las organizaciones sociales de carácter local y regional, así como activistas que ven la necesidad de acompañar y fortalecer nuestros procesos comunitarios. El segundo elemento que abarca esta definición, es la **participación popular**, ampliando con esto el rango de la participación ciudadana delimitada por la normatividad, a la participación que emerge desde abajo, desde los sectores populares que buscan y construyen formas nuevas de ser poder desde sus apuestas y sueños en el territorio.

El tercer elemento que aparece con mucha fuerza en esta definición es la **construcción colectiva del territorio**, que nos propone mirar en primer lugar el territorio desde una lógica amplia y diversa, la que abarca la geografía crítica. Entenderlo no solo como el contenedor del patrimonio ambiental y los bienes comunes, sino que también es, “sobre todo, un espacio construido socialmente, es decir, histórica, económica, social, cultural y políticamente” (Sosa Velásquez, 2012: 7), y hacer parte de esta construcción como actores activos y protagónicos de las decisiones en la región.

En el marco del documento estratégico, también se profundiza sobre nuestro horizonte político como movimiento:

**Nuestra misión:** Promovemos la vida, la defensa del agua y demás bienes comunes naturales y culturales del Oriente antioqueño. Por medio del empoderamiento de las comunidades organizadas como actores políticos, confrontamos al modelo hegemónico de desarrollo centrado en el extractivismo aportando propuestas alternativas al desarrollo construidas desde las bases. (Movete, 2017).

Tanto la visión como la misión plantean otros aspectos que le dan fuerza y características particulares al trabajo de Movete en los territorios. Primero, la paz territorial: en Colombia, las comunidades y procesos sociales han planteado la necesidad de que la paz sea construida desde los propios territorios, que esta no solo es el silenciamiento de los fusiles, sino también los cambios y transformaciones reales que la sociedad civil colombiana necesitan. Todo esto entendiendo que no es posible hablar de paz cuando las comunidades – en el caso del Oriente antioqueño– han sido victimizadas no solo por parte de los actores armados, estatales e ilegales, sino que también ha habido un proceso de re victimización por parte de las empresas extractivistas, las corporaciones autónomas y las casas comerciales de agrotóxicos, quienes con el desconocimiento de unas prácticas culturales propias del campesinado del Oriente, más que desarrollo, han consolidado un modelo al servicio de la economía capitalista y de los grandes empresarios, en contra del bienestar y la vida digna de las comunidades. En ese sentido, la paz gira en el marco de la justicia social y ambiental, y para nuestro proceso, las aguas, los bosques y montañas hacen parte de la vida, por lo que la apuesta de paz sería en condiciones de habitar el territorio en armonía con la naturaleza.

Además, la paz territorial está atravesada por la capacidad de los territorios de planificar su futuro común, de mirar cuál es el sueño desde el lugar que habitan y crear las herramientas para llevarlo a cabo. Es decir, una posibilidad de reconstruirnos desde modelos de planeación, planes de vida y definición de nuestro futuro. Es por esto que se plantea desde el Movimiento que el trabajo de defensa del territorio, aunado a los elementos de justicia social y ambiental, es un gran aporte para la construcción de esa paz desde abajo y desde las comunidades.

El segundo elemento que trae la visión y que ha sido uno de los crecimientos cualitativos del Movimiento, es entender-

nos como parte de la naturaleza. La reflexión gira alrededor de no pensar en esta como un recurso, sino que al ser parte de ella debemos habitarla al mismo tiempo que se defiende, y aportar a la sostenibilidad y recuperación del territorio, pues las afectaciones que la humanidad provoca en ella son también afectaciones que nos hacemos a nosotros mismos como parte de este sistema. Así pues, la apuesta es por la vida en equilibrio y armonía con la madre tierra.

La identidad campesina, que hace parte de la construcción histórica de nuestros territorios, es un aspecto que el movimiento busca fortalecer para el reconocimiento del campesinado, no solo como sujeto de derechos sino también como un sujeto político, imprescindible en las decisiones del país, que revitalice la defensa y el fortalecimiento de la autodeterminación de los pueblos, más aún en este territorio, que como se puede observar a lo largo de este libro, ha sido planeado e intervenido de manera exógena sin tener en cuenta a las comunidades que lo habitan, sus sentires y sus prácticas. Y esta autodeterminación, conocimiento y reconocimiento de las identidades del territorio son la puerta para el sostenimiento de la vida digna de la población.

Por otro lado, la misión del movimiento nos devuelve al planteamiento inicial: la defensa de la vida, del agua y de los demás bienes comunes naturales y culturales de nuestro territorio. Esta acción, que día a día desarrolla el Movimiento desde su objeto misional, se sustenta en las luchas que ha venido construyendo desde tiempo atrás, pero sobre todo en la posibilidad de edificar y sostener las condiciones de vida en el territorio desde principios como la autonomía y la dignidad. Es por lo tanto un aporte a la construcción de la paz, confrontando con esto el modelo de desarrollo basado en el extractivismo y otras prácticas que atentan contra nuestros territorios y nuestras comunidades.

En Asamblea también se definieron los objetivos políticos del Movete, los cuales estimulan el trabajo pues constituyen

nuestro horizonte para la región:

- Fortalecer la capacidad organizativa de las personas y comunidades que trabajan por la construcción de la paz territorial y afianzar su sentido de pertenencia e identidad con el Movimiento y el territorio.
- •Cualificar al Movimiento y las organizaciones articuladas, con herramientas teórico-prácticas que les permitan tener una participación efectiva en la defensa y construcción de su territorio.
- Fortalecer la acción reivindicativa, de visibilización, movilización e incidencia y potenciar la autodeterminación de las comunidades en la defensa del territorio, frente a las actuaciones de las entidades estatales y empresas que afectan al territorio y los bienes comunes del Oriente antioqueño.
- Promover la existencia y fortalecimiento de garantías para la acción y participación de Movete y de sus organizaciones en la defensa y construcción del territorio.
- •Propiciar la articulación regional y nacional para compartir experiencias, tejer lazos de solidaridad y fortalecer a Movete y la defensa del territorio en el Oriente antioqueño.

### **La autocrítica como principio de reflexión para la acción colectiva**

La presente sistematización del Movete no solo busca presentar los avances y proyecciones que como Movimiento hemos tejido a lo largo de estos cinco años, sino también hacer un pare crítico – reflexivo desde el principio de la autocrítica que nos posibilite mirarnos a nosotros mismos, reconfigurar lo que sea necesario y continuar con el proceso de defensa para la vida en el territorio.

Siendo así, comprende en sí misma elementos del balance de los procesos desarrollados por el movimiento en estos cinco años de funcionamiento, aunque por las limitaciones que siempre tenemos a la hora de escribir, este balance termina siendo inacabado, ya que no alcanza a analizar todas las acciones colectivas que se han llevado a cabo desde los procesos locales, zonales y regionales. Sin embargo, alcanza a retratar cómo el proceso se ha ido construyendo y mejorando en este periodo de tiempo.

Es necesario aclarar que el balance general del Movimiento surge del trabajo desarrollado en la asamblea anual que como Movete realizamos. La metodología utilizada giró alrededor de posibilitar que todas las voces aportaran desde su experiencia local y regional. Esto con la idea de que si proyectamos la defensa desde la articulación y la participación diversa de los procesos y comunidades, de la misma manera, es pertinente que todos y todas aporten su grano de arena a la construcción, análisis y reflexión de lo que somos, hemos sido y seremos. Se tuvieron en cuenta dos momentos, en los cuales se analizaron aspectos tanto negativos como positivos, desde un enfoque crítico que no se estanca en la idea de juzgarnos, sino en un análisis propositivo de lo que hemos podido o no avanzar, teniendo en cuenta que no avanzamos porque no queremos, sino por las condiciones, capacidades, debilidades o fortalezas que vayan emergiendo.

### ***Avances del Movete***

Dentro de las discusiones se destacó que uno de los elementos que se pueden asociar al trabajo del movimiento en estos años ha sido su aporte a la recuperación del tejido social que se vio fuertemente afectado por el conflicto armado vivido en este territorio. La recuperación del tejido social ha sido importante por su vínculo a los procesos campesinos y su relación con los procesos urbanos en el Oriente. Este aporte se resalta sin desconocer que en el territorio han

existido también otros procesos de carácter local y regional que han antecedido al Movete y que han realizado también grandes aportes a la reconstrucción de la memoria y el tejido social. Se destaca pues en este aparte, que las personas han podido volver a reunirse, volver a discutir alrededor de una problemática, realizar asambleas comunitarias, foros, cabildos, marchas y protestas. Además, y ha sido uno de los mayores avances, construir propuestas de habitar y vivir el territorio en condiciones de dignidad, reconociendo el legado del Movimiento Cívico de construir propuesta sin dejar de protestar.

Se enfatizó también en la calidad y disponibilidad de los líderes del Movimiento, su capacidad para orientar los procesos, y la respuesta que se tiene a las coyunturas locales, regionales e incluso nacionales. De igual manera se pudo observar que en el territorio hay procesos locales con buenos niveles de fortalecimiento, y que se ha ganado en la construcción de una identidad para la defensa del territorio. Así mismo, el Festival del Agua ha logrado fortalecer y posicionar acciones políticas de defensa del territorio, no solo en la región del Oriente antioqueño, sino que con los años se ha convertido en un referente a nivel departamental e incluso nacional, como un espacio de articulación y de construcción en colectivo que visibiliza las problemáticas que se viven en la región. También se ha obtenido el tejido de lazos de confianza y solidaridad entre los diferentes procesos que se consolidan en las diferentes zonas, que tienen problemáticas similares y que están haciendo cosas para contrarrestarlas, lo que ayuda a que no se sientan solos y revitaliza las organizaciones y líderes locales.

Por otra parte, en estos años de trabajo y luchas, el Movimiento ha cultivado varios logros en la defensa de nuestros bienes comunes naturales. Sin embargo, no deja de ser preocupante que cada año, por poner un ejemplo, se incrementen los pedidos de uso del agua para la generación de energía.



**Imagne 2: Mística y encuentros colectivos del Movete.  
Asamblea 2018. Carmen de Viboral.  
Archivo del Movete.**

Por último, en estos años de trabajo se han logrado identificar y discutir sobre nuevas temáticas generadoras de conflictos socioambientales en el territorio. Aunque aún faltan algunos aspectos por profundizar, problemáticas como la de los agrotóxicos, la presión por la expansión urbanística, las políticas de conservación y los monocultivos se han ido sumando a las temáticas anteriormente tratadas como la generación de energía, la minería, la soberanía alimentaria, la integración territorial y la memoria. Se destaca el avance que desde lo político y académico han tenido estos temas.

### ***Reflexión colectiva de aspectos a mejorar***

Hay que fortalecer el trabajo zonal que como movimiento nos hemos proyectado: páramos, altiplano, bosques y aguas. En la Asamblea se reflexionó sobre los desequilibrios que se presentan entre las zonas, teniendo en cuenta que en unas se ha avanzado más que en otras, y que por las condiciones económicas o de capacidad emergen desbalances.

Precisamente, por el no fortalecimiento del trabajo zonal y local, se ha desconocido la visibilización de estrategias políticas desde las comunidades en algunas localidades. En otros territorios, se ha reconocido la participación en los diferentes festivales del agua, pero desde el aspecto local se están realizando acciones de defensa y propuesta territorial, sobre las cuales no se ha profundizado su visibilización. Además, la capacidad del Movimiento, desde el trabajo local, algunas veces se ha centrado solamente en participar del Festival del Agua u otros encuentros regionales, pero no en el fortalecimiento organizativo local desde problemáticas propias, a las cuales hay que estar permanentemente haciéndole seguimiento y resistencia.

Los recursos económicos son imprescindibles para el desarrollo del trabajo político en la región. Ha faltado centrar esfuerzos en dicha tarea, en función de fortalecer apuestas de economía propia y demás estrategias económicas que po-

sibiliten mejorar el trabajo político local. Lo anterior es fundamental para consolidar propuestas y acciones desde la comunidad, con un acompañamiento significativo de líderes y lideresas, donde sus esfuerzos de apoyo a la organización del Movete permitan tejer desde abajo y junto a las propuestas locales del territorio.

Si bien desde el Movete la articulación regional ha sido un aspecto importante para el fortalecimiento del Movimiento y la lucha por la vida en el territorio, es necesario profundizar sobre la necesidad de articular el trabajo con procesos de otras regiones que planteen alternativas al desarrollo en el país. Entendemos que la lucha no solo es en nuestra región, y que urge la acción solidaria y conjunta para que las condiciones sociales, políticas y económicas en el país cambien.

También, en algunos municipios, los campesinos y los líderes no se reconocen como sujetos políticos del Movete, por lo que es necesario fortalecer la identidad del Movimiento y la propuesta política comunitaria, donde las comunidades son las protagonistas tanto para la defensa como para la propuesta. El empoderamiento local es un pilar fundamental para consolidar un movimiento articulado regionalmente, pero organizado desde las condiciones y particularidades propias de cada municipio, proceso, vereda, zona y territorio. Es decir, hay que trabajar en una mayor apropiación para un mejor compromiso de defensa. Esto porque muchas veces surgen tensiones al interior a causa de pensamientos como “lo que no siento como propio, no me duele y no me mueve para defenderlo”, por lo que es importante fortalecer la identidad territorial y entender la región desde elementos comunes para acciones comunes, que nos permitan que lo que se haga en una zona, contribuya a la defensa de la otra.

Si bien uno de los ejes temáticos de discusión en el territorio ha sido la minería y extracción de diversos materiales, como Movimiento ha faltado fortalecer más el estudio y las acciones frente a esta problemática, que avanza en la medida en

que se logran los respectivos licenciamientos para la explotación y extracción en el territorio. Por un lado, falta trabajar más desde las comunidades en el reconocimiento de esta tensión, así como en el acompañamiento y estrategias que permitan la permanencia en el territorio, que conlleven a su vez a identificar qué afectaciones generan en la región estas prácticas mineras, para qué, por qué y quiénes son los actores implicados.

Por otra parte, desde las líneas estratégicas de acción, si bien hay una reunión ampliada mensual, donde participan líderes y lideresas de los procesos y municipios de la región, falta mejorar la comunicación al interior del Movimiento. Esto para que los debates y construcciones colectivas puedan trascender los medios virtuales y se pueda ampliar la participación hacia las comunidades en las diferentes comisiones que dinamizan las apuestas del Movete.

También hemos centrado esfuerzos en el aspecto formativo en el área de la comunicación comunitaria, pero debemos profundizar sobre la articulación de quienes se forman como comunicadores, que lleguen a los procesos locales para la visibilización desde la prensa, la radio, la fotografía, las redes sociales y demás estrategias comunicativas.

También desde las acciones legisladas y no-legisladas, el Movimiento ha impulsado marchas, cabildos, foros, festivales, asambleas y demás, y es importante proyectar acciones de movilización con objetivos claros y que sean estratégicas para presionar el modelo y lograr sentar a Cornare para presentar nuestras exigencias. Muchas veces las acciones han sido de carácter coyuntural, y no logran cobijar otros temas de fondo necesarios a discutir desde el Movete.

Por último, como movimiento debemos fortalecer el aspecto de las acciones jurídicas en dos temas: primero, respecto a la búsqueda de información o exigencia de la mismo alrededor de los proyectos. En segundo lugar, desde una mirada

de los de los Derechos Humanos, en tanto la situación del país sobre los líderes y lideresas sociales se ha complejizado mucho más y los asesinatos o amenazas en vez de disminuir, aumentan. Es importante, que el Movete fortalezca la línea de los defensores y defensoras del territorio.

### **Tejiendo caminos de resistencia y organización popular**

Como Movimiento nos reconocemos como un actor social clave en lo local y regional en el Oriente antioqueño, que ha venido ganando cada vez mayor protagonismo por las discusiones y los espacios que promueve, incluso en el ámbito departamental y nacional. En el trabajo asambleario realizado en 2018 el Movimiento se planteó algunos temas que aportan al fortalecimiento del proceso, al cumplimiento de la misión y los objetivos anteriormente descritos, y que ayudan a la consolidación de sus líneas de acción.

Hemos ido trabajando en el marco de los conflictos socioambientales, asociados a los proyectos de hidroenergía, minería, agrotóxicos y las afectaciones en los suelos del territorio, políticas de conservación, delimitación de páramos y áreas protegidas, que se contraponen a prácticas de soberanía alimentaria y agroecología. Consideramos que la memoria en el territorio ha sido un eje transversal en todas las líneas de acción y defensa política del mismo, y entendemos que la generación de proyectos de desarrollo en la región ha estado asociada a la agudización del conflicto armado.

Con el tiempo han empezado a aparecer otros temas o problemáticas a las que el movimiento empieza a hacer seguimiento: los acueductos y los procesos de autogestión comunitaria, las políticas públicas alrededor del agua, la expansión urbanística y la gentrificación de la región, el crecimiento verde, entre otros. En ese sentido, ha surgido la necesidad de incidir en los planes (o esquemas) de ordenamiento territorial y los planes de desarrollo locales. Por ejemplo, poner la discusión en los POMCA (Plan de Ordenamiento y Manejo

de una Cuenca) como herramienta que aporte al blindaje del territorio frente a los proyectos extractivos. También, la necesidad de la recuperación y el intercambio de las semillas nativas como vehículo social para consolidar la soberanía alimentaria de la región.

En estos años de trabajo, el Movete ha puesto en discusión los anteriores temas en la agenda pública del Oriente antioqueño. Así mismo, ha buscado (en los últimos tiempos) visibilizar y reconocer los liderazgos anteriores al Movimiento, como el caso del Movimiento Cívico del Oriente, Oriente Unido, la Asamblea de Bosques, el Equipo Departamental de Servicios Públicos y Pobreza, entre otros, que han trabajado en torno a la defensa del territorio, entendiendo que en la actualidad este continúa con su legado.

Por otro lado, planteamos la necesidad de avanzar en la consolidación de un enfoque de género del Movimiento. También, avanzar en la construcción de una agenda comunitaria y ciudadana del territorio, que permita al proceso discutir e incidir en los programas de gobierno y políticas públicas de la región, y que se convierta en una hoja de ruta para el trabajo de la defensa del territorio de manera prospectiva.

Siendo así, a continuación presentamos algunas de las apuestas que tiene el Movete para el trabajo de la defensa del territorio en los próximos años, a partir de las líneas estratégicas que el Movimiento construyó en su plan estratégico. Estas propuestas parten de la construcción colectiva, de los aportes de los líderes y lideresas locales, y de la toma de decisión en grupo en la Asamblea regional del Movimiento en el año 2018:

### **Fortalecimiento organizativo**

El movimiento tiene importantes avances en el fortalecimiento de algunos nodos locales en 11 municipios del Oriente antioqueño:

- **Zona de páramos:** Argelia, Nariño y Sonson.
- **Zona altiplano:** La Unión, el Carmen de Viboral y El Santuario.
- **Zona de aguas:** San Carlos y Granada.
- **Zona de bosques:** Cocorná, San Francisco y San Luis.

Así mismo, tiene acercamiento en otros procesos municipales: Alejandría, Marinilla, Rionegro y San Vicente. Sin embargo, se hace necesario fortalecer el trabajo y el acompañamiento en los restantes municipios, así como establecer un trabajo por zonas y por temáticas que permita a su vez aunar esfuerzos en ámbitos más locales en la defensa del territorio. En este sentido, es importante revisar y fortalecer cada uno de los nodos locales de los municipios.

Es necesario habilitar un espacio de discusión tipo encuentros y reuniones ampliadas en relación a los ejes temáticos: hidroeléctricas, minería, monocultivos, economía campesina, expansión urbana, urbanismo, áreas protegidas, mecanismos de participación, esquemas o planes de ordenamiento territorial, y equidad de género. Es urgente que dentro del plan contemplemos espacios de mayor difusión sobre estos temas.



**Imagen 3: Lideresa comunitaria de la región del Oriente antioqueño. Archivo Tulpa Comunitaria.**

Además, hay que fortalecer la interlocución de Movete en lo local y regional. El equipo local que debemos ir consolidando debe ser quien acompañe como Movete espacios en los territorios como las juntas de acción comunal. Si bien es importante reconocer y destacar los esfuerzos de los procesos locales, pues en el ámbito articulador, quienes construyen Movete son precisamente los líderes, lideresas y procesos locales y comunitarios, es importante que estos fortalezcan y visibilicen al Movete en sus acciones territoriales. De esta manera, se hace imprescindible la interlocución política como Movete en lo local, regional y nacional.

Apremia convocar asambleas comunitarias por municipios como un ejercicio histórico de los procesos cívicos y populares de la región (quienes organizaban asambleas cívicas locales<sup>41</sup>), para generar mayores escenarios de unidad, el reconocimiento de los actores y la creación colectiva de estrategias para la defensa del territorio, y de prácticas de vida digna en el mismo.

### **Formación e investigación comunitaria**

Se hace necesario crear un instrumento para filtrar la información a la que podamos tener acceso. En este se incluyen los derechos de petición, respuestas de tutelas, información oficial y demás, para que sea un insumo de visibilización y formación y puedan las comunidades luchar desde elementos y argumentos concretos. También, lograr diseñar una matriz que permita sistematizar la información, trabajos académicos y demás, para compartir conocimiento desde todos los procesos.

Es importante comenzar a diseñar una estructura y plan de formación interno para el Movete. Además, es indispensable crear unos procesos de lecturas propias desde las comunidades, que nos posibiliten permanentemente estar contextualizados de lo que sucede y cómo actuar frente a ello. En ese sentido, se deben ampliar los espacios formativos con niños, niñas y jóvenes de toda la región.

41 Ahora Asambleas Unitarias por el territorio.

or otro lado, es imprescindible unificar propuestas y enfoques políticos en la región desde el Movete. Cuando los debates al interior del Movimiento se realizan, se hacen con el objetivo de crear posiciones comunes, que desemboquen en propuestas desde lo local, fortaleciendo el trabajo desde lo colectivo respecto a cada uno de los ejes temáticos.

Por último, es necesario continuar con los ejercicios colectivos de sistematización e investigación acción participativa, buscando construir nuestra historia desde abajo, desde la junta, la vereda, la localidad, las zonas y la región, donde los procesos comunitarios no se quedan en la posición de aportar información, sino que tejan propuestas de creación de lo que hacen desde sus territorios para ejercer resistencia y apuestas alternativas al desarrollo, y se convierten en hacedores –desde los libros, la radio, la prensa, el periódico, la cartilla, boletines, fanzine y demás– autónomos de su propia historia y las decisiones sobre su territorio.

### ***Mobilización e incidencia política y social***

Es una prioridad establecer agenda de movilización y de participación en las convocatorias nacionales y regionales, en aras de organizarnos en los próximos años en términos de capacidades, recursos y objetivos tácticos de exigencia, lucha y resistencia. También se deben tener en cuenta las fechas anuales importantes en el marco de la movilización, pues es interesante comenzar a interactuar en términos de movilización con otras y otros.

En ese mismo sentido, se deben proyectar acciones simultáneas, para que cuando se haga una acción en un municipio se intente realizar también en otros lugares de la región, para potencializar los procesos locales y posicionar las problemáticas ambientales en las diferentes agendas que se presenten.



***Imagen 4: Mobilización X Festival del agua, municipio de San Francisco. Archivo Tulpa Comunitaria.***

Además, empezar a establecer claramente un pliego de exigencias frente a los conflictos socioambientales en el territorio para presentar a la institucionalidad a la cual resistimos. En este caso, podría ser frente a Cornare (CAR), Ministerio del Medio Ambiente, EPM, ANLA, entre otras.

Por último, impulsar y reconocer autoridades territoriales propias, como las guardias campesinas y comunitarias, y los referentes de lucha representados en personas que han persistido históricamente en la defensa de nuestra región.



**Imagen 5: Flor Gallego y Beatriz Gómez. Líderesas de la región del Oriente antioqueño e integrantes del Movete desde los procesos locales de La Unión y El Carmen de Viboral. Archivo de la Tulpa comunitaria.**

### **Acciones jurídicas y exigencia de garantías para defensores y defensoras del Oriente antioqueño**

Como se decía, es necesario fortalecer el campo de los derechos humanos y la acción jurídica. Se requiere hacer un equipo de acompañamiento jurídico tanto para la defensa de los derechos humanos como para el acompañamiento en las acciones de incidencia política directa. Además, impulsar y fortalecer los mecanismos legislados y no legislados de participación.



**Imagen 6: Bloqueo y Marcha Carnaval por la autopista Medellín – Bogotá (Sector La Piñuela). X Festival del Agua, municipio de San Francisco. Archivo Tulpa Comunitaria.**

En ese sentido, se debe profundizar en la participación comunitaria y los acuerdos municipales respecto a mecanismos legislados como foros, cabildos, derechos de petición, audiencias públicas y demás. Esto en aras de crear estrategias en cada uno de los territorios con sus respectivas problemáticas, para seguir incidiendo en el ámbito municipal en la defensa de la región e implementación de acuerdos comunitarios municipales.

## **Comunicación comunitaria**

Hay que buscar estrategias de acercamiento a las comunidades desde las prácticas comunicativas y político-comunitarias propias de la cultura campesina. Es necesario generar cambios en el lenguaje. Por poner un ejemplo, además de decir “No a la hidroeléctrica”, es decir “Sí a las aguas y la dignidad en el territorio”. Además, potenciar los espacios de la formación de comunicadores comunitarios e impulsar acciones de incidencia comunicativa en cada uno de los municipios. Es decir, que no solo se abran espacios de formación, sino que estos desemboquen en la articulación de quienes se forman a los procesos locales, para lograr que a través de cada una de las líneas como prensa, radio, fotografía y demás, se puedan visibilizar estrategias de defensa del territorio y construcción colectiva de los sueños en el mismo.

## **Gestión de recursos**

Desde el aspecto interno del Movete, es significativo fortalecer la economía propia para el aporte de recursos que posibiliten financiar los planes de acción del Movimiento, y que contribuyan a unificar esfuerzos desde los procesos, líderes y lideresas para un trabajo más efectivo y continuo en los distintos territorios de la región del Oriente antioqueño.

En el ámbito externo, cabe mencionar que en la historia de la región han existido unas prácticas de autogestión comunitarias, que consideramos podemos retomar y defender como una medida de rechazar el asistencialismo del Estado, las empresas y demás que conllevan a la no auto organización de las comunidades. Expresiones populares de autogestión y economía propia como los bingos, las rifas, las ferias campesinas y agroalimentarias, el trueque, entre otras, permitirán al Movimiento consolidar procesos locales y la ampliación de los circuitos económicos cortos para el beneficio de las propias comunidades.

Por otra parte, podemos generar capacitaciones para pensarnos sistemas participativos de calidad de lo que las comunidades producen. En ese sentido, para ampliar la financiación del Movimiento, hay que pensar una articulación regional más activa y efectiva desde lo que las comunidades mismas pueden aportar e intercambiar: mercados campesinos, ferias agroalimentarias, festivales culturales y artísticos, tiendas comunitarias, intercambio y venta de semillas nativas, abonos orgánicos y demás.

\*\*\*

Si bien estas propuestas en el camino deben irse reconfigurando, profundizando y aterrizando más a nuestras capacidades, no son las únicas que permitirán acercarse a los objetivos políticos y estratégicos del Movete. Esto es un avance de uno de los movimientos sociales de la región del Oriente antioqueño. Queremos continuar la lucha por el territorio, y es necesario seguir gestando ideas concretas, sembrando semillas de vida y resistencia contra el extractivismo, para cosechar permanentemente mandatos populares que garanticen la unidad, la dignidad y la vida en la región.

Así pues, para finalizar queremos presentar nuestra declaración política, construida desde el Movimiento en el X Festival del Agua realizado en el municipio de San Francisco, donde nos centramos en la necesidad de construir propuestas alternativas al desarrollo. Aquí plasmamos en cada uno de los ejes temáticos y de manera general, decisiones populares que, desde abajo y junto a las comunidades, ejercemos y cumpliremos para la defensa de la vida y de nuestra madre tierra, por una paz con justicia social y ambiental:

## **Declaratoria política, Décimo Festival del Agua, Sembramos en el territorio propuestas para la vida digna, municipio de San Francisco**

*“Soy un campesino de a pie, y llevo una montaña por dentro”*

De nuevo, como desde hace diez años, las comunidades, procesos de base, organizaciones sociales y populares del Oriente antioqueño nos hemos reunido a discutir y a movilizarnos en torno a la defensa de nuestra región. Sin embargo, esta vez el encuentro lleva un sentido fundamental, el de empezar a avanzar en la construcción de propuestas para la vida digna, como un eje estratégico que nos permita garantizar condiciones de permanencia en los territorios y como una forma de resistir frente al modelo extractivista de despojo, violencia y muerte que viene arrasando con nuestros bienes comunes, culturas y comunidades orientales.

Este décimo Festival nos deja una invitación al encuentro con la memoria y el territorio. La memoria como esa posibilidad de encontrarnos con las luchas del pasado, de reconocernos en los procesos sociales que nos han antecedido en la defensa y construcción popular de nuestra región; es hora de retomar el legado del Movimiento Cívico y el Oriente Unido expresado por uno de sus más grandes gestores, Ramón Emilio Arcila, en la máxima de pasar “de la protesta a la propuesta, sin dejar de protestar”.

Es por ello que las comunidades participantes del X Festival del Agua mandamos:

- Discutir un modelo energético diferente, que posibilite una transición energética donde no sea necesario el represamiento de la vida y de nuestros ríos.
- Avanzar en el estudio jurídico para impulsar una propuesta de reconocimiento de la cuenca del Samaná Norte y el Páramo de Sonsón como sujetos de derecho;

esto aprendiendo de las experiencias que otros pueblos han adelantado en la defensa del territorio, como en el caso del río Atrato en el Chocó.

- Fortalecer e impulsar propuestas de economía propia, campesina y solidaria, a partir de la construcción de circuitos económicos que conecten lo local/regional, generando un comercio justo y una relación directa productor-consumidor. Recogiendo experiencias como la de Asociación Campesina de Antioquia y la de municipios como el Carmen de Viboral, Argelia y Santuario con los mercados y ferias campesinas.
- Fortalecer y apoyar los acueductos comunitarios de nuestros barrios y veredas, como una forma de autogestión comunitaria del agua. Elemento clave en la apropiación de nuestros bienes comunes.
- Profundizar en el fortalecimiento de las comunidades que defienden el territorio desde el turismo ecológico y comunitario. Esto, como una forma de garantizar condiciones para la permanencia en él. Nuestra apuesta es reivindicar la identidad campesina, la soberanía alimentaria y el cuidado de nuestros bienes comunes.
- Impulsar y reconocer autoridades territoriales propias, como las guardias campesinas y comunitarias, y los referentes de lucha representados en personas que han persistido históricamente en la defensa de nuestra región.
- Persistir en la movilización social, la protesta y las acciones directas, como un mecanismo no legislado de defensa del territorio; articulado a movilizaciones nacionales para confrontar con mayor ímpetu al modelo extractivista en Colombia.

- Los ríos nos articulan en la lucha. El Movete debe asumir una defensa estratégica, como movimiento de carácter regional, de la cuenca Samaná Norte, donde desembocan los ríos Dormilón, Río Verde, Santo Domingo, Calderas, El Melcocho, entre otros, que atraviesan distintos municipios del Oriente antioqueño. Nos unimos a la lucha local de San Carlos por la defensa del río Samaná, bien común de toda la región.

Por la defensa y la Vida del Territorio: ¡Movete pues!

San Francisco, 28 de octubre de 2018.

## **Reflexión final: La lucha es por la vida**

*Omar Andrés Osorio García - Tulpa Comunitaria*

Toda la información plasmada en el presente libro hace parte de un acumulado y articulación de voces de memorias y resistencias. Nuestro movimiento es ampliamente diverso, y en el camino nos hemos topado con nuevas ideas, experiencias, ejes temáticos, procesos y demás, que están presentes en el marco de la defensa del territorio.

Esperamos –aunque no deja de ser necesario– no quedar estancados en construir apuesta de defensa de la vida, sino avanzar hacia la consolidación de un Movimiento que desde todas las voces, manos, pies, corazones y mentes, teja una propuesta de poder contra hegemónico desde los territorios.

Somos un granito de arena más que escribe, teje y defiende la historia de las luchas populares de la región. Este es un ejercicio que atraviesa la Investigación Acción Participativa (IAP), donde los mismos procesos que aquí presentamos nuestras ideas, en el día a día, codo a codo, continuamos resistiendo por la vida y con la vida. La pelea es larga, recogemos la batuta –no la única, precisamente porque reconocemos otras luchas de otros procesos de la región, con quienes esperamos encontrarnos para juntar propuestas y sueños– de nuestros ancestros; el pensamiento crítico latinoamericano; la lucha cívico y popular de la región; la his-

toria de la digna rabia y alegre rebeldía del campesinado colombiano; los procesos indígenas y su mensaje de liberación de la madre tierra; las enseñanzas de comunidades negras que, con sus sabores y sonrisas, avanzan en el rompimiento de las cadenas, y su expresión de resistencia de los últimos tiempos con el ejemplo al renacer los paros cívicos y comunitarios.

¡El pueblo no se rinde carajo! Esta es la consigna de resistencia y entrega –de ser necesario– de la vida por garantizar mayor dignidad y el bienestar de las comunidades, las aguas, bosques, montañas y pueblos de la región del Oriente antioqueño.

Movimiento Social por la Vida y la Defensa del Territorio.  
¡Movete Pues!

## La vida campesina en el Oriente antioqueño



**Fotógrafo:**

*Esteban Valencia*

**Descripción:**

*Esta fotografía fue tomada en el corregimiento de Santa Ana en el municipio de Granada. Quien abre camino entre el matorral es un campesino llamado Guillermo, de los pocos que permaneció en el corregimiento después del desplazamiento masivo por la violencia.*



**Fotógrafo:**  
Milton Giraldo

***“Luz de vida” Samuel Giraldo Campesino de la vereda los potreros de Cocorná ilumina con luz artificial sus polluelos recién nacidos.***



**Fotógrafo:**  
Esteban Valencia

***Francisco reposa la jornada laboral; campesino cafetero de la vereda el Guai-co, punto limítrofe entre el municipio de La Ceja y Abejorral.***



**Fotógrafo:**  
Fabián Rendón M

Vereda El Porvenir, El Carmen de Viboral- Cañón del río Melcocho. Un paraíso terrenal.



**Fotógrafo:**  
Estefanía Arroyave Davila

Para la familia Urrea, pobladora del oriente antioqueño, el trabajo de la madera es bastante arduo y es necesario el trabajo cooperativo de varias personas. Ellos también han reconstruido sus condiciones socioeconómicas con base en lo que alguna vez les fue arrebatado, pero luego, con la tenacidad de los mayores, vieron cómo el negocio de la madera se fue haciendo próspero.



**Fotógrafo:**  
Erika García

*El ordeño es una de las prácticas más comunes en el municipio de La Unión y los campesinos se valen de diversos medios de transporte para llevar los tanques, uno de ellos es el coche por para Don Carlos, su hijo y su mascota ya es construmbre hacer este recorrido. (vereda Quebrada Negra)*



**Fotógrafo:**  
Norvey Echeverri

*Sin pensión ni salud, por 35 mil pesos diarios, sin importar si llueve o hace sol, hombres como él lavan papa y siembran alveja, maíz y cebollín en el municipio de Sonsón.*



**Fotógrafo:**  
Norvey Echeverri

*Carlos Enrique Osorio, campesino de la vereda La Milagrosa, en el Carmen de Viboral, después de trabajar durante dos décadas con agroquímicos y notar problemas de salud, decidió cambiarse a la agroecología. Actualmente es un referente en el tema en el Oriente de Antioquia y el mundo.*



**Fotógrafo:**  
Estefanía García Marín y Marcela Lopera Londoño

*Las personas aquí retratadas son Luz Estella García y su padre Julio César García, quienes hacen parte de una familia conformada por seis personas; ellos día tras día, sin hacer distinción de lo que dicte el calendario, alimentan a sus vacas, quienes de manera recíproca, los alimentan a ellos, dejando entrever el diálogo existente entre el hombre y la naturaleza. (Peñol Antioquia, en la vereda El Salto)*



**Fotógrafo:**  
Milton Giraldo

*“Quesito del alma” Quesito hecho por las manos de Doña clementina, más sabroso que ninguno, con propiedades alimenticias únicas, se dice que tras comer un quesito del alma, se es feliz para siempre.*



**Fotógrafo:**  
Leidy Gomez

*Doña Ediviges ha sido símbolo de resiliencia en el municipio de La Unión. Es orgullosamente campesina y aunque tuvo que desplazarse de la vereda San Miguel Santa Cruz y perdió a su esposo y dos hijos por el conflicto armado, decide retornar a la vereda en el 2004 luego de haber estado 4 años lejos de su tierra.*



**Fotógrafo:**

Miguel Ángel Romero

*Nohelia es una de las mujeres que retornó de la ciudad a la vereda Chocó, en San Carlos. Un retorno agridulce que le significó regresar a los quehaceres de la tierra, pero a su vez perder a un amor, a pesar de esto ella permanece firme como su espíritu campesino.*



**Fotógrafo:**  
Esteban Valencia

*Familia campesina (Padre e hijos) que se negaron a ser desplazados, como el resto de la población, de la vereda El Oso en el municipio de Granada.*

Un proyecto de:



**Tulpa**  
Comunitaria



ISBN: 978-958-56839-6-9



Participan:

